

GACETA OFICIAL

02 MAY 2008

DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

AÑO CXXXV — MES VII

Caracas, miércoles 30 de abril de 2008

Número 38.921

SUMARIO

Asamblea Nacional

Acuerdo mediante el cual se designa al ciudadano Héctor Acosta, representante de la Asamblea Nacional ante el Consejo Nacional de Universidades.

Acuerdo con motivo de la Beatificación de la Madre Candelaria de San José.

Acuerdo con motivo de conmemorarse el 1º de mayo, Día del Trabajador.

Presidencia de la República

Decreto Nº 6.051, mediante el cual se nombra Ministro del Poder Popular para la Educación, al ciudadano Héctor Navarro Díaz.

Decreto Nº 6.052, mediante el cual se fija el Salario Mínimo Mensual obligatorio para las Trabajadoras y Trabajadores que presten servicios en los Sectores Público y Privado.

Decreto Nº 6.053, mediante el cual se ajusta el Tabulador General de salarios para el Personal Calificado como obrero u obrera al servicio de la Administración Pública Nacional.

Decreto Nº 6.054, mediante el cual se aprueba la Escala de Sueldos para Cargos de las Funcionarias y Funcionarios Públicos de Carrera, aplicable al Sistema de Clasificación de Cargo que rige la Carrera Funcionarial de la Administración Pública Nacional.

Decreto Nº 6.055, mediante el cual se establece el Sistema de Clasificación de Cargos que rige la Carrera Funcionarial, contenido de los requisitos mínimos de ingreso a las clases o grupos de cargos de la Administración Pública Nacional.

Decreto Nº 6.056, mediante el cual se designa al ciudadano Freddy Jesús Fernández Torres, como Viceministro de Estrategia Comunicacional del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información.

Decreto Nº 6.057, mediante el cual se nombra Ministra del Poder Popular para la Ciencia y Tecnología, a la ciudadana Nuris Orihuela Guevara.

Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia

Resolución mediante la cual se dispone, que a los fines de continuar con las gestiones iniciadas tendientes a cumplir con los postulados de la Ley de Geografía, Cartografía y Catastro Nacional a través del Convenio Marco en referencia, y una vez leído su contenido, se suscribe este documento en señal de conformidad formando parte integrante del mismo.

Resoluciones por las cuales se designan a los ciudadanos que en ellas se señalan, en los cargos que en ellas se especifican.

Ministerio del Poder Popular para las Finanzas Oficina Nacional de Presupuesto

Providencia por la cual se aprueba el Presupuesto de Ingresos y Gastos 2008 de la empresa Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA).

Ministerios del Poder Popular para las Industrias Ligeras y Comercio, para la Agricultura y Tierras y para la Alimentación
Resolución por la cual se fija en todo el territorio nacional el Precio Máximo de Venta al Público (PMVP) del pollo beneficiado.

Ministerio del Poder Popular para la Salud

Resolución por la cual se designa al ciudadano Luis Perpetuo Osuna Camillo, como Director General (E) de Cooperación Técnica y Relaciones Internacionales.

Resolución por la cual se deroga la Resolución Nº 088, de fecha diez (10) de abril de 2008.

Ministerio del Poder Popular para la Energía y Petróleo

Resolución por la cual se designa al ciudadano Hugo Espaillet Camillo, como Director General de Petroquímica.- (Se reimprime por error material del ente emisor).

Ministerio del Poder Popular para la Planificación y Desarrollo
Resolución por la cual se designa al ciudadano Gustavo Enrique Santana, como Director General (E) de Desarrollo Institucional.- (Se reimprime por error material del ente emisor).

Resolución por la cual se designa al ciudadano Julio César Pérez, como Director General, de la Dirección General de Planificación de Corto Plazo.

Ministerio del Poder Popular para la Economía Comunal
Resolución por la cual se procede a la Publicación del Traspaso Presupuestario de Gastos de capital de este Ministerio.

Ministerio del Poder Popular para la Vivienda y el Hábitat
Resolución por la cual se designa como miembro suplente de la Junta de Reestructuración del Instituto Nacional de la Vivienda (INAVI), al ciudadano Erbinson José López Uray.

Tribunal Supremo de Justicia

Acuerdo mediante el cual se jubila al ciudadano Jesús Eduardo Cabrera Romero.

Resolución por la cual se delega en los ciudadanos que en ella se señalan, la potestad de sostener la acusación disciplinaria que en ella se especifica.

Dirección Ejecutiva de la Magistratura

Resoluciones por las cuales se designan a los ciudadanos que en ellas se señalan, en los cargos que en ellas se indican.

Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial

Sentencias dictadas por esta Comisión.- (Dres Humberto Brito Brito, Ada Raquel Caicedo Díaz, David Alejandro Cestari Ewing y Pedro Rafael Méndez Labrador).

Fiscalía General de la República

Resolución por la cual se designa Abogado Adjunto I, al ciudadano Israel Efraín Pérez Vásquez.

ASAMBLEA NACIONAL

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la Ley de Universidades y de acuerdo con lo aprobado en sesión del día 29 de abril de 2008.

ACUERDA

ÚNICO: Designar al ciudadano HÉCTOR ACOSTA, titular de la cédula de identidad Nº 4.237.278, representante de la Asamblea Nacional ante el Consejo Nacional de Universidades.

Comuníquese y publíquese.

Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional, en Caracas a los veintinueve días del mes de abril de dos mil ocho. Año 198º de la Independencia y 149º de la Federación.

CHILIA FLORES

Presidenta de la Asamblea Nacional

SAÚL ORTEGA CAMPOS
Primer Vicepresidente

JOSÉ ALBORNOZ URBANO
Segundo Vicepresidente

IVÁN ZERPA GUERRERO
Secretario

LA ASAMBLEA NACIONAL
DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

ACUERDO CON MOTIVO DE LA BEATIFICACIÓN DE LA MADRE CANDELARIA
DE SAN JOSÉ

Considerando

Que el 11 de agosto de 1863 nace en la población de Altagracia de Orituco, estado Guárico, Susana Paz Castillo Ramírez, hija de Francisco de Paula Paz Castillo y María del Rosario Ramírez, siendo su abuela paterna Doña Candelaria Pérez y Bolívar, prima hermana del Libertador, y a quien más tarde se le conocería como la Madre Candelaria de San José, para la gracia y veneración del gentilicio venezolano;

Considerando

Que las dificultades presentadas por la vida desde muy joven, en modo alguno hizo decaer su disposición a aprender para ayudar, actuando en cada circunstancia de su vida con solidaridad y devota entrega a las obras de caridad en favor de los más necesitados, alejándose de intereses personalistas y demostrando siempre un profundo apego hacia lo social y humanista, siendo su guía el amor y servicio al prójimo como causa de fe, manifiesta entre otras formas, con la dedicada atención a los enfermos y heridos, acción que le llevaría a dirigir el Hospital "San Antonio" en el cual se recluía para cuidar y dignificar, en compañía de otras jóvenes, con vocación religiosa a los enfermos y abandonados;

Considerando

Que el 13 de septiembre de 1906, viste el hábito de las Hermanitas de los Pobres y cambia su nombre por el de Candelaria de San José, integrando posteriormente la Congregación de las Religiosas Carmelitas de la Tercera Orden Regular, en la actualidad Religiosas Carmelitas de la Madre Candelaria, llegando a desempeñarse como Superiora General de la Congregación, desde donde con su humildad, amor y perseverancia continúa su abnegada labor por la fe cristiana y por su pueblo;

Considerando

Que el 31 de enero de 1940, desaparecería físicamente la Madre Candelaria de San José, durmiendo para la vida y naciendo nuevamente para Dios. Sin embargo, la Madre Candelaria no olvidaría a su pueblo, dejando en el camino de su elevación hacia los altares la muestra divina de su amor y compasión, la cual ha sido reconocida por vez primera en tierra venezolana con el proceso de beatificación proclamado por el Papa Benedicto XVI y llevado a cabo por el Cardenal José Saraiva Martins, Prefecto de la Congregación de la Causa de los Santos;

Considerando

Que tan sublime advenimiento en el cual una de nuestras compatriotas es elevada a la condición de Beata, dignidad que comparte con la también reconocida Madre María de San José, es una circunstancia providencial, ya no sólo por lo excelso del mismo acto o por los lazos familiares que unen a la Madre Candelaria de San José con el Padre de la Patria, Simón Bolívar, sino también por la feliz coincidencia de haber estado predestinado a ocurrir en el ejercicio propio del Gobierno Bolivariano.

- ACUERDA**
- PRIMERO:** Unirse al júbilo que embarga al pueblo venezolano por la beatificación de la Madre Candelaria de San José.
- SEGUNDO:** Celebrar el día 1 de febrero como efeméride religiosa de la Beata Madre Candelaria de San José.
- TERCERO:** Extender las felicitaciones del Poder Legislativo Nacional a todos los compatriotas y en especial a los oriundos de Altagracia de Orituco en el estado Guárico, por la beatificación de una hija de esa noble población venezolana.
- CUARTO:** Exhortar a la Iglesia Católica venezolana a agilizar la beatificación del doctor José Gregorio Hernández.
- QUINTO:** Enviar el presente Acuerdo al Monseñor Jorge Urosa Savino, Arzobispo de Caracas.
- SEXTO:** Dar publicidad al presente Acuerdo.

Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional, en Caracas, a los veintinueve días del mes de abril de dos mil ocho. Año 198º de la Independencia y 149º de la Federación.

CILIA FLORES
Presidenta de la Asamblea Nacional

SAÚL ORTEGA CAMPOS
Primer Vicepresidente

JOSÉ ALBORNOZ URBANO
Segundo Vicepresidente

IVÁN ZERPA GUERRERO
Secretario

LA ASAMBLEA NACIONAL
DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

Acuerdo con motivo de conmemorarse el 1º de mayo,
Día del Trabajador

Considerando

Que el 1º de mayo de 1886, Albert Parsons dirigió una manifestación de 80.000 trabajadores a través de las calles de Chicago en contra de la jornada laboral establecida de 12 y 16 horas, exigiendo su reducción a 8 horas diarias;

Considerando

Que el 1º de mayo de 1889 quedó instituido el Día Internacional del Trabajador en la calle Prele de la ciudad de París, durante el Congreso Obrero Socialista de la Segunda Internacional;

Considerando

Que el 1º de mayo de 2008 se conmemoran 122 años de la gesta de Chicago, por la conquista de la jornada laboral de ocho horas;

Considerando

Que la historia venezolana y latinoamericana cuenta por miles la matanza de dirigentes laborales, en la lucha por justas reivindicaciones y la defensa de sus conquistas;

Considerando

Que la lucha por la jornada de ocho horas sigue vigente, tanto por la defensa de la misma como por la exigencia de su reducción, siendo amenazada o violentada por la aplicación de planes neoliberales en gran parte del mundo, que flexibilizan la jornada y otras condiciones de trabajo;

Considerando

Que el Estado venezolano ha desarrollado políticas, planes, leyes y decretos que persiguen revertir la pérdida de los puestos de trabajo, la disminución del poder adquisitivo y las condiciones precarias de los trabajadores y las trabajadoras; de igual manera, procura la mejora sustancial en la seguridad social;

Considerando

Que el papel protagónico de los trabajadores y trabajadoras venezolanos en el proceso revolucionario, ha sido fundamental para la defensa de las empresas estratégicas y se ha evidenciado a través de logros laborales obtenidos en PDVSA, Electricidad de Caracas, CANTV, SIDOR, C.A. y Cooperativas Agroalimentarias, e impulsados por las organizaciones sindicales que representan la masa trabajadora de nuestra Patria Socialista;

Considerando

Que el proceso Revolucionario Bolivariano transita por un momento histórico-político, en el cual los trabajadores y trabajadoras y sus organizaciones sindicales deben incorporarse, con sus mejores aportes, a la revisión, ratificación y reimpulso que implica el fortalecimiento y la unión de la clase trabajadora venezolana.

- ACUERDA**
- PRIMERO:** Acompañar a los trabajadores y trabajadoras de las ciudades y el campo en las actividades que están convocando las organizaciones sindicales, en conmemoración del 1º de mayo de 2008.
- SEGUNDO:** Resaltar las iniciativas sindicales que plantean conmemorar el 1º de mayo por la construcción de una Venezuela socialista, protagónica, participativa, multipolar y de todos los venezolanos.
- TERCERO:** Reconocer y felicitar el carácter patriótico, democrático y revolucionario de las trabajadoras y los trabajadores venezolanos.
- CUARTO:** Condenar las prácticas imperialistas de explotación laboral, así como la aplicación de planes neoliberales que se pretenden imponer en gran parte del mundo.
- QUINTO:** Dar publicidad al presente Acuerdo.

Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional, en Caracas, a los veintinueve días del mes de abril del año dos mil ocho. Año 198º de la Independencia y 149º de la Federación.

CILIA FLORES
Presidenta de la Asamblea Nacional

SAÚL ORTEGA CAMPOS
Primer Vicepresidente

JOSÉ ALBORNOZ URBANO
Segundo Vicepresidente

IVÁN ZERPA GUERRERO
Secretario de la Asamblea Nacional

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Decreto Nº 6.051

29 de abril de 2008

HUGO CHAVEZ FRIAS
Presidente de la República

En ejercicio de la atribución que me confiere el numeral 3 del artículo 236 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

DECRETO

Artículo Único. Nombro Ministro del Poder Popular para la Educación, al ciudadano **HECTOR NAVARRO DIAZ**, titular de la cédula de identidad Nº 3.714.184, a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Dado en Caracas, a los veintinueve días del mes de abril de dos mil ocho. Años 198º de la Independencia, 149º de la Federación y 10º de la Revolución Bolivariana.

Ejecútese,
(L.S.)

HUGO CHAVEZ FRIAS

Decreto Nº 6.052

29 de abril de 2008

HUGO CHAVEZ FRIAS
Presidente de la República

En ejercicio de las atribuciones que le confieren los numerales 11 y 24 del artículo 236 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con lo previsto en los artículos 80 y 91 *ejusdem*, 2º, 13, 22 y 172 de la Ley Orgánica del Trabajo, 84, literal c) y 69 de su Reglamento, en Consejo de Ministros,

CONSIDERANDO

Que es obligación del Estado garantizar el derecho de la trabajadora y del trabajador a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia, las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales, siendo una parte del logro de la mayor suma de felicidad posible que el Libertador legó como objetivo de la nación,

CONSIDERANDO

Que la República Bolivariana de Venezuela ha suscrito y ratificado los Convenios números 26, 95 y 100 de la

Organización Internacional del Trabajo (O.I.T.), relativos al establecimiento de métodos para la fijación de salarios mínimos, a la protección del salario y a la igualdad de remuneración entre la mano de obra femenina y masculina, por un trabajo de igual valor, respectivamente,

CONSIDERANDO

Que debe mantenerse, para cumplir con el compromiso democrático, la igualdad, la política de recuperación sostenida del poder adquisitivo de la población venezolana, así como la dignificación de la remuneración del trabajo, y de igual manera el desarrollo de un modelo productivo endógeno, capaz de generar empleos estables y de calidad.

DECRETA

Artículo 1º. Se fija como salario mínimo mensual obligatorio para las trabajadoras y los trabajadores que presten servicios en los sectores público y privado, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 2º de este Decreto, la cantidad mensual de **SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE BOLIVARES FUERTES CON VEINTITRES CENTIMOS (Bs.F. 799,23)**, equivalente a la cantidad diaria de **VEINTISEIS BOLIVARES FUERTES CON SESENTA Y CUATRO CENTIMOS (Bs.F. 26,64)** por jornada diurna, a partir del 1º de mayo de 2008.

El salario mínimo obligatorio corresponderá a las trabajadoras y trabajadores urbanos, rurales, domésticos y de conserjería, independientemente del número de trabajadores que presten servicios para el patrono.

Artículo 2º. Se fija como salario mínimo para los adolescentes aprendices, de conformidad con lo previsto en el Capítulo I del Título V de la Ley Orgánica del Trabajo, la cantidad mensual de **QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE BOLIVARES FUERTES CON CUARENTA Y TRES CENTIMOS (Bs.F. 599,43)**, equivalente a la cantidad diaria de **DIECINUEVE BOLIVARES FUERTES CON NOVENTA Y OCHO CENTIMOS (Bs.F. 19,98)**, a partir del 1º de Mayo de 2008.

Artículo 3º. Los salarios mínimos fijados en los artículos anteriores, deberán ser pagados en dinero efectivo y no comprenderán como parte de los mismos, ningún tipo de salario en especie.

Artículo 4º. Se fija como monto mínimo de las pensiones de los jubilados y pensionados de la Administración Pública Nacional, el salario mínimo obligatorio establecido en el artículo 1º del presente Decreto.

Artículo 5º. Se fija como monto mínimo de las pensiones otorgadas por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), el salario mínimo obligatorio establecido en el artículo 1º del presente Decreto.

Artículo 6º. Cuando la relación de trabajo se hubiere convenido a tiempo parcial, el salario estipulado como mínimo podrá someterse a lo dispuesto en el artículo 194 de la Ley Orgánica del Trabajo, en cuanto fuere pertinente.

Artículo 7º. El pago de un salario inferior a los estipulados como mínimos por este Decreto, será sancionado de conformidad con lo establecido en el artículo 627 de la Ley Orgánica del Trabajo.

Artículo 8º. Se mantendrán inalterables las condiciones de trabajo no modificadas por este Decreto, salvo las que se adopten o acuerden en beneficio de la trabajadora o trabajador.

Artículo 9º. El presente Decreto entrará en vigencia a partir del 1º de mayo del año 2008.

Artículo 10. Remítase el presente Decreto a la Asamblea Nacional, de conformidad con el artículo 22 de la Ley Orgánica del Trabajo, en concordancia con el artículo 69 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo.

Artículo 11. El Ministro del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social queda encargado de la ejecución del presente Decreto.

Dado en Caracas, a los veintinueve días del mes de abril de dos mil ocho. Años 198º de la Independencia, 149º de la Federación y 10º de la Revolución Bolivariana.

Ejecútese,
(L.S.)

HUGO CHAVEZ FRIAS

Refrendado
El Vicepresidente Ejecutivo
(L.S.)

RAMON ALONZO CARRIZALEZ RENGIFO

Refrendado
El Ministro del Poder Popular del Despacho de la Presidencia
(L.S.)

JESSE CHACON ESCAMILLO

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia
(L.S.)

RAMON EMILIO RODRIGUEZ CHACIN

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores
(L.S.)

NICOLAS MADURO MOROS

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para las Finanzas
(L.S.)

RAFAEL EDUARDO ISEA ROMERO

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para la Defensa
(L.S.)

GUSTAVO REYES RANGEL BRICEÑO

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para las Industrias Ligeras y Comercio
(L.S.)

WILLIAN ANTONIO CONTRERAS

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para las Industrias Básicas y Minería
(L.S.)

RODOLFO EDUARDO SANZ

Refrendado
La Ministra del Poder Popular para el Turismo
(L.S.)

OLGA CECILIA AZUAJE

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para la Agricultura y Tierras
(L.S.)

ELIAS JAUA MILANO

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para la Educación Superior
(L.S.)

LUIS ACUÑA CEDEÑO

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para la Educación
(L.S.)

ADAN CHAVEZ FRIAS

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social
(L.S.)

ROBERTO MANUEL HERNANDEZ

Refrendado
El Encargado del Ministerio del Poder Popular para la Infraestructura
(L.S.)

ISIDRO UBALDO RONDON TORRES

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para la Energía y Petróleo
(L.S.)

RAFAEL DARIO RAMIREZ CARREÑO

Refrendado
La Ministra del Poder Popular para el Ambiente
(L.S.)

YUVIRI ORTEGA LOVERA

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para la Planificación y Desarrollo
(L.S.)

HAIMAN EL TROUDI

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para Ciencia y Tecnología
(L.S.)

HECTOR NAVARRO DIAZ

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para la Comunicación y la Información
(L.S.)

ANDRES GUILLERMO IZARRA GARCIA

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para la Economía Comunal
(L.S.)

PEDRO MOREJON CARRILLO

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para la Alimentación
(L.S.)

FELIX RAMON OSORIO GUZMAN

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para la Cultura
(L.S.)

FRANCISCO DE ASIS SESTO NOVAS

Refrendado
La Ministra del Poder Popular para la Vivienda y Hábitat
(L.S.)

EDITH BRUNELA GOMEZ

Refrendado
La Ministra del Poder Popular para la Participación y Protección Social
(L.S.)

ERIKA DEL VALLE FARIAS PEÑA

Refrendado
La Ministra del Poder Popular para
el Deporte
(L.S.)

VICTORIA MERCEDES MATA GARCIA

Refrendado
La Ministra del Poder Popular para
las Telecomunicaciones y la Informática
(L.S.)

SOCORRO ELIZABETH HERNANDEZ

Refrendado
La Ministra del Poder Popular para
los Pueblos Indígenas
(L.S.)

NICIA MALDONADO MALDONADO

Refrendado
La Ministra de Estado para
Asuntos de la Mujer
(L.S.)

MARIA LEON

Decreto Nº 6.05329 de abril de 2008

HUGO CHAVEZ FRIAS
Presidente de la República

En ejercicio de la atribución que le confiere el numeral 11 del artículo 236 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con lo previsto en el artículo 91 ejusdem y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley Orgánica del trabajo, en Consejo de Ministros,

CONSIDERANDO

Que la dignificación de las trabajadoras y trabajadores es un aspecto esencial de la democratización que busca la nueva institucionalidad del Estado, y que los hombres y mujeres que trabajan al servicio de la Administración Pública Nacional son una parte importante y particular del mundo del trabajo, necesaria para cubrir la deuda social en la República Bolivariana de Venezuela, y cumplir con el propósito igualitario de nuestra Constitución,

CONSIDERANDO

Que para el Ejecutivo Nacional es un objetivo la mejora progresiva de las remuneraciones de las trabajadoras y trabajadores al servicio de la Administración Pública Nacional a fin de garantizar la igualdad de oportunidades que permita desarrollar una vida digna y cubrir para sí y sus familias, sus necesidades básicas, materiales, sociales y culturales,

CONSIDERANDO

Que basado en los principios de solidaridad y justicia social, y dada la sostenida recuperación de la economía del país, el Ejecutivo Nacional ha estimado necesario actualizar el tabulador general de salarios de los trabajadores obreros y trabajadoras obreras al servicio de la Administración Pública Nacional.

DECRETA

Artículo 1º. El presente Decreto rige el tabulador general de salarios para los trabajadores obreros y trabajadoras obreras al servicio de la Administración Pública Nacional.

Artículo 2º. Se ajusta el tabulador general de salarios para el personal calificado como obrero u obrera al servicio de la Administración Pública Nacional con un salario inicial en el grado 1 equivalente al salario mínimo nacional vigente de **SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE BOLIVARES FUERTES (Bs.F. 799)**. Dicho ajuste entrará en vigencia a partir del 1º de mayo de 2008 y queda definido según el tabulador general que se presenta a continuación:

GRADO	MINIMO	MAXIMO	
1	799	1.199	NO CALIFICADO
2	815	1.223	
3	831	1.247	
4	848	1.272	
5	882	1.323	CALIFICADO
6	909	1.363	
7	936	1.404	
8	964	1.446	
9	1.012	1.518	SUPERVISOR
10	1.052	1.579	

Artículo 3º. La aplicación del tabulador general de salarios establecido en el artículo 2º de este Decreto, dará derecho a la asignación del salario inicial ó básico de cada grado. Cuando el salario total del trabajador obrero u obrera, constituido por el salario inicial ó básico aquí establecido más las asignaciones producto de los resultados de la evaluación de eficiencia percibidas hasta el 30 de abril de 2008, resultase superior al salario máximo del grado respectivo, éste se mantendrá.

Artículo 4º. Los salarios establecidos en el tabulador general previsto en el artículo 2º de este Decreto, corresponden a la prestación efectiva del servicio durante cuarenta (40) horas semanales; en caso de que dicho número de horas sea inferior, el salario del trabajador será reducido en proporción a las horas efectivamente trabajadas.

Artículo 5º. Quedan excluidos de la aplicación del presente Decreto, los trabajadores obreros y obreras al servicio de la Administración Pública Nacional que desde el 01 de febrero de 2006 al 30 de abril de 2008 hayan recibido incrementos salariales que superen los máximos previstos para cada grado o paso establecido en la clasificación del tabulador general de salario al que se refiere el artículo 2º, a través de instrumentos legales, convencionales o de cualquier otra índole, distintos a la vía de ascenso y ajustes por evaluación de eficiencia.

En caso de que dichos incrementos o ajustes de salario resulten inferiores al previsto en el referido tabulador general, se pagará la diferencia hasta el monto que corresponda. En ningún caso serán acumulables los aumentos salariales establecidos en este Decreto con los otorgados por la vía convencional o de cualquier índole con la salvedad prevista en esta norma.

Artículo 6º. Se ajusta el monto de las pensiones y jubilaciones de los trabajadores obreros y obreras de la Administración Pública Nacional hasta alcanzar el monto del salario mínimo nacional vigente. Los montos de las jubilaciones y pensiones superiores al salario mínimo nacional vigente serán ajustados de conformidad con la Cláusula Décima Primera de la

"Convención Colectiva Marco de los Obreros de la Administración Pública Nacional".

Artículo 7°. Las dudas que se susciten con motivo de la aplicación de este Decreto, serán resueltas por el Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social.

Artículo 8°. Este Decreto entrará en vigencia a partir del día 1° de mayo de 2008.

Artículo 9°. El Ministerio del Poder Popular para la Planificación y Desarrollo queda encargado de la ejecución del presente decreto.

Dado en Caracas, a los veintinueve días del mes de abril de dos mil ocho. Años 198° de la Independencia, 149° de la Federación y 10° de la Revolución Bolivariana.

Ejecútese,
(L.S.)

HUGO CHAVEZ FRIAS

Refrendado
El Vicepresidente Ejecutivo
(L.S.)

RAMON ALONZO CARRIZALEZ RENGIFO

Refrendado
El Ministro del Poder Popular del Despacho de la Presidencia
(L.S.)

JESSE CHACON ESCAMILLO

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia
(L.S.)

RAMON EMILIO RODRIGUEZ CHACIN

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores
(L.S.)

NICOLAS MADURO MOROS

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para las Finanzas
(L.S.)

RAFAEL EDUARDO ISEA ROMERO

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para la Defensa
(L.S.)

GUSTAVO REYES RANGEL BRICEÑO

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para las Industrias Ligeras y Comercio
(L.S.)

WILLIAN ANTONIO CONTRERAS

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para las Industrias Básicas y Minería
(L.S.)

RODOLFO EDUARDO SANZ

Refrendado
La Ministra del Poder Popular para el Turismo
(L.S.)

OLGA CECILIA AZUAJE

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para la Agricultura y Tierras
(L.S.)

ELIAS JAUA MILANO

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para la Educación Superior
(L.S.)

LUIS ACUÑA CEDEÑO

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para la Educación
(L.S.)

ADAN CHAVEZ FRIAS

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social
(L.S.)

ROBERTO MANUEL HERNANDEZ

Refrendado
El Encargado del Ministerio del Poder Popular para la Infraestructura
(L.S.)

ISIDRO UBALDO RONDON TORRES

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para la Energía y Petróleo
(L.S.)

RAFAEL DARIO RAMIREZ CARREÑO

Refrendado
La Ministra del Poder Popular para el Ambiente
(L.S.)

YUVIRI ORTEGA LOVERA

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para la Planificación y Desarrollo
(L.S.)

HAIMAN EL TROUDI

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para Ciencia y Tecnología
(L.S.)

HECTOR NAVARRO DIAZ

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para la Comunicación y la Información
(L.S.)

ANDRES GUILLERMO IZARRA GARCIA

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para la Economía Comunal
(L.S.)

PEDRO MOREJON CARRILLO

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para la Alimentación
(L.S.)

FELIX RAMON OSORIO GUZMAN

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para la Cultura
(L.S.)

FRANCISCO DE ASIS SESTO NOVAS

Refrendado
La Ministra del Poder Popular para la Vivienda y Hábitat
(L.S.)

EDITH BRUNELA GOMEZ

Refrendado
La Ministra del Poder Popular para la Participación y Protección Social
(L.S.)

ERIKA DEL VALLE FARIAS PEÑA

Refrendado
La Ministra del Poder Popular para
el Deporte
(L.S.)

VICTORIA MERCEDES MATA GARCIA

Refrendado
La Ministra del Poder Popular para
las Telecomunicaciones y la Informática
(L.S.)

SOCORRO ELIZABETH HERNANDEZ

Refrendado
La Ministra del Poder Popular para
los Pueblos Indígenas
(L.S.)

NICIA MALDONADO MALDONADO

Refrendado
La Ministra de Estado para
Asuntos de la Mujer
(L.S.)

MARIA LEON

Decreto N° 6.054

29 de abril de 2008

HUGO CHAVEZ FRIAS
Presidente de la República

En ejercicio de la atribución que le confiere el numeral 11 del artículo 236 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley del Estatuto de la Función Pública y 180 del Reglamento General de la Ley de Carrera Administrativa, en Consejo de Ministros.

CONSIDERANDO

Que la dignificación de los trabajadores es un aspecto esencial de la democratización que busca la nueva institucionalidad del Estado, y que los servidores públicos, como los hombres y mujeres que ponen la administración al servicio del pueblo, son una parte importante y particular del mundo del trabajo necesaria para cubrir la deuda social en la República Bolivariana de Venezuela y cumplir con el propósito igualitario de nuestra Constitución,

CONSIDERANDO

Que para el Ejecutivo Nacional es un objetivo la mejora progresiva de las remuneraciones de las funcionarias y funcionarios públicos de carrera, a fin de garantizar la igualdad de oportunidades y capacidades que permita desarrollar una vida digna y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales de los servidores públicos,

CONSIDERANDO

Que la lógica estadística del esquema remunerativo de las funcionarias y funcionarios públicos de carrera se debe estructurar bajo las nuevas relaciones entre el Estado y la sociedad, de manera que las transformaciones democráticas que obran en el seno del pueblo se reflejen en la actuación del Estado y de la Administración,

CONSIDERANDO

Que es propósito del Ejecutivo Nacional implementar los Planes de Personal con estructuras organizativas horizontales de equipos de trabajo por procesos, proyectos y acciones centralizadas en pro del cumplimiento de metas y objetivos institucionales, los cuales quedaran integrados al proyecto de ley de presupuesto nacional que se presente ante la Asamblea Nacional,

CONSIDERANDO

Que el Manual Descriptivo de Clases de Cargos de Carrera, basado en un sistema de clasificación de cargos por competencias o capacidades demostrables de funcionarias y funcionarios públicos de carrera de la Administración Pública Nacional, amenta, para hacer real dentro del Estado los principios democráticos que alientan la reforma democrática y post neoliberal de la administración pública, una escala general, uniforme y única de sueldos, propiciando el cumplimiento del principio constitucional que establece que el Estado garantizará el pago de igual sueldo por igual trabajo;

DECRETA

El siguiente,

SISTEMA DE REMUNERACIONES

Artículo 1º. El presente Decreto tiene por objeto regular y establecer la Escala General de Sueldos para las funcionarias y funcionarios de carrera de la Administración Pública Nacional.

Artículo 2º. Se aprueba la escala de sueldos para cargos de las funcionarias y funcionarios públicos de carrera, aplicable al Sistema de Clasificación de Cargos que rige la carrera funcional de la Administración Pública Nacional, en los siguientes términos:

SUELDO NIVELES	MIN I	II	III	PROM IV	V	VI	MAX VII
BACHILLERES							
1	799	879	999	1.199	1.399	1.519	1.598
2	1.165	1.282	1.457	1.748	2.039	2.214	2.331
3	1.324	1.457	1.655	1.986	2.317	2.516	2.649
TÉCNICOS SUPERIORES UNIVERSITARIOS							
4	1.394	1.533	1.742	2.090	2.439	2.648	2.787
5	1.440	1.584	1.799	2.158	2.519	2.735	2.879
PROFESIONALES UNIVERSITARIOS							
6	1.483	1.631	1.854	2.225	2.596	2.818	2.966
7	1.566	1.723	1.958	2.349	2.741	2.975	3.132
8	1.594	1.753	1.932	2.391	2.789	3.028	3.187

Artículo 3º. La aplicación de la escala establecida en el presente Decreto, da derecho a la asignación del sueldo inicial o básico de cada nivel. Cuando el sueldo total del funcionario, constituido por el sueldo inicial o básico aquí establecido más las compensaciones percibidas al 30 de abril de 2008, resultase superior a dicho sueldo, se mantendrá su remuneración total dentro del rango contemplado entre los mínimos y máximos correspondiente al grupo.

El último nivel de cada grupo en la escala de sueldos objeto del presente Decreto, es el máximo del sueldo que puede ser percibido en el grupo correspondiente.

Artículo 4º. Queda entendido que en el sueldo básico establecido en el presente Decreto, se encuentran incluidos los ajustes realizados al sueldo mínimo nacional obligatorio.

Artículo 5º. Los sueldos establecidos en el artículo 2º de este Decreto corresponden a la prestación efectiva del servicio durante treinta y siete y media (37½) horas semanales. Si el número de horas de trabajo semanales es inferior al señalado en este artículo, la remuneración de la funcionaria o funcionario será reducida en la misma proporción.

Artículo 6º. Los órganos y entes de la Administración Pública sujetos a este Decreto no podrán otorgar ingresos de carácter salarial distintos a los previstos en la escala establecida en el artículo 2º del presente Decreto.

Artículo 7º. Se instruye a la Comisión Central de Planificación a que elabore los estudios pertinentes, con el objeto de evaluar los posibles mecanismos necesarios para homologar las remuneraciones de las funcionarias y funcionarios de carrera de la Administración Pública Nacional.

Artículo 8º. Se excluyen de la aplicación del presente Decreto los funcionarios o empleados al servicio de los entes u órganos de la Administración Pública con sistemas de remuneraciones especiales o diferentes, de conformidad con las exclusiones establecidas en la ley.

Los órganos y entes a que se refiere este artículo, a través de sus Oficinas de Recursos Humanos, deben remitir anualmente al Ministerio del Poder Popular para la Planificación y Desarrollo, los planes de personal a ser ejecutados durante cada ejercicio fiscal para su revisión y aprobación.

Artículo 9º. A los efectos del artículo anterior, el Ministerio del Poder Popular para la Planificación y Desarrollo queda encargado de realizar el seguimiento, supervisión y control a las Oficinas de Recursos Humanos para evaluar la ejecución de los planes de personal revisados y aprobados; y en consecuencia, solicitar a los órganos competentes el establecimiento de las responsabilidades a que haya lugar.

Toda omisión, retardo, negligencia o imprudencia de los titulares de las Oficinas de Recursos Humanos, en adoptar las medidas aquí prescritas, dará lugar a la aplicación de la respectiva sanción de conformidad con la ley.

Artículo 10. Las escalas de sueldos establecidas en el artículo 2º de este Decreto, son aplicables sólo a título de referencia a los trabajadores que prestan sus servicios a las gobernaciones y alcaldías y sus entes adscritos. En todo caso, la Dirección de Recursos Humanos de estas podrá realizar el respectivo estudio de clasificación y definición de las tareas, perfiles y competencias de los cargos requeridos para el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales en conformidad con las directrices establecidas en este Decreto y en concordancia con las directrices del órgano de planificación de cada Estado o Municipio.

Artículo 11. El presente Decreto no es aplicable a las personas contratadas en la Administración Pública Nacional que realicen tareas de consultoría, asesoría o actividades especializadas de difícil reclutamiento.

Artículo 12. Las dudas que se susciten con motivo de la aplicación de este Decreto, serán resueltas por el Ministerio del Poder Popular de Planificación y Desarrollo.

Artículo 13. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 3º del presente Decreto, para aquellos casos donde la remuneración, constituida por el sueldo inicial o básico más las compensaciones percibidas al 30 de abril de 2008, sea superior al último nivel del grupo, la funcionaria o funcionario se ubicará en dicho nivel, manteniendo la diferencia en la remuneración.

Artículo 14. Este Decreto entrará en vigencia a partir del 1º de mayo de 2008.

Artículo 15. Los Ministros del Despacho y el Vicepresidente Ejecutivo quedan encargados de la ejecución del presente Decreto.

Dado en Caracas, a los veintinueve días del mes de abril de dos mil ocho. Años 198º de la Independencia, 149º de la Federación y 10º de la Revolución Bolivariana.

Ejecútese,
(L.S.)

HUGO CHAVEZ FRIAS

Refrendado
El Vicepresidente Ejecutivo
(L.S.)

RAMON ALONZO CARRIZALEZ RENGIFO

Refrendado
El Ministro del Poder Popular del Despacho de la Presidencia
(L.S.)

JESSE CHACON ESCAMILLO

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia
(L.S.)

RAMON EMILIO RODRIGUEZ CHACIN

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores
(L.S.)

NICOLAS MADURO MOROS

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para las Finanzas
(L.S.)

RAFAEL EDUARDO ISEA ROMERO

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para la Defensa
(L.S.)

GUSTAVO REYES RANGEL BRICEÑO

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para las Industrias Ligeras y Comercio
(L.S.)

WILLIAN ANTONIO CONTRERAS

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para las Industrias Básicas y Minería
(L.S.)

RODOLFO EDUARDO SANZ

Refrendado
La Ministra del Poder Popular para el Turismo
(L.S.)

OLGA CECILIA AZUAJE

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para la Agricultura y Tierras
(L.S.)

ELIAS JAUA MILANO

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para la Educación Superior
(L.S.)

LUIS ACUÑA CEDEÑO

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para la Educación
(L.S.)

ADAN CHAVEZ FRIAS

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social
(L.S.)

ROBERTO MANUEL HERNANDEZ

Refrendado
El Encargado del Ministerio del Poder Popular para la Infraestructura
(L.S.)

ISIDRO UBALDO RONDON TORRES

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para la Energía y Petróleo
(L.S.)

RAFAEL DARIO RAMIREZ CARREÑO

Refrendado
La Ministra del Poder Popular para el Ambiente
(L.S.)

YUVIRI ORTEGA LOVERA

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
la Planificación y Desarrollo
(L.S.)

HAIMAN EL TROUDI

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
Ciencia y Tecnología
(L.S.)

HECTOR NAVARRO DIAZ

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
la Comunicación y la Información
(L.S.)

ANDRES GUILLERMO IZARRA GARCIA

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
la Economía Comunal
(L.S.)

PEDRO MOREJON CARRILLO

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
la Alimentación
(L.S.)

FELIX RAMON OSORIO GUZMAN

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
la Cultura
(L.S.)

FRANCISCO DE ASIS SESTO NOVAS

Refrendado
La Ministra del Poder Popular para
la Vivienda y Hábitat
(L.S.)

EDITH BRUNELA GOMEZ

Refrendado
La Ministra del Poder Popular para
la Participación y Protección Social
(L.S.)

ERIKA DEL VALLE FARIAS PEÑA

Refrendado
La Ministra del Poder Popular para
el Deporte
(L.S.)

VICTORIA MERCEDES MATA GARCIA

Refrendado
La Ministra del Poder Popular para
las Telecomunicaciones y la Informática
(L.S.)

SOCORRO ELIZABETH HERNANDEZ

Refrendado
La Ministra del Poder Popular para
los Pueblos Indígenas
(L.S.)

NICIA MALDONADO MALDONADO

Refrendado
La Ministra de Estado para
Asuntos de la Mujer
(L.S.)

MARIA LEON

Decreto N° 6.055

29 de abril de 2008

HUGO CHAVEZ FRIAS

Presidente de la República

En el ejercicio de las atribuciones que confieren los numerales 11 y 24 del artículo 236 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 49, 50, 51 y 52 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, en Consejo de Ministros,

CONSIDERANDO

Que es propósito del Ejecutivo Nacional establecer directrices y políticas orientadas hacia una nueva institucionalidad que

transforme y modernice el Estado Venezolano, permitiéndole servir a la soberanía nacional, la profundización de la democracia y el servicio al pueblo que marcaron la tarea del Libertador,

CONSIDERANDO

Que mediante la aplicación de los principios de la Administración de Personal por competencia laboral se facilita la simplificación del sistema rígido de descripciones de cargos y permite desarrollar instituciones con estructuras organizativas y de cargos más horizontales centradas en el cumplimiento de objetivos y metas institucionales, trayendo así un principio de flexibilidad e igualdad en la administración acorde con la democracia participativa y protagónica de nuestra Constitución,

CONSIDERANDO

Que al ser importante que el Estado camine con los tiempos del pueblo, la dinámica propia de un sistema flexible de clasificación de cargos exige su permanente adecuación con los avances educativos, tecnológicos y la adaptación a resultados por procesos, proyectos y acciones centralizadas en el cumplimiento de objetivos y metas institucionales, mediante la aplicación de los principios y nuevas líneas de personal sustentada en las capacidades demostrables o competencias laborales de las funcionarias y funcionarios organizados en equipos o grupos de trabajo, la cual se obtiene a través de la educación formal y en gran medida mediante el aprendizaje por experiencias en una prestación proactiva del servicio público,

CONSIDERANDO

Que es propósito del Ejecutivo Nacional construir una administración al servicio del pueblo, y para ello precisa implementar Planes de Personal para el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales, los cuales deben quedar integrados al Proyecto de Ley de Presupuesto que presente el Ejecutivo a la Asamblea Nacional.

DECRETA

El siguiente:

MANUAL DESCRIPTIVO DE CLASES DE CARGOS DE CARRERA

Artículo 1º. Se establece el Sistema de Clasificación de Cargos que rige la carrera funcional, contenido de los requisitos mínimos de ingreso a las clases o grupos de cargos de la Administración Pública Nacional, de la forma siguiente:

Valor Básico		Bachilleres		
Clases o grupos de Cargos	Conversión de grados	Educación	Experiencia	Manual Descriptivo de Competencias Genéricas
BI	1 a 6	Bachiller	0 a 4 Años	Definidas por el MPPPD
BII	7 a 10	Bachiller	5 a 7 Años	Definidas por el MPPPD
BIII	11 a 14	Bachiller	8 Años y más	Definidas por el MPPPD
Valor Básico		Técnicos Superiores Universitarios		
Clases o grupos de Cargos	Conversión de grados	Educación	Experiencia	Manual Descriptivo de Competencias Genéricas
TI	15 a 16	TSU	0 a 4 Años	Definidas por el MPPPD
TII	17 y más	TSU	5 Años y más	Definidas por el MPPPD

Valor Básico	Profesionales Universitarios			
	Conversion de grados	Educación	Experiencia	Manual Descriptivo de Competencias Genéricas
Clases o grupos de Cargos				
P1	17 a 20	Profesional Univ.	0 a 4 Años	Definidas por el MPPPD
PII	21 a 23	Profesional Univ.	5 a 7 Años	Definidas por el MPPPD
PIII	24 a 26	Profesional Univ.	8 Años y más	Definidas por el MPPPD

Bachilleres: Comprende a los cargos de carrera de la Administración Pública Nacional cuyo requisito mínimo de ingreso es la culminación de la educación diversificada, es decir, el tercer nivel del sistema educativo, siguiente al de Educación Básica y previo al de Educación Superior.

Técnicos Superiores Universitarios: Comprende a los cargos de carrera de la Administración Pública Nacional cuyo requisito mínimo de ingreso es la culminación del nivel de formación Técnico Superior Universitario.

Profesionales Universitarios: Comprende a los cargos de carrera de la Administración Pública Nacional cuyo requisito mínimo de ingreso es la culminación del nivel de formación Profesional Universitaria, de Postgrado o Doctorado.

Artículo 2º. La educación a nivel Técnico Superior y Profesional Universitario corresponde a estudios realizados en las Universidades, los Institutos Universitarios Pedagógicos, Politécnicos, Tecnológicos, Colegios Universitarios, en los Institutos de Formación de Oficiales de las Fuerzas Armadas; los Institutos Especiales de Formación Docente, de Bellas Artes, de Investigación; y en general, aquellos que tengan los objetivos señalados en la ley y se ajusten a sus requerimientos.

Artículo 3º. A los fines de garantizar el recurso humano sustantivo, operativo y de apoyo técnico de la Administración Pública Nacional, las estructuras de cargos de carrera de la Administración Pública deberán ajustarse al Sistema de Clasificación de Cargos establecido en el artículo 1 del presente Decreto, cuyos cargos se distribuyen por áreas ocupacionales del conocimiento, las cuales se definen como agrupaciones generales de ocupaciones afines, que comparten los mismos principios técnicos y científicos con desempeño de base similar. Las clases o grupos se codifican por áreas ocupacionales del conocimiento, sub-áreas clasificadas por la afinidad de la profesión o carrera que contemplan determinadas aptitudes, habilidades o competencias generales y finalmente la profesión con las competencias requeridas para el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales:

CODIGO DENOMINACION DE LA CLASE

1.0.00.00	BACHILLERES
1.1.00.00	CIENCIAS BÁSICAS
1.1.01.00	Ciencias y Humanidades
1.1.02.00	Técnicos medios o con mención
1.2.00.00	INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y TECNOLOGÍA
1.2.01.00	Ciencias y Humanidades
1.2.02.00	Técnicos medios o con mención
1.3.00.00	CIENCIAS DEL AGRO Y DEL MAR
1.3.01.00	Ciencias y Humanidades
1.3.02.00	Técnicos medios o con mención
1.4.00.00	CIENCIAS DE LA SALUD
1.4.01.00	Ciencias y Humanidades
1.4.02.00	Técnicos medios o con mención
1.5.00.00	CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
1.5.01.00	Ciencias y Humanidades
1.5.02.00	Técnicos medios o con mención
1.6.00.00	CIENCIAS SOCIALES
1.6.01.00	Ciencias y Humanidades
1.6.02.00	Técnicos medios o con mención
1.7.00.00	HUMANIDADES, LETRAS Y ARTES
1.7.01.00	Ciencias y Humanidades
1.7.02.00	Técnicos medios o con mención
1.8.00.00	CIENCIAS Y ARTES MILITARES
1.8.01.00	Ciencias y Humanidades
1.8.02.00	Técnicos medios o con mención
2.0.00.00	TÉCNICOS SUPERIORES
2.1.00.00	CIENCIAS BÁSICAS
2.2.00.00	INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y TECNOLOGÍA
2.2.01.00	METALURGIA
2.2.01.01	Ingeniería Metalurgia(CB)
2.2.01.02	Metalurgia (Técnica)

2.2.01.03	Metalurgia y Ciencia de los Materiales
2.2.01.04	Polímeros
2.2.01.05	Tecnología de los Materiales (Técnica)
2.2.01.06	Tecnología Metalúrgica
2.2.02.00	MINERÍA Y GEOLOGÍA
2.2.02.01	Minería
2.2.02.02	Tecnología Minera
2.2.02.03	Ingeniería de Minas (CB)
2.2.02.04	Geología (Técnica)
2.2.02.05	Geología y Minas
2.2.02.06	Ingeniería Geodesia (SB)
2.2.02.07	Ingeniería Geofísica (SB)
2.2.02.08	Ingeniería Geológica (SB)
2.2.02.09	Ingeniería Hidrometeorológica (SB)
2.2.03.00	PETRÓLEO
2.2.03.01	Petróleo
2.2.03.03	Procesos de Refinación del Petróleo
2.2.03.04	Tecnología del Gas
2.2.03.05	Tecnología Petrolera
2.2.03.06	Ingeniería de Petróleo (CB)
2.2.04.00	HIDROCARBUROS
2.2.04.01	Hidrocarburos
2.2.05.00	ANÁLISIS DE SISTEMAS
2.2.05.01	Análisis de Sistemas (Técnica)
2.2.05.02	Análisis y Diseño de Sistemas
2.2.05.03	Computación(Técnica)
2.2.05.04	Control de Procesos y telecomunicaciones
2.2.05.05	Informática(CB)
2.2.05.06	Informática (Técnica)
2.2.05.07	Ingeniería de Sistemas (CB)
2.2.06.00	ELECTRÓNICA
2.2.06.01	Comunicaciones y Electrónica (Técnica)
2.2.06.02	Controles Automáticos
2.2.06.03	Electricidad(Técnica)
2.2.06.04	Electricidad mención Instalaciones Eléctricas
2.2.06.05	Electrónica Industrial
2.2.06.06	Electrónica mención Mantenimiento
2.2.06.07	Electrotecnia
2.2.06.08	Ingeniería Eléctrica (CB)
2.2.06.09	Ingeniería Mecánica (CB)
2.2.06.10	Instrumentación
2.2.06.11	Instrumentación y Control
2.2.06.12	Tecnología Eléctrica
2.2.06.13	Tecnología Electrónica
2.2.07.00	MANTENIMIENTO MECÁNICO
2.2.07.01	Mantenimiento Aeronáutico
2.2.07.02	Mantenimiento de Edificaciones (Técnica)
2.2.07.03	Mantenimiento de Equipos Eléctricos
2.2.07.04	Mantenimiento de Equipos Eléctricos y Mecánicos
2.2.07.05	Mantenimiento de Equipos Electromecánicos
2.2.07.06	Mantenimiento de Equipos Mecánicos
2.2.07.07	Mantenimiento de Vías Férreas
2.2.07.08	Mantenimiento Industrial
2.2.07.09	Mantenimiento Mecánico
2.2.07.10	Mecánica (Técnica)
2.2.07.11	Mecánica Automotriz
2.2.07.12	Mecánica Industrial
2.2.07.13	Mecánica Térmica
2.2.07.14	Tecnología de Mantenimiento
2.2.07.15	Tecnología en Fabricación Mecánica
2.2.07.16	Tecnología Instrumentista
2.2.07.17	Tecnología Mecánica
2.2.07.18	Tecnología Mecánica Térmica
2.2.07.19	Tecnología Naval mención Mecánica Naval
2.2.07.20	Tecnología Naval mención Mecánica y Mantenimiento Naval
2.2.07.21	Tecnología Naval mención Navegación y Pesca
2.2.08.00	TOPOGRAFÍA
2.2.08.01	Topografía (Técnica)
2.2.09.00	OBRAS CIVILES Y DISEÑO
2.2.09.01	Construcción Civil (Técnica)
2.2.09.02	Diseño Ambiental
2.2.09.03	Diseño de Joyas y Fantasías
2.2.09.04	Diseño de Modas
2.2.09.05	Diseño de Obras Civiles
2.2.09.06	Diseño Gráfico(Técnica)
2.2.09.07	Diseño Gráfico Publicitario
2.2.09.08	Diseño Industrial (Técnica)
2.2.09.09	Diseño Interior
2.2.09.10	Diseño Textil
2.2.09.11	Ingeniería Civil (CB)
2.2.09.12	Obras Civiles
2.2.09.13	Tecnología de la Construcción Civil
2.2.09.14	Tecnología Textil
2.2.09.15	Tecnología en Administración de Obras
2.2.09.16	Tecnología Naval mención Construcción Naval
2.2.10.00	QUÍMICA
2.2.10.01	Ingeniería Química (CB)
2.2.10.02	Procesos Químicos mención Tecnología y Diseño
2.2.10.03	Química (Técnica)
2.2.10.04	Química Industrial
2.2.11.00	REDES Y COMUNICACIONES
2.2.11.01	Redes y Comunicaciones (Técnica)
2.2.11.02	Sistemas de Información
2.2.12.00	SEGURIDAD INDUSTRIAL
2.2.12.01	Calidad Integral
2.2.12.02	Control de Calidad
2.2.12.03	Higiene y Seguridad Industrial
2.2.12.04	Producción Industrial (Técnica)
2.2.12.05	Producción y Supervisión Industrial
2.2.12.06	Seguridad e Higiene Industrial
2.2.12.07	Seguridad Industriales
2.2.12.08	Servicios Industriales
2.2.12.09	Sistemas Industriales
2.2.12.10	Tecnología de Seguridad Industrial
2.2.12.11	Tecnología en Procesos Industriales
2.2.12.12	Tecnología en Sistemas Industriales

2.2.13.00	TECNOLOGÍA DE INCENDIOS	2.6.00.00	CIENCIAS SOCIALES
2.2.13.01	Tecnología de Incendios	2.6.01.00	ADMINISTRACIÓN, GERENCIA Y ESTADÍSTICAS
2.2.13.02	Tecnología Bomberil	2.6.01.01	Administración(Técnica)
2.2.14.00	MANEJO DE EMERGENCIA	2.6.01.02	Administración Bancaria mención Banca
2.2.14.01	Manejo de Emergencia y Acción Contra Desastres	2.6.01.03	Administración Bancaria y Financiera (Técnica)
2.3.00.00	CIENCIAS DEL AGRO Y DEL MAR	2.6.01.04	Administración de Empresas (Técnica)
2.3.01.00	TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS	2.6.01.05	Administración de Empresas mención Personal
2.3.01.01	Tecnología de Alimentos (Técnica)	2.6.01.06	Administración de Empresas Petroleras
2.3.01.02	Tecnología de Alimentos mención Procesamiento y Control de	2.6.01.07	Administración de mantenimiento
2.3.01.03	Calidad de los Alimentos	2.6.01.08	Administración de Personal(Técnica)
2.3.01.04	Tecnología Pesquera mención Tecnología de Alimentos	2.6.01.09	Administración de Recursos Físicos y Financieros
2.3.01.05	Tecnología de Producción Agroalimentaria	2.6.01.10	Administración de Recursos Humanos
2.3.02.00	TECNOLOGÍA AGROPECUARIA	2.6.01.11	Administración de Sistemas de Mantenimiento
2.3.02.01	Administración de Empresas Agropecuarias (Técnica)	2.6.01.12	Administración en Informática
2.3.02.02	Administración y Planificación de Empresas Agropecuarias	2.6.01.13	Administración Industrial(Técnica)
2.3.02.03	Administración: Mercadeo Agrícola	2.6.01.14	Administración mención Banca y Finanzas(Técnica)
2.3.02.04	Agroalimentación	2.6.01.15	Administración mención Contabilidad y Finanzas
2.3.02.05	Aerotécnica	2.6.01.16	Administración mención Costos
2.3.02.06	Cervecería	2.6.01.17	Administración mención Finanzas
2.3.02.07	Ciencias Agropecuarias	2.6.01.18	Administración mención Presupuesto
2.3.02.08	Ingeniería Agrícola (CB)	2.6.01.19	Administración mención Recursos Humanos
2.3.02.09	Ingeniería Agroindustrial (CB)	2.6.01.20	Administración y Contaduría (CB)
2.3.02.10	Ingeniería Agronómica (CB)	2.6.01.21	Administración: Banca y Finanzas (Técnica)
2.3.02.11	Mantenimiento de Maquinaria Agrícola y Pesada	2.6.01.22	Administración: Contabilidad de Costos
2.3.02.12	Producción Agropecuaria (Técnica)	2.6.01.23	Administración: Contaduría
2.3.02.13	Tecnología Agrícola	2.6.01.24	Administración: Costos
2.3.02.14	Tecnología Agroindustrial	2.6.01.25	Administración: Hidrocarburos
2.3.02.15	Tecnología Agropecuaria	2.6.01.26	Administración: Informática
2.3.03.00	VETERINARIA Y PESCA	2.6.01.27	Administración: Organización y Sistemas (Técnica)
2.3.03.01	Asistente Veterinaria (Técnica)	2.6.01.28	Administración: Sistemas Administrativos y Contables
2.3.03.02	Tecnología Pecuaria	2.6.01.29	Administración: Contabilidad de Costos
2.3.03.03	Pesca Continental y Puericultura	2.6.01.30	Administración: Contaduría
2.3.03.04	Tecnología Pesquera mención Acuicultura y Oceanografía	2.6.01.31	Administración: Costos
2.3.04.00	ADMINISTRACIÓN DE FINCAS	2.6.01.32	Administración: Hidrocarburos
2.3.04.01	Administración de Fincas (Técnica)	2.6.01.33	Administración: Informática
2.3.04.02	Tecnología de Administración de Fincas	2.6.01.34	Administración: Organización y Sistemas (Técnica)
2.3.05.00	TECNOLOGÍA AMBIENTAL	2.6.01.35	Banca y Finanzas (Técnica)
2.3.05.01	Tecnología Ambiental	2.6.01.36	Ciencias Administrativas (Técnica)
2.3.05.02	Animación Ambiental	2.6.01.37	Contabilidad
2.3.05.03	Ingeniería de Recursos Naturales Renovables (CB)	2.6.01.38	Contabilidad Computarizada
2.3.05.04	Tecnología de Conservación de los Recursos Naturales Renovables	2.6.01.39	Contabilidad y Finanzas
2.3.05.05	Tecnología de los Recursos Naturales Renovables	2.6.01.40	Contador General
2.3.06.00	TECNOLOGÍA AGROFORESTAL	2.6.01.41	Contaduría (Técnica)
2.3.06.01	Tecnología Agroforestal	2.6.01.42	Contaduría Pública (Técnica)
2.3.06.02	Tecnología en Industria Forestal	2.6.01.43	Contaduría y Finanzas
2.3.06.03	Tecnología Superior Forestal	2.6.01.44	Economía(CB)
2.4.00.00	CIENCIAS DE LA SALUD	2.6.01.45	Gerencia de Condominios
2.4.01.00	GERONTOLOGÍA	2.6.01.46	Gerencia de Oficina
2.4.01.01	Gerontología (Técnica)	2.6.01.47	Gerencia Financiera
2.4.02.00	RADIOLOGÍA	2.6.01.48	Gerencia Financiera
2.4.02.01	Radiología e Imagiología	2.6.01.49	Gerencia Industrial
2.4.02.02	Imaginología (Técnica)	2.6.01.50	Gerencia Pública
2.4.02.03	Radiodiagnóstico	2.6.01.51	Logística Industrial
2.4.02.04	Tecnología Radiológica Medica	2.6.01.52	Organización Empresarial
2.4.03.00	ELECTROMEDICINA	2.6.01.53	Relaciones Industriales (Técnica)
2.4.03.01	Electromedicina (Técnica)	2.6.01.54	Tecnología Administrativa
2.4.04.00	INSPECCIÓN SANITARIA	2.6.01.55	Tecnología en Administración Industrial
2.4.04.01	Inspección Sanitaria	2.6.01.56	Administración de Empresas: Riesgos y Seguros
2.4.05.00	SALUD BUCAL	2.6.01.57	Administración mención Seguros Mercantiles
2.4.05.01	Salud Bucal: Higiene Bucal	2.6.01.58	Ciencias Actuariales y Ciencias Estadísticas (C.B)
2.4.05.02	Salud Bucal: Mecánica Dental	2.6.01.59	Seguros
2.4.06.00	ENFERMERÍA	2.6.01.60	Riesgos y Seguros
2.4.06.01	Enfermería (Técnica)	2.6.01.61	Tecnología en Estadísticas
2.4.07.00	ADMINISTRACIÓN DE HOSPITALES	2.6.02.00	HOTELERÍA
2.4.07.01	Administración de Salud y Hospitales	2.6.02.01	Hotelería (Técnica)
2.4.07.02	Administración de Servicios de Salud	2.6.02.02	Hotelería y Servicios de la Hospitalidad
2.4.07.03	Gerencia de Procesos Hospitalarios	2.6.02.03	Gerencia Hotelera
2.4.07.04	Tecnología Superior en Emergencia de Salud	2.6.02.04	Gestión Hotelera
2.4.08.00	CITOTECNOLOGÍA	2.6.02.05	Gestión Hotelera y Turística
2.4.08.01	Cito tecnología (Técnica)	2.6.02.06	Administración Hotelera
2.4.09.00	TECNOLOGÍA CARDIOPULMONAR	2.6.02.07	Administración de Empresas Hoteleras (Técnica)
2.4.09.01	Tecnología Cardiopulmonar	2.6.02.08	Empresas y Alojamiento Turístico
2.4.10.00	TERAPIA Y REABILITACIÓN	2.6.03.00	TURISMO
2.4.10.01	Terapia del Lenguaje	2.6.03.01	Tunsmo (Técnica)
2.4.10.02	Terapia Ocupacional (Técnica)	2.6.03.02	Tunsmo y Hotelería
2.4.10.03	Rehabilitación mención Fisioterapia	2.6.03.03	Administración de Empresas Turísticas (Técnica)
2.4.10.04	Rehabilitación mención Terapia Ocupacional	2.6.03.04	Administración del Turismo (Técnica)
2.4.10.05	Fisioterapia (Técnica)	2.6.03.05	Ecoturismo
2.4.11.00	EMERGENCIA PREHOSPITALARIA	2.6.03.06	Empresas Turísticas
2.4.11.01	Emergencia Prehospitalaria	2.6.03.07	Servicios de Hospitalidad
2.4.12.00	TECNOLOGÍA RADIOLÓGICA MEDICA	2.6.03.08	Recreación
2.4.12.01	Tecnología Radiológica Medica	2.6.04.00	SECRETARÍA
2.5.00.00	CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN	2.6.04.01	Secretaría
2.5.01.00	EDUCACIÓN	2.6.04.02	Secretariado Administrativo(Técnica)
2.5.01.01	Educación Integral (Técnica)	2.6.04.03	Secretariado Ejecutivo
2.5.01.02	Educación Preescolar (Técnica)	2.6.05.00	CIENCIAS POLICIALES
2.5.01.03	Educación Mecánica Industrial	2.6.05.01	Ciencias Policiales (Técnica)
2.5.01.04	Educación Electricidad	2.6.05.02	Asistencia Especializada
2.5.01.05	Educación Industrial	2.6.05.03	Ciencias Criminales (Técnica)
2.5.01.06	Educación Electrónica	2.6.05.04	Criminalística (Técnica)
2.5.01.07	Educación Ciencias Religiosas (Técnica)	2.6.05.05	Penitenciarismo
2.5.01.08	Educación Pedagogía Religiosa	2.6.05.06	Policia Preventiva
2.5.02.00	EDUCACIÓN ESPECIAL	2.6.06.00	HACIENDA PÚBLICA
2.5.02.01	Educación Especial (Técnica)	2.6.06.01	Administración Aduanera (Técnica)
2.5.02.02	Educación Especial mención dificultades del Aprendizaje (Técnica)	2.6.06.02	Administración de Aduanas
2.5.02.03	Educación Especial mención Retardo Mental (Técnica)	2.6.06.03	Administración mención Aduanas
2.5.02.04	Maestros de Niños Sordos y Niños con Trastornos de Lenguaje	2.6.06.04	Administración mención Comercio Exterior
2.5.02.05	Educación Física, Deportes y Recreación para personas con	2.6.06.05	Administración mención Fiscal y Tributaria
2.5.02.06	necesidades especiales	2.6.06.06	Administración Municipal
2.5.02.07	Psicopedagógica	2.6.06.07	Administración Tributaria
2.5.03.00	DEPORTES	2.6.06.08	Ciencias Fiscales (Técnica)
2.5.03.01	Deportes (Técnica)	2.6.06.09	Comercio Exterior (Técnica)
2.5.03.02	Educación Física y Deportes	2.6.06.10	Gestión Fiscal y Tributaria
		2.6.07.00	MERCADOTECNIA
		2.6.07.01	Mercadotecnia
		2.6.07.02	Publicidad y Mercadeo (Técnica)
		2.6.07.03	Administración: Mercadotecnia

2.6.07.04	Mercadeo (Técnica)
2.6.07.05	Administración: Mercadeo (Técnica)
2.6.07.06	Administración: Publicidad y Mercadeo
2.2.07.07	Mercadeo mención Publicidad
2.2.07.07	Administración de Compras
2.2.07.08	Administración de Ventas
2.6.08.00	RELACIONES PÚBLICAS
2.6.08.01	Relaciones Públicas (Técnica)
2.6.08.02	Publicidad (Técnica)
2.6.08.03	Publicidad y mercadeo (Técnica)
2.6.08.04	Publicidad y Relaciones Públicas
2.6.09.00	GESTIÓN SOCIAL DEL DESARROLLO LOCAL
2.6.09.01	Trabajo Social (Técnica)
2.6.09.02	Administración mención Programas Sociales
2.6.09.03	Planificación (CC)
2.6.09.04	Prevención, Orientación y Acción Social
2.6.09.05	Terapia Psicosocial
2.7.00.00	HUMANIDADES, LETRAS Y ARTES
2.7.01.00	CIENCIAS AUDIOVISUALES
2.7.01.01	Ciencias Audiovisuales y Fotografía
2.7.01.02	Artes audiovisuales mención Televisión(Técnica)
2.7.01.03	Ejecución Instrumental
2.7.02.00	DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN
2.7.02.01	Información y Documentación (Técnica)
2.7.03.00	IDIOMAS MODERNOS
2.7.03.01	Idiomas Modernos(Técnica)
2.7.03.02	Idiomas Modernos mención Inglés
2.8.00.00	CIENCIAS Y ARTES MILITARES
2.8.01.00	CIENCIAS Y ARTES MILITARES
2.8.02.01	Ciencias Aeronáuticas (Técnica)
2.8.03.02	Ciencias Navales (Técnica)
2.8.04.03	Ciencias y Artes Militares: Opción Sub-Oficial del Ejército
2.8.05.04	Comunicaciones y Electrónica(Técnica)
2.8.02.05	Guardia Nacional mención Drogas
2.8.03.06	Guardia Nacional mención Guardería Ambiental
2.8.04.07	Guardia Nacional mención Investigación Penal
2.8.05.08	Guardia Nacional mención Resguardo Naval
2.8.05.09	Guardia Nacional mención Seguridad
3.0.00.00	PROFESIONALES UNIVERSITARIOS
3.1.00.00	CIENCIAS BÁSICAS
3.1.01.00	FÍSICA
3.1.01.01	Física
3.1.02.00	QUÍMICA
3.1.02.01	Química
3.1.03.00	BIOLOGÍA
3.1.03.01	Biología
3.1.04.00	MATEMÁTICA
3.1.04.01	Matemática
3.1.04.02	Matemática mención Docencia en Matemática
3.2.00.00	INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y TECNOLOGÍA
3.2.01.00	INGENIERÍA
3.2.01.01	Ingeniería Aeronáutica
3.2.01.02	Ingeniería de Mantenimiento
3.2.01.03	Ingeniería Eléctrica
3.2.01.05	Ingeniería Electrónica
3.2.01.06	Ingeniería en Mantenimiento Mecánico
3.2.01.07	Ingeniería de Mecánica
3.2.01.08	Ingeniería Mecánica mención Mantenimiento
3.2.01.09	Ingeniería Mecatrónica
3.2.01.10	Ingeniería de Materiales
3.2.01.11	Ingeniería Metalúrgica
3.2.01.12	Ingeniería de Producción
3.2.01.13	Ingeniería de Gas
3.2.01.14	Ingeniería de Petróleo
3.2.02.00	MINERÍA Y GEOLOGÍA
3.2.02.01	Ingeniería de Minas
3.2.02.02	Geología
3.2.02.03	Ingeniería Geodésica
3.2.02.04	Ingeniería Geofísica
3.2.02.05	Ingeniería Geológica
3.2.02.06	Ingeniería Hidrometeorológica
3.2.03.00	COMPUTACIÓN
3.2.03.01	Computación
3.2.03.02	Ingeniería Electrónica de Computación
3.2.03.03	Ingeniería en Computación
3.2.04.00	INFORMÁTICA
3.2.04.01	Informática
3.2.04.02	Ingeniería Electrónica mención Telecomunicaciones
3.2.04.03	Ingeniería de Redes y Comunicaciones
3.2.04.04	Ingeniería de Sistemas
3.2.04.05	Ingeniería en Información
3.2.04.06	Ingeniería en Informática
3.2.05.00	ARQUITECTURA
3.2.05.01	Arquitectura
3.2.05.02	Arquitectura (EUS)
3.2.06.00	URBANISMO
3.2.06.01	Urbanismo
3.2.06.02	Ingeniería Civil
3.2.06.03	Ingeniería de Administración de Obras
3.2.06.04	Ingeniería en mantenimiento de Obras
3.2.07.00	GEOQUÍMICA
3.2.07.01	Geoquímica
3.2.07.02	Ingeniería Química
3.2.08.00	DISEÑO GRÁFICO
3.2.08.01	Diseño Gráfico
3.2.09.00	INGENIERÍA MARÍTIMA
3.2.09.01	Ingeniería Marítima
3.2.09.02	Ingeniería Naval
3.2.10.00	DISEÑO INDUSTRIAL
3.2.10.01	Diseño Industrial
3.2.10.02	Ingeniería Industrial
3.2.10.03	Ingeniería en Diseño Industrial

3.2.10.04	Ingeniería de Producción Industrial
3.2.11.00	TELECOMUNICACIONES
3.2.11.01	Ingeniería en Telecomunicaciones
3.2.11.02	Ingeniería Electrónica mención Telecomunicaciones
3.3.00.00	CIENCIAS DEL AGRO Y DEL MAR
3.3.01.00	INGENIERÍA AGRONÓMICA AGROPECUARIA
3.3.01.01	Ingeniería Agronómica
3.3.01.02	Ingeniería Agronómica de Producción Animal
3.3.01.03	Ingeniería Agronómica de Producción Vegetal
3.3.01.04	Ingeniería de Producción Animal
3.3.02.00	INGENIERÍA AGRÍCOLA Y DE ALIMENTOS
3.3.02.01	Ingeniería Agrícola
3.3.02.02	Economía Agrícola
3.3.02.03	Ingeniería de Alimentos
3.3.02.04	Ciencia y Cultura de la Alimentación
3.3.02.05	Tecnología de Alimentos
3.3.03.00	INGENIERÍA AMBIENTAL Y FORESTAL
3.3.03.01	Ingeniería del Ambiente
3.3.03.02	Ingeniería del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables
3.3.03.03	Ingeniería de Recursos Naturales Renovables
3.3.03.04	Ingeniería Ambiental
3.3.03.05	Economía de la Industria Forestal
3.3.03.06	Ingeniería Forestal
3.3.04.00	GERENCIA AGROINDUSTRIAL
3.3.04.01	Gerencia Agroindustrial
3.3.04.02	Administración de Empresas Agropecuarias
3.3.04.03	Administración de Fincas
3.3.05.00	MEDICINA VETERINARIA
3.3.05.01	Medicina Veterinaria
3.3.06.00	BIOLOGÍA MARINA
3.3.06.01	Biología Marina
3.3.03.02	Biología Pesquera
3.3.03.03	Ingeniería Pesquera
3.3.07.00	GESTIÓN AMBIENTAL
3.3.07.01	Gestión Ambiental
3.3.07.02	Estudios Ambientales
3.3.08.00	INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN EN AGROESISTEMAS
3.3.08.00	Ingeniería de Producción en Agroecosistemas
3.4.00.00	CIENCIAS DE LA SALUD
3.4.01.00	MEDICINA
3.4.02.01	Medicina
3.4.02.00	NUTRICIÓN Y DIETÉTICA
3.4.02.01	Nutrición y Dietética
3.4.03.00	FARMACIA
3.4.03.01	Farmacia
3.4.04.00	ENFERMERÍA
3.4.04.01	Enfermería
3.4.05.00	BIOANÁLISIS
3.4.05.01	Bioanálisis
3.4.05.02	Cito tecnología
3.4.05.03	Histotecnología
3.4.06.00	ODONTOLOGÍA
3.4.06.01	Odontología
3.4.07.00	FISIOTERAPIA
3.4.07.01	Fisioterapia
3.4.07.02	Terapia Ocupacional
3.5.00.00	CIENCIAS DE LA EDUCACION
3.5.01.00	EDUCACIÓN: MENCIÓN
3.5.01.01	Educación
3.5.01.02	Educación Integral
3.5.01.03	Educación Matemática y Física
3.5.01.04	Educación Biología y Química
3.5.01.05	Educación Ciencias Biológicas
3.5.01.06	Educación Ciencias Físico Naturales
3.5.01.07	Educación Ciencias Pedagógicas
3.5.01.08	Educación Computación
3.5.01.09	Educación Física
3.5.01.10	Educación Física y Matemática
3.5.01.11	Educación Informática
3.5.01.12	Educación Informática y Matemática
3.5.01.13	Educación Matemática
3.5.01.14	Educación Química
3.5.01.15	Educación Preescolar
3.5.01.16	Educación Ciencia y Tecnología de la Educación
3.5.01.17	Educación Comercial
3.5.01.18	Educación Electricidad
3.5.01.19	Educación Mecánica
3.5.01.20	Educación lenguas Extranjeras: Inglés
3.5.01.21	Educación Agropecuaria
3.5.01.22	Educación Artes
3.5.01.23	Educación Artes Industriales
3.5.01.24	Educación Básica Integral
3.5.01.25	Educación Castellano y Literatura
3.5.01.26	Educación Ciencias de la Religión
3.5.01.27	Educación Ciencias Sociales
3.5.01.28	Educación, Física Deporte y Recreación
3.5.01.29	Educación Filosofía
3.5.01.30	Educación Geografía
3.5.01.31	Educación Geografía e Historia
3.5.01.32	Educación Geografía y Ciencias de la Tierra
3.5.01.33	Educación Historia
3.5.01.34	Educación Historia y Geografía
3.5.01.35	Educación Idiomas Modernos
3.5.01.36	Educación Integral
3.5.01.37	Educación Lengua y Literatura
3.5.01.38	Educación Lengua, Literatura y Latín
3.5.01.39	Educación Lenguas Extranjeras
3.5.01.40	Educación Orientación
3.5.01.41	Educación Pedagogía Religiosa
3.5.01.42	Educación Técnica Industrial
3.5.01.43	Educación Técnica Mercantil
3.5.01.44	Educación Teología
3.5.01.45	Educación Actividad Física y Salud
3.5.01.46	Educación Ciencias del Deporte

3.5.02.00	EDUCACION: ESPECIALIDAD
3.5.02.01	Educación Especial
3.5.02.02	Educación Especial en Deficiencias Auditivas
3.5.02.03	Educación Especial en Retardo Mental
3.5.02.04	Educación Especial en Dificultades del Aprendizaje
3.5.02.05	Educación Ciencias de la Tierra
3.5.02.06	Educación Lengua y Literatura
3.5.02.07	Educación Química
3.5.02.08	Educación Biología
3.5.02.09	Educación Comercial
3.5.02.10	Educación en Educación Física
3.5.02.11	Educación Integral
3.5.02.12	Educación Preescolar
3.5.02.13	Educación Física
3.5.02.14	Educación Geografía e Historia
3.5.02.15	Educación Informática
3.5.02.16	Educación Inglés
3.5.02.17	Educación Matemática
3.5.02.18	Educación Pedagogía Social
3.5.02.19	Educación Artes Plásticas
3.5.02.20	Educación Dibujo Técnico
3.5.02.21	Educación Artes Escénicas
3.5.02.22	Educación Castellano, Literatura y Latín
3.5.02.23	Educación Intercultural Bilingüe
3.5.02.24	Educación Musical
3.5.02.25	Educación Rural
3.5.02.26	Educación Industrial
3.5.02.27	Educación Electrónica Industrial
3.5.02.28	Educación Francés
3.5.02.29	Educación Mecánica Industrial
3.5.02.30	Educación Electricidad Industrial
3.5.02.31	Educación Entrenamiento Deportivo
3.5.02.32	Educación Gestión Tecnológica del Deporte
3.6.00.00	CIENCIAS SOCIALES
3.6.01.00	ECONOMÍA
3.6.01.01	Economía
3.6.01.02	Economía Empresarial
3.6.02.00	ADMINISTRACIÓN
3.6.02.01	Administración
3.6.02.02	Administración Comercial
3.6.02.03	Administración de Empresas
3.6.02.04	Administración mención Banca y Finanzas
3.6.02.05	Administración mención Gerencia Industrial
3.6.02.06	Administración Pública
3.6.02.07	Ciencias Administrativas
3.6.02.08	Ciencias Administrativas y Gerenciales
3.6.02.09	Administración de Empresas: Riesgos y Seguros
3.6.02.10	Administración de Empresas de Diseño
3.6.02.11	Administración mención Mercadeo
3.6.03.00	CONTADURÍA
3.6.03.01	Contaduría
3.6.03.02	Contaduría Pública
3.6.04.00	TURISMO Y HOTELERÍA
3.6.04.01	Turismo
3.6.04.02	Hotelería
3.6.04.03	Gestión de la Hospitalidad
3.6.04.04	Administración de Empresas Turísticas
3.6.05.00	COMUNICACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL
3.6.05.01	Comunicación Social
3.6.05.02	Desarrollo Humano
3.6.05.03	Planificación
3.6.05.04	Gerencia de Recursos Humanos
3.6.05.05	Gestión Social de Desarrollo Local
3.6.05.06	Sociología
3.6.05.07	Trabajo Social
3.6.05.08	Psicología
3.6.05.09	Antropología
3.6.05.10	Geografía
3.6.06.00	RELACIONES INDUSTRIALES, PUBLICAS Y GERENCIALES
3.6.06.01	Relaciones Industriales
3.6.06.02	Procesos Gerenciales
3.6.06.03	Relaciones Públicas (Licenciatura)
3.6.06.04	Publicidad
3.6.06.05	Publicidad y Relaciones Públicas
3.6.07.00	ESTADÍSTICA
3.6.07.01	Estadística
3.6.07.02	Ciencias Estadísticas
3.6.07.03	Ciencias Actuariales
3.6.08.00	DERECHO, PENITENCIARIA Y ADUANAS
3.6.08.01	Derecho
3.6.08.02	Derecho Canónico
3.6.08.03	Ciencias Policiales
3.6.08.04	Ciencias Políticas
3.6.08.05	Criminalística
3.6.08.06	Criminología
3.6.08.07	Estudios Internacionales
3.6.08.08	Estudios Liberales
3.6.08.09	Estudios Políticos y Administrativos
3.6.08.10	Comercio Internacional
3.6.08.11	Estudios Internacionales
3.6.08.12	Ciencias Fiscales: Rentas, Aduanas y Comercio Exterior, Finanzas Públicas.
3.7.00.00	HUMANIDADES, LETRAS Y ARTES
3.7.01.00	HUMANIDADES
3.7.01.01	Filosofía
3.7.01.02	Teología
3.7.01.03	Bibliotecología y Archivología
3.7.01.04	Historia
3.7.01.05	Historia Eclesiástica
3.7.01.06	Información y Documentación
3.7.02.00	LETRAS
3.7.02.01	Idiomas Modernos
3.7.02.02	Idiomas Modernos mención Inglés
3.7.02.03	Letras
3.7.02.04	Letras Hispánicas

3.7.02.05	Letras mención Historia del Arte
3.7.02.06	Letras mención Lengua y Literatura Hispánica y Venezolana
3.7.02.07	Letras mención Lengua y Literatura Clásica
3.7.03.00	ARTES
3.7.03.01	Artes
3.7.03.02	Artes Escénicas mención Danza
3.7.03.03	Artes mención Diseño Gráfico
3.7.03.04	Artes mención Museología
3.7.03.05	Artes Plásticas
3.7.03.06	Artes Visuales
3.7.03.07	Actuación
3.7.03.08	Danza
3.7.03.09	Historia de las Artes Plásticas y Museología
3.7.03.10	Medios Audiovisuales
3.7.03.11	Música
3.7.03.12	Música mención Musicología
3.7.03.13	Teatro
3.8.00.00	CIENCIAS Y ARTES MILITARES
3.8.01.00	CIENCIAS Y ARTES MILITARES
3.8.01.01	Ciencias Navales
3.8.01.02	Ciencias y Artes Militares: Opción Administración Pública
3.8.01.03	Ciencias y Artes Militares: Opción Aeronáutica
3.8.01.04	Ciencias y Artes Militares: Opción Terrestre

Artículo 4º. Las áreas ocupacionales establecidas en el presente decreto, se establecen conforme a la clasificación del Sistema Educativo y las oportunidades de estudio en las instituciones de Educación Superior en la República Bolivariana de Venezuela, garantizando la educación formal del funcionario y en gran medida el aprendizaje por experiencia en situaciones concretas de trabajo, conformando una clasificación de cargos de carrera que funcionará con estructuras organizacionales horizontales por niveles directivos, operativos y de apoyo, estos últimos conformados por equipos o grupos de trabajadoras y trabajadores que realizan tareas que presentan gran similitud y son la razón de ser de las instituciones:

Ciencias Básicas: Las trabajadoras y los trabajadores comprendidos en este grupo, realizan investigaciones puras y aplicadas, y estudian las aplicaciones prácticas de los conocimientos científicos; estudian en laboratorios y en condiciones naturales, el origen, desarrollo, estructura, herencia y otros aspectos fundamentales de los organismos vegetales y vivos; estudian la materia, sus propiedades, composición, transformación molecular y atómica; estudian la naturaleza, la energía en todas sus formas; las leyes que rigen los movimientos de los cuerpos; resuelven problemas matemáticos complejos e incidentales en las investigaciones científicas y económicas.

Arquitectura, Ingeniería y Tecnología: Las trabajadoras y los trabajadores comprendidos en este grupo planean y diseñan proyectos de arquitectura paisajista, edificios, arquitectura civil, construcción de carreteras, calles, vías férreas, además de vigilar su realización, conservación y reparación; miden las propiedades físicas de la tierra, entre ellas localizar, evaluar, extraer y explotar minerales sólidos, metálicos o no; investigan el ciclo hidrológico, obtienen y transforman los materiales en productos útiles al hombre, procesan los materiales metálicos en materia prima útiles en la industria, preparan, organizan y controlan los trabajos de extracción almacenamiento, procesamiento y transporte del petróleo y gas natural; conocen la naturaleza y características de la información, estructura, clasificación, almacenamiento y recuperación de datos, resuelven problemas que requieren el uso de un computador, realizan programación de cálculos y problemas no numéricos, analizan, diseñan e instrumentan sistemas de información, programas de aplicación, bases de datos, implantación y mantenimiento de sistemas, redes y telecomunicaciones; estudian los fenómenos electromagnéticos de los materiales para su aplicación en el diseño, fabricación, análisis, funcionamiento y reparación de dispositivos como medio de mejorar, procesar y transmitir la información, estudian los aspectos relacionados con la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, sus sistemas e instalaciones; se ocupan del diseño y manufactura de máquinas y equipos, desarrollo, instalación, operación, mantenimiento de procesos y plantas industriales.

Ciencias del Agro y del Mar: Las trabajadoras y los trabajadores de este grupo realizan investigaciones puras y

aplicadas, estudian aplicaciones prácticas de conocimientos científicos en el campo de las ciencias de la vida; manejan los recursos naturales renovables en forma racional, explotando los cultivos, flora silvestre, recursos de suelo-agua; aplican los principios básicos de la ingeniería en la planificación, diseño y construcción de infraestructura de drenaje, construcciones rurales, vialidad, equipos y maquinarias agrícolas, elaborando a su vez programas de mantenimiento; manejan el procesamiento de materias primas y elaboradas de origen vegetal y animal; estudian los principios de producción, maquinarias, equipos e instalaciones agroindustriales; explotan racionalmente el ganado bovino, porcino, caprino, aves y otras especies domésticas; dirigen y administran los procesos de conservación, transformación y comercialización, tratando de desarrollar nuevas tecnologías con conciencia conservacionista; se ocupan del cuidado integral de los animales incluyendo alimentación, tratamiento médico, mejoramiento genético y reproducción.

Ciencias de la Salud: Las trabajadoras y los trabajadores comprendidos en este grupo hacen diagnósticos, prescriben y administran tratamientos médicos y quirúrgicos; preparan y administran los medicamentos; planifican, ejecutan y evalúan programas de asistencia en el área de nutrición; efectúan análisis y pruebas de laboratorio destinados a determinar la cuantificación de sustancias en el organismo; preparan, identifican, seleccionan, conservan y estandarizan drogas y fármacos para su distribución y uso seguro; están en capacidad para diagnosticar, prevenir y tratar las enfermedades bucales en niños y adultos; dispensan cuidados a los enfermos y ancianos; aplican programas de prevención, alivio o curación a personas con limitaciones o incapacidades físicas o psicosociales; manejan equipos de radiología e imagenología, radiodiagnóstico, electroencefalografía, electro radiografía, etc.; atienden el mantenimiento y reparaciones primarias de estos equipos; proporcionan atención primaria e inmediata a personas víctimas de accidentes o enfermedad repentina; están capacitados para trabajar en programas de higiene de alimentos, control de enfermedades de transmisión sexual, epidemiología, estadísticas de salud, programas de vivienda rural, acueductos y cloacas rurales, control de residuos, control de roedores, higiene ocupacional, inspección en centros de expendio de alimentos, etc.; están preparados para estudiar, analizar y dirigir los diferentes aspectos financieros y administrativos de un centro de salud.

Ciencias de la Educación: Las trabajadoras y los trabajadores comprendidos en este grupo dan clases colectivas y lecciones particulares a los alumnos de nivel superior, medio, primario o preescolar; aplican métodos, técnicas, procedimientos y recursos pedagógicos para el proceso de enseñanza-aprendizaje; investigan la problemática educativa desde el punto de vista individual y social; planifican, diseñan, producen y desarrollan medios y materiales de instrucción para la enseñanza; desempeñan los roles de facilitador de aprendizaje, orientación, promotor social e investigador de educación básica; facilitan el desarrollo integral del niño en edad preescolar aplicando técnicas y procedimientos didácticos adecuados; enseñan en los diferentes niveles de educación las menciones en computación, informática y los principios básicos de matemática, física, química, biología; aplican técnicas fundamentadas en la enseñanza especial: dificultades del aprendizaje, deficiencias auditivas y retardo mental; están capacitados para la docencia en el área de administración, contabilidad y secretariado con actitud crítica y objetiva; promueven el aprendizaje teórico y práctico de la electrónica, normas de seguridad, higiene y prevención de accidentes en ambientes educativos; aplican técnicas, estrategias y métodos para el desarrollo de habilidades motoras en el individuo, valoran la importancia de la educación física, el deporte y la recreación; planifican, implementan y evalúan programas educativos para el aprendizaje de lenguas extranjeras, lengua y literatura, castellano, latín y lengua modernas; propician en el educando el desarrollo potencial expresivo, creativo e intuitivo. Este grupo incluye a las

trabajadoras y a los trabajadores que proporcionan guía espiritual, propagan las doctrinas religiosas y tratan de curar las dolencias humanas por el poder de la fe.

Ciencias Sociales: Las trabajadoras y los trabajadores que conforman este grupo están en capacidad de organizar, dirigir y asesorar sobre los problemas de contabilidad a particulares, empresas, organismos e instituciones gubernamentales; administran, controlan, organizan y dirigen organizaciones públicas; estudian y analizan los problemas organizacionales y funcionales y ofrecen alternativas que faciliten la toma de decisiones; se ocupan de las labores en el área de relaciones industriales en lo relativo a la administración de personal, contratación colectiva, seguro social, higiene y seguridad industrial; idean métodos para analizar datos económicos y estadísticos, los compilan e interpretan; resuelven problemas económicos de las unidades de administrativas, determinan las necesidades de información financiera; conocen el marco jurídico legal donde desarrollan la actividad; se ocupan de los procesos administrativos relacionados con suministro, almacenaje, transporte de materias primas, bienes y productos necesarios para el proceso industrial; organizan y ejecutan programas de relaciones públicas en las instituciones; planifican, organizan y ejecutan los procesos administrativos de la oficina moderna; están capacitados para llevar a cabo funciones operativas de carácter fiscal y administrativas en las áreas aduanales; interpretan las leyes, normas y procedimientos del comercio internacional; organizan, coordinan y dirigen actividades relacionadas con la actividad portuaria y del transporte; gerencian, planifican, coordinan y ejecutan las actividades del servicio hotelero y su promoción en el ámbito nacional e internacional; dirigen, organizan y planifican proyectos publicitarios, editoriales, imprentas, diseño gráfico, radio, cine, prensa y televisión utilizando el recurso de la computación como herramienta de trabajo; se desempeñan eficaz y eficientemente en actividades que involucren las políticas, procesos y recursos de la mercadotecnia, elaboran material destinado a instruir, informar, recrear e influenciar al público; redactan artículos y noticias sobre los hechos o acontecimientos que constituyen la noticia para los medios de comunicación social, corrigen reportes sobre noticias generales, escriben crónicas deportivas, políticas, financieras y sociales; estudian la problemática social a nivel individual, grupal y comunitaria, dirigen programas de ayuda a la población de acuerdo a las políticas sociales del Estado; estudian científicamente el quehacer humano en los ámbitos psicosociales, psicosocial, institucional y comunitario; investigan, diagnostican y orientan individual o grupalmente a niños, adolescentes, adultos y familias; plantean problemas del comportamiento social, diagnostican sus causas y jerarquizan prioridades de solución; planifican y programan estudios e investigación; determinan métodos y procedimientos; elaboran instrumentos para la recolección y tabulación de la información; aplican los principios básicos de la planificación al proceso del desarrollo; investigan los orígenes y evolución de los cambios en las características físicas y en las instituciones culturales y sociales; estudian la problemática, sistematización y correlación de los hechos y fenómenos físicos, naturales, culturales y socioeconómicos que se producen en la superficie terrestre; definen los derechos y restricciones que se traducen en articular cláusulas legales; investigan y estudian metodológicamente las leyes eclesásticas; se especializan con capacidad de intervención, investigación y prospección sobre la problemática de la delincuencia y el control social; investigan dentro del área técnico policial lo referente a delitos, descubrimiento, individualización, identificación y aprehensión de los culpables, realizan funciones de planificación, dirección, ejecución, control y evaluación de las áreas de patrullaje, comando, operaciones policiales, seguridad de instalaciones, comunicación policial, defensa personal y primeros auxilios tipo policial.

Humanidades, Letras y Artes: Las trabajadoras y los trabajadores de este grupo crean y ejecutan obras de arte, escultura, pintura, dibujo y grabado; aplican técnicas de

ilustración, decoración y de publicidad comercial; hacen fotografías, dirigen y manejan cámaras de cines y televisión; componen, adaptan, dirigen e interpretan obras musicales y danzas; producen, dirigen e interpretan obras teatrales, películas y programas de radio y televisión; comprenden y evalúan el qué hacer filosófico del hombre durante su proceso histórico; realizan estudios sobre el fenómeno religioso; dominan la materia literaria y lingüística, siendo capaces de impartir enseñanza y realizar investigaciones en el campo literario y filosófico; se ocupan del estudio de las diversas expresiones de la lengua y literatura, así como de la divulgación, preservación y administración de las manifestaciones artísticas.

Ciencias y Artes Militares: Están comprendidos en este grupo las trabajadoras y los trabajadores que sirven a las fuerzas Armadas Nacionales, es decir, los miembros permanentes de los ejércitos de tierra, mar y aire y de los servicios militares dependientes de los mismos.

Artículo 5º. Es responsabilidad de la unidad administrativa con competencia en recursos humanos de cada órgano y ente de la Administración Pública Nacional, la transición progresiva del sistema de clasificación de cargos de carrera a lo establecido en el presente Decreto, en concordancia con el cronograma y lineamientos que a tal efecto realice el órgano rector de la función pública, que aprobará sus resultados.

Artículo 6º. En cumplimiento de lo establecido en el artículo anterior, el Ministerio del Poder Popular para la Planificación y Desarrollo, por órgano del Viceministerio de Planificación y Desarrollo Institucional, coordinará mesas de trabajo con el personal directivo, operativo y de apoyo técnico de las unidades administrativas de los diferentes órganos y entes de la Administración Pública Nacional.

A tales efectos, el Ministerio del Poder Popular para la Planificación y Desarrollo **dictará el Manual Descriptivo de Competencias Genéricas para Cargos de carrera de la Administración Pública Nacional**, conforme al cual, las Oficinas de Recursos Humanos definirán las tareas y perfiles de competencias que requieran para el cumplimiento de sus objetivos y metas institucionales; e implementarán políticas de ingresos y ascensos sustentadas en el sistema de méritos, en los parámetros técnicos establecidos en el prenombrado manual.

Artículo 7º. Cada órgano o ente de la Administración Pública Nacional, realizará la propuesta sobre las competencias específicas de cada clase o grupo de cargos que se corresponda con los criterios y necesidades propias de su desempeño institucional, la cual deberá ser enviada para su revisión y posterior aprobación al órgano rector de la función pública.

Artículo 8º. El órgano rector de la función pública, podrá actualizar la codificación de profesiones o carreras que se requieran incorporar o suprimir del sistema de clasificación de cargos de carrera establecido en el presente Decreto, en concordancia con las exigencias del Sistema Educativo y las oportunidades de estudio de la República Bolivariana de Venezuela.

Artículo 9º. Las dudas que se susciten con motivo de la aplicación de este Decreto serán resueltas por el órgano rector de la función pública.

Artículo 10. Al entrar en vigencia el presente Decreto quedarán derogados los Decretos: Nº 193 publicado en la Gaceta Oficial Extraordinario número 4.728 de fecha 27 de Mayo de 1994, 446 publicado en la Gaceta Oficial número 35.605 de fecha 08 de Diciembre de 1994, 1.452 publicado en la Gaceta Oficial número 37.296 de fecha 03 de Octubre de 2001 y 3.153 publicado en la Gaceta Oficial número 38.054 de fecha 29 de Octubre de 2004, así como cualquier otra disposición legal o técnica referente a los sistemas de clasificación de cargos que contradiga la aplicación del presente Decreto.

Artículo 11. El presente decreto entrará en vigencia a partir del 1º de mayo de 2008.

Dado en Caracas, a los veintinueve días del mes de abril de dos mil ocho. Años 198º de la Independencia, 149º de la Federación y 10º de la Revolución Bolivariana.

Ejecútese,
(L.S.)

HUGO CHAVEZ FRIAS

Refrendado
El Vicepresidente Ejecutivo
(L.S.)

RAMON ALONZO CARRIZALEZ RENGIFO

Refrendado
El Ministro del Poder Popular del
Despacho de la Presidencia
(L.S.)

JESSE CHACON ESCAMILLO

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
Relaciones Interiores y Justicia
(L.S.)

RAMON EMILIO RODRIGUEZ CHACIN

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
Relaciones Exteriores
(L.S.)

NICOLAS MADURO MOROS

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
las Finanzas
(L.S.)

RAFAEL EDUARDO ISEA ROMERO

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
la Defensa
(L.S.)

GUSTAVO REYES RANGEL BRICEÑO

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
las Industrias Ligeras y Comercio
(L.S.)

WILLIAN ANTONIO CONTRERAS

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
las Industrias Básicas y Minería
(L.S.)

RODOLFO EDUARDO SANZ

Refrendado
La Ministra del Poder Popular para
el Turismo
(L.S.)

OLGA CECILIA AZUAJE

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
la Agricultura y Tierras
(L.S.)

ELIAS JAUA MILANO

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
la Educación Superior
(L.S.)

LUIS ACUÑA CEDEÑO

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
la Educación
(L.S.)

ADAN CHAVEZ FRIAS

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
el Trabajo y Seguridad Social
(L.S.)

ROBERTO MANUEL HERNANDEZ

Refrendado
El Encargado del Ministerio del Poder Popular para
la Infraestructura
(L.S.)

ISIDRO UBALDO RONDON TORRES

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
la Energía y Petróleo
(L.S.)

RAFAEL DARIO RAMIREZ CARREÑO

Refrendado
La Ministra del Poder Popular para
el Ambiente
(L.S.)

YUVIRI ORTEGA LOVERA

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
la Planificación y Desarrollo
(L.S.)

HAIMAN EL TROUDI

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
Ciencia y Tecnología
(L.S.)

HECTOR NAVARRO DIAZ

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
la Comunicación y la Información
(L.S.)

ANDRES GUILLERMO IZARRA GARCIA

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
la Economía Comunal
(L.S.)

PEDRO MOREJON CARRILLO

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
la Alimentación
(L.S.)

FELIX RAMON OSORIO GUZMAN

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
la Cultura
(L.S.)

FRANCISCO DE ASIS SESTO NOVAS

Refrendado
La Ministra del Poder Popular para
la Vivienda y Hábitat
(L.S.)

EDITH BRUNELA GOMEZ

Refrendado
La Ministra del Poder Popular para
la Participación y Protección Social
(L.S.)

ERIKA DEL VALLE FARIAS PEÑA

Refrendado
La Ministra del Poder Popular para
el Deporte
(L.S.)

VICTORIA MERCEDES MATA GARCIA

Refrendado
La Ministra del Poder Popular para
las Telecomunicaciones y la Informática
(L.S.)

SOCORRO ELIZABETH HERNANDEZ

Refrendado
La Ministra del Poder Popular para
los Pueblos Indígenas
(L.S.)

NICIA MALDONADO MALDONADO

Refrendado
La Ministra de Estado para
Asuntos de la Mujer
(L.S.)

MARIA LEON

Decreto Nº 6.056

29 de abril de 2008

HUGO CHAVEZ FRIAS
Presidente de la República

En ejercicio de la atribución que me confiere el numeral 16 del artículo 236 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en concordancia con el artículo 65 de la Ley Orgánica de la Administración Pública y los artículos 4º, 18 y 20 numeral 5 de la Ley del Estatuto de la Función Pública,

DECRETO

Artículo 1º. Designo al ciudadano **FREDDY JESUS FERNANDEZ TORRES**, titular de la cédula de identidad Nº V-8.030.286, como Viceministro de Estrategia Comunicacional del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información.

Artículo 2º. Delego en el Ministro del Poder Popular para la Comunicación y la Información la juramentación del referido ciudadano.

Dado en Caracas, a los veintinueve días del mes de abril de dos mil ocho. Años 198º de la Independencia, 149º de la Federación y 10º de la Revolución Bolivariana.

Ejecútese,
(L.S.)

HUGO CHAVEZ FRIAS

Refrendado
El Vicepresidente Ejecutivo
(L.S.)

RAMON ALONZO CARRIZALEZ RENGIFO

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
la Comunicación y la Información
(L.S.)

ANDRES GUILLERMO IZARRA GARCIA

Decreto Nº 6.057

30 de abril de 2008

HUGO CHAVEZ FRIAS
Presidente de la República

En ejercicio de la atribución que me confiere el numeral 3 del artículo 236 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

DECRETO

Artículo Unico. Nombro Ministra del Poder Popular para Ciencia y Tecnología, a la ciudadana **NURIS ORIHUELA GUEVARA**, titular de la cédula de identidad N° 4.289.428, a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Dado en Caracas, a los treinta días del mes de abril de dos mil ocho. Años 198° de la Independencia, 149° de la Federación y 10° de la Revolución Bolivariana.

Ejecútese,
(L.S.)

HUGO CHAVEZ FRIAS

MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA RELACIONES
INTERIORES Y JUSTICIA

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA
DESPACHO DEL MINISTRO
198° y 149°

N° 139 Fecha: 28 ABR. 2008

RESOLUCIÓN

El **Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia**, según se evidencia en el Decreto N° 5.792 de fecha 04 de enero de 2008, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.843, en ejercicio de la atribución conferida en el numeral 3 del artículo 76 de la Ley Orgánica de la Administración Pública,

CONSIDERANDO

Que el Instituto Geográfico de Venezuela Simón Bolívar como ente rector de la actividad geográfica, cartográfica y de catastro de Estado, impulsó a través del Convenio Marco de Cooperación para la Formación y Conservación del Catastro Nacional, el establecimiento de mecanismos de cooperación y coordinación interinstitucional entre diversos organismos que integran la Administración Pública Nacional, a los fines de generar una base de datos catastral uniforme, completa, actualizada y sistematizada que propenderá a la formación y conservación del catastro, tal como lo establece la Ley de Geografía, Cartografía y Catastro Nacional.

CONSIDERANDO

Que para la fecha de elaboración y tramitación de suscripción del Convenio Marco antes indicado se produjo el cambio de titular de este Despacho.

RESUELVE

A los fines de continuar con las gestiones iniciadas tendentes a cumplir con los postulados de la Ley de Geografía, Cartografía y Catastro Nacional a través del Convenio Marco en referencia, y una vez leído su contenido, se suscribe este documento en señal de conformidad formando parte integrante del mismo.

Ramón Rodríguez Chacín
Ministro

Comuníquese y Publíquese

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA
RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA
DESPACHO DEL MINISTRO
198° y 149°

N° 140 FECHA 30 ABR. 2008

RESOLUCIÓN

El Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia, según Decreto N° 5.792 de fecha 04 de enero de 2008, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.843 de fecha 04 de enero de 2008, en ejercicio de las atribuciones que le confiere lo dispuesto en los numerales 2 y 18 del artículo 76 de La Ley Orgánica de la Administración Pública Nacional; en concordancia con lo establecido en los artículos 5 numeral 2, y 20 numeral 6 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, designa al ciudadano **MARIO DE JESÚS ARVELAEZ RENGIFO**, titular de la cédula de identidad N° V-4.311.513, como Director General del Despacho adscrito al Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia.

De conformidad con lo previsto en el artículo 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.305 de fecha 17 de octubre de 2001, en concordancia con el artículo 1° del Reglamento sobre Delegación de Firma de los Ministros del Ejecutivo Nacional, dictado a través del Decreto N° 140 de fecha 17 de septiembre de 1969, publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 29.025 de fecha 18 de septiembre de 1969, se le delega la competencia y la firma de los documentos que conciernen y competen a la Dirección a su cargo.

Comuníquese y Publíquese.
Por el Ejecutivo Nacional,

RAMÓN RODRÍGUEZ CHACÍN
Ministro del Poder Popular para
Relaciones Interiores y Justicia

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA
RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA
DESPACHO DEL MINISTRO
198° y 149°

N° 141 FECHA 30 ABR. 2008

RESOLUCIÓN

El Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia, según Decreto N° 5.792 de fecha 04 de enero de 2008, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.843 de fecha 04 de enero de 2008, en ejercicio de las atribuciones que le confiere lo dispuesto en los numerales 2 y 12 del artículo 76 de la Ley Orgánica de la Administración Pública; en concordancia con lo establecido en el contenido en la cláusula novena del Acta Constitutiva de la Fundación Misión Identidad, designo a los directores del Consejo Directivo de la Fundación Misión Identidad:

1. Ciudadano **José Javier Morales**, titular de la cédula de identidad N° V-12.075.438, Presidente.
2. Ciudadano **Menry Rafael Fernández Pereira**, titular de la cédula de identidad N° V-10.091.029, Director; Ciudadana **María Inés Totesautt**, titular de la cédula de identidad N° V-12.352.435, Suplente del Director.
3. Ciudadana **Claudia Alejandra Rodríguez Maíz**, titular de la cédula de identidad N° V-13.114.305, Directora; Ciudadano **Mario de Jesús Arvelaez Rengifo**, titular de la cédula de identidad N° V- 4.311.513, Suplente de la Directora.
4. Ciudadano **Julián José Salcedo Franco**, titular de la cédula de identidad N° V-5.430.166, Director; Ciudadana **Miria Margarita Blanco Pérez**, titular de la cédula de identidad N° V-9.064.638, Suplente del Director.
5. Ciudadana **María Eugenia Urbina Arias**, titular de la cédula de identidad N° V-5.592.127, Directora; Ciudadana **Berenice Bernal Iribarren**, titular de la cédula de identidad N° V-13.991.764, Suplente de la Directora.

Comuníquese y Publíquese.
Por el Ejecutivo Nacional,

RAMON RODRÍGUEZ CHACÍN
MINISTRO DEL PODER POPULAR
PARA RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA
RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA
DESPACHO DEL MINISTRO
198º y 149º

Nº 142

FECHA 30 APR. 2008

RESOLUCIÓN

El Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia, según Decreto Nº 5.792 de fecha 04 de enero de 2008, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 38.843 de fecha 04 de enero de 2008, en ejercicio de las atribuciones que le confiere lo dispuesto en los numerales 2 y 18 del artículo 76 de la Ley Orgánica de la Administración Pública; en concordancia con lo establecido en los artículos 5 numeral 2, y 20 numeral 6 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, designa al ciudadano **Luis Ernesto Díaz Curbelo**, titular de la Cédula de Identidad Nº **V-3.889.019**, como Director General de Protección Civil y Administración de Desastres (E).

De conformidad con lo previsto en el artículo 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 37.305 de fecha 17 de octubre de 2001, en concordancia con el artículo 1º del Reglamento sobre Delegación de Firma de los Ministros del Ejecutivo Nacional, dictado a través del Decreto Nº 140 de fecha 17 de septiembre de 1969, publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 29.025 de fecha 18 de septiembre de 1969, se le delega la competencia y la firma de los documentos que conciernen y competen a la Dirección a su cargo.

Comuníquese y Publíquese.
Por el Ejecutivo Nacional,

RAMÓN RODRÍGUEZ CHACÍN
MINISTRO DEL PODER POPULAR
PARA RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA



MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA LAS FINANZAS

República Bolivariana de Venezuela - Ministerio del Poder Popular para las Finanzas - Oficina Nacional de Presupuesto- Número: 25 Caracas, 30 de abril de 2008 - 198º y 149º

PROVIDENCIA

Por disposición del ciudadano Vicepresidente Ejecutivo en Consejo de Ministros de fecha 29 de Abril de 2008, autorizado para este acto por el Presidente de la República, de acuerdo a lo previsto en el Artículo 242 y el Numeral 4 del Artículo 239, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y conforme a lo establecido en los Artículos 69 y 71 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, se aprueba el Presupuesto de Ingresos y Gastos 2008 de la empresa **PETROLEOS DE VENEZUELA, S.A (PDVSA)**, por la cantidad de **CIENTO VENTIUN MIL SETECIENTOS DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL BOLÍVARES FUERTES (Bs.F 121.719.582.000)**. Decisión ésta, ratificada por el ciudadano Presidente de la República, en fecha 29 de Abril de 2008. En consecuencia, se autoriza su publicación de acuerdo con la siguiente distribución:

CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO (Bolívares Fuertes)	
Concepto	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. Ingresos Corrientes	84.197.070.000
- Ingresos de Operación	84.018.532.000
Venta de Bienes y Servicios	
Internas	5.387.391.000
Exportación	78.631.141.000
- Otros Ingresos	178.538.000
B. Gastos Corrientes	81.091.032.000
- Gastos de Operación	26.958.456.000
Remuneraciones	5.064.589.000
Compras Locales	1.171.274.000
Importaciones y Otros	3.132.944.000
Gastos de Exploración	521.057.000
Costos de Operaciones	13.023.229.000
Otros Gastos	
Depreciación y Amortización	4.045.363.000

- Gastos Ajenos a la Operación	54.132.576.000
Regalías	28.944.000.000
Otros Gastos	25.188.576.000
Impuesto Sobre la Renta	15.206.000.000
Impuesto de Extracción	3.184.000.000
Impuesto de Registro de Exportación	80.000.000
Otros Gastos	5.152.546.000
Gastos Financieros	1.566.030.000
C. Resultado Económico: Ahorro	3.106.038.000
II. CUENTA CAPITAL	
A. Recursos de Capital	7.151.401.000
Ahorro en Cuenta Corriente	3.106.038.000
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	4.045.363.000
B. Gastos de Capital	33.690.500.000
Activos Reales	33.690.500.000
C. Resultado Financiero: Déficit	26.539.099.000
III. CUENTA FINANCIERA	
A. Recursos Financieros	33.477.149.000
Flujo de Caja PALMAVEN	115.936.000
Disminución del Capital de Trabajo	33.361.213.000
B. Aplicaciones Financieras	33.477.149.000
Disminución de Otros Pasivos	2.638.050.000
Disminución de los Resultados Acumulados	4.300.000.000
Déficit Financiero	26.539.099.000

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE RECURSOS Y EGRESOS

Concepto	Presupuesto 2008
RECURSOS	121.719.582.000
Ingresos Corrientes	84.197.070.000
Recursos de Capital	4.045.363.000
Recursos Financieros	33.477.149.000
GASTOS Y APLICACIONES	121.719.582.000
Gastos Corrientes	81.091.032.000
Gastos de Capital	33.690.500.000
Aplicaciones Financieras	6.938.050.000

PRESUPUESTO DE GASTOS

Denominación	Presupuesto 2008
Remuneraciones	5.064.589.000
Compras Locales	1.171.274.000
Importaciones y Otros	3.132.944.000
Gastos de Exploración	521.057.000
Costos de Operaciones	13.023.229.000
Disminución de Resultados Acumulados	4.300.000.000
Activos Reales	33.690.500.000
Disminución de Pasivos	2.638.050.000
Otros Gastos	58.177.939.000
Total	121.719.582.000

RECURSOS HUMANOS

DENOMINACION	N° de Cargos
Personal Fijo a Tiempo Completo	71.652
-Nómina Ejecutiva	1.126
-Nómina Mayor	37.852
-Nómina Menor	16.959
-Nómina Diaria	15715
Total	71.652

PRINCIPALES METAS

Denominación	Unidad de medida	Presupuesto 2008
Producción	MBD	3.637
Crudos	MBD	3.448
LGN	MBD	182
Condensados	MBD	7
Exportación	MBD	2.908
Crudos	MBD	2.225
Productos	MBD	683
Ventas Locales	MBD	1.048
Productos	MBD	550
Gas Natural	MBD	458

Comuníquese y Publíquese.
Por el Ejecutivo Nacional,

ALFREDO R. PARDO ACOSTA
Jefe de la Oficina Nacional de Presupuesto

MINISTERIOS DEL PODER POPULAR PARA
LAS INDUSTRIAS LIGERAS Y COMERCIO,
PARA LA AGRICULTURA Y TIERRAS
Y PARA LA ALIMENTACIÓN

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS INDUSTRIAS LIGERAS Y COMERCIO. RESOLUCION DM/ N° 388.- MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA AGRICULTURA Y TIERRAS. RESOLUCIÓN DM/ N° 100/2008.- MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA ALIMENTACIÓN. RESOLUCION DM/N° 039. CARACAS, 30 de abril de 2008.

AÑOS 198º Y 149º

Por cuanto, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que el Estado debe garantizar la seguridad alimentaria de la población, la cual se alcanzará desarrollando y privilegiando la producción primaria de las actividades agrícolas, vegetal, pecuario, acuicola, pesquera y forestal, en tal sentido le corresponde dictar medidas de orden financiero, comercial, y cualquiera que fueren necesarias para alcanzar los niveles estratégicos de autoabastecimiento y promover acciones para compensar las desventajas propias de la actividad agrícola;

Por cuanto, le corresponde al Ejecutivo Nacional promover e impulsar la competitividad del sector agrícola del país, para lo cual es necesario constituir e instrumentar una política comercial;

Por cuanto, las políticas comerciales deben considerar mecanismos e instrumentos de aplicación adaptados a la dinámica agrícola y permitir ajustes razonables para mantener un equilibrio sectorial;

De conformidad con lo establecido en el artículo 305 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en ejercicio de las atribuciones

previstas en el artículo 76, numeral 8, de la Ley Orgánica de la Administración Pública, artículos 5, 23 y 24 de la Ley de Mercadeo Agrícola, artículo 5 de la Ley de Protección al Consumidor y al Usuario; de conformidad con lo dispuesto en el Decreto N° 2.304 de fecha 5 de Febrero de 2003, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.626, de fecha 6 de febrero de 2003 y en concordancia con lo estipulado en los artículos 11 numeral 3, 14 numerales 1 y 18, y 26 numerales 1 y 11 del Decreto N° 5.246 sobre Organización y Funcionamiento de la Administración Pública Nacional publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.654 de fecha 28 de marzo de 2007, estos Despachos dictan la siguiente,

RESOLUCIÓN QUE FIJA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL EL PRECIO DEL POLLO BENEFICIADO

Artículo 1: Se fija en todo el territorio nacional el Precio Máximo de Venta al Público (PMVP) del pollo beneficiado, en los siguientes términos:

Nº	PRODUCTOS	PRESENTACIÓN COMERCIAL	PMVP (Bs.F.)
1	Pollo beneficiado entero y/o picado en todas sus categorías.	1 kg.	8,39
2	Pechuga de pollo con hueso, con piel o sin piel en todas sus presentaciones.	1 kg.	12,91
3	Pechuga de pollo sin hueso, con piel o sin piel en todas sus presentaciones, modalidades y denominaciones.	1 kg.	19,88
4	Muslo de pollo con hueso, con piel o sin piel en todas sus presentaciones.	1 kg.	10,14
5	Muslo de pollo sin hueso, con piel o sin piel en todas sus presentaciones.	1 kg.	17,75

Artículo 2. El Precio Máximo de Venta al Público (PMVP) fijado en la presente Resolución, deberá ser impreso por el productor, fabricante o importador en el cuerpo o envoltorio del producto. En los casos en que la naturaleza del bien, no permita el marcaje del precio en el cuerpo del producto o éste no se mantenga en el producto al momento de su venta al consumidor, se deberá indicar el mismo en listas de precios o carteles de precios por los expendedores, en lugares accesibles y fácilmente visibles por el consumidor.

Artículo 3. Quien realice la venta al consumidor final deberá marcar en el cuerpo del producto o indicar en la lista respectiva, según sea el caso, el precio de venta al público (PVP) y la fecha en que se realizó el marcaje, aunque los productos tengan precio máximo de venta al público (PMVP) marcado por el productor, fabricante o importador. Tal disposición se aplicará a los alimentos regulados y a los no regulados por esta Resolución.

Artículo 4. Cuando el Precio de Venta al Público (PVP) marcado o impreso en el producto o anunciado en listas a la fecha de vigencia de la presente Resolución sea inferior al Precio Máximo de Venta al Público (PMVP) establecido mediante la presente, el producto deberá venderse al Precio de Venta al Público (PVP) marcado, hasta agotarse la existencia.

Cuando el Precio de Venta al Público (PVP) del mercado resulte superior al Precio Máximo de Venta al Público (PMVP) fijado en esta Resolución, los proveedores están obligados a vender a este último precio.

Artículo 5. Se fija en todo el territorio Nacional el Precio Máximo de Venta (PMV) del pollo entero beneficiado empacado, a puerta de planta industrial y/o colocado por el distribuidor en el establecimiento comercial del detallista, en los siguientes términos.

Nº	PRODUCTOS	PRESENTACIÓN COMERCIAL	PMV (Bs.F.)
1	Pollo entero beneficiado empacado, a puerta de Planta industrial.	1 kg.	6,57
2	Pollo entero beneficiado empacado, colocado por el distribuidor en el establecimiento comercial del detallista.	1 kg.	7,42

Artículo 6. El pollo beneficiado entero, despresado y deshuesado, cuyo precio es regulado en la presente Resolución, sólo podrá ser distribuido y expedido en el mercado Nacional en las presentaciones, modalidades y denominaciones objeto del control de precios conforme al presente acto administrativo.

A tal efecto, quienes produzcan, fabriquen, importen, distribuyan o comercialicen pollo beneficiado en todas sus presentaciones, modalidades y denominaciones, están obligados a expender dicho producto en el mercado nacional en las presentaciones indicadas en la presente Resolución.

Artículo 7. La expedición y comercialización en el mercado nacional de pollo beneficiado entero, despresado y deshuesado, en todas sus presentaciones, cuyo precio es regulado en la presente Resolución, deberán observar las disposiciones establecidas en la Resolución Conjunta del Ministerio del Poder Popular para las Industrias Ligeras y Comercio DM/No 385, Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras, DM/No 093/08, Ministerio del Poder Popular para la Salud DM/No 100 y Ministerio del Poder Popular para la Alimentación DM/No 0033, de fecha 11 de abril de 2008, publicada en la Gaceta Oficial No 38.912, de fecha 17 de abril de 2008.

Artículo 8. Se derogan los precios máximos de venta al público (PMVP) establecidos con anterioridad a la vigencia de la presente Resolución Conjunta para el pollo beneficiado entero y/o picado, pechuga de pollo y muslo de pollo, en todas sus presentaciones.

Así mismo, se derogan los precios establecidos para el pollo entero beneficiado empacado, a puerta de planta industrial y/o colocado por el distribuidor en el establecimiento comercial del detallista, establecidos con anterioridad a la vigencia de la presente Resolución Conjunta.

Se deroga la Resolución Conjunta del Ministerio del Poder Popular para las Industrias Ligeras y Comercio DM/No 381, del Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras DM/No 089 y del Ministerio del Poder Popular para la Alimentación DM/No 0031 de fecha 7 de abril de 2008, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 38.918 de fecha 25 de abril de 2008.

Artículo 9. La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Comuníquese y publíquese,
Por el Ejecutivo Nacional,

WILLIAN A. CONTRERAS
Ministro del Poder Popular para las
Industrias Ligeras y Comercio

ELIAS JAUJA MILANO
Ministro del Poder Popular para la
Agricultura y Tierras

FÉLIX OSORIO GUZMÁN
Ministro del Poder Popular
para la Alimentación

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD

NUMERO 109

28 DE ABR

DE 2008
198º y 149º

RESOLUCIÓN

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el Decreto Nº 5.353 de fecha 17 de mayo de 2007, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 38.685 de la misma fecha, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 76 numeral 18º de la Ley Orgánica de la Administración Pública, en concordancia con lo previsto en los artículos 5 numeral 2º, 18 y 19 último aparte de la Ley del Estatuto de la Función Pública y artículo 48 del Reglamento Orgánico del Ministerio del Poder Popular para la Salud.

RESUELVE

Artículo 1. Designar al ciudadano **LUIS PERPETUO OSUNA CARRILLO**, titular de la Cédula de Identidad número V-9.319.752, para ocupar el cargo de libre nombramiento y remoción como **Director General (E) de Cooperación Técnica y Relaciones Internacionales**, adscrito al Despacho del Ministro del Poder Popular para la Salud, cuyas atribuciones serán las siguientes:

1. Asesorar, coordinar y formular la elaboración de políticas en materia de salud con la comunidad de países y organismos internacionales previa aprobación del Ministro del Poder Popular para la Salud.
2. Definir y evaluar las políticas, lineamientos y acciones en materia de gestión de operaciones de financiamiento y cooperación técnica dentro del sector salud, con países y organismos internacionales en coordinación con las instancias correspondientes previa aprobación del Ministro del Poder Popular para la Salud.
3. Promover y difundir el intercambio de experiencias en materia de salud dentro del contexto internacional, y de actividades en materia de financiamiento, cooperación y políticas de carácter internacional donde intervenga el Ministerio, previa aprobación del Ministro del Poder Popular para la Salud.
4. Elaborar proyecto de convenio con entes públicos y privados en las áreas de salud, cuyos objetivos estén orientados a elevar la calidad de vida de las comunidades, para elevarlo a la consideración y aprobación del Ministro del Poder Popular para la Salud.
5. Investigar y analizar la metodología nacional e internacional existente en materia de cooperación técnica y proponer las modificaciones y actualizaciones necesarias, incorporando los elementos que le sean aplicables al Ministerio del Poder Popular para la Salud.

6. Asistir a foros, reuniones, convenciones nacionales e internacionales, a los fines de ampliar y fortalecer las acciones y relaciones inherentes al área de cooperación técnica, previa aprobación del Ministro del Poder Popular para la Salud.
7. Organizar y desarrollar eventos internacionales a celebrarse dentro y fuera del país, orientados a fortalecer la participación de las instituciones, autoridades, y de los funcionarios nacionales e invitados extranjeros, previa aprobación del Ministro del Poder Popular para la Salud.
8. Efectuar el seguimiento, evaluación y control de los diversos acuerdos y compromisos suscritos entre países y organismos internacionales, en coordinación con las diferentes direcciones encargadas de su ejecución, considerando los sistemas de información y los análisis estratégicos del Ministerio del Poder Popular para la Salud.
9. Asesorar técnicamente a las autoridades con competencia en salud, en procesos de negociación, suscripción y modificación de acuerdos, convenios y compromisos internacionales, conjuntamente con el Ministerio de Relaciones Exteriores, previa aprobación del Ministro del Poder Popular para la Salud.
10. Promover la cooperación técnica entre los Estados, a fin de contribuir al fortalecimiento de los países en situación de crisis en materia de salud, previa aprobación del Ministro del Poder Popular para la Salud.
11. Las demás atribuidas por el Ordenamiento Jurídico, así como aquellas que le instruya o delegue el ciudadano Ministro del Poder Popular para la Salud.

Artículo 2. Se delega en el Director del Despacho, la juramentación de Ley.

Artículo 3. Se deroga cualquier Resolución que colida con la presente.

Artículo 4. La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Comuníquese y Publíquese,

JESÚS MARÍA MANTILLA OLIVEROS
Ministro del Poder Popular para la Salud

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD

NUMERO 110 30 DE ABR DE 2008 198º y 149º

RESOLUCIÓN

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el Decreto Nº 5.353 de fecha 17 de mayo de 2007, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 38.685 de la misma fecha, y de

conformidad con lo dispuesto en el artículo 76 numeral 18º de la Ley Orgánica de la Administración Pública, en concordancia con lo previsto en los artículos 5 numeral 2º, 18 y 19 último aparte de la Ley del Estatuto de la Función Pública y artículo 49 del Reglamento Orgánico del Ministerio del Poder Popular para la Salud.

RESUELVE

PARÁGRAFO UNICO: Se deroga la Resolución Nro 088 de fecha diez (10) de Abril de 2008, publicada en la Gaceta Oficial Nro 360.547, de fecha once (11) de Abril de 2008, mediante la cual se designa al ciudadano LUIS ALFONSO NAVAS GIL, titular de la cédula de Identidad número V-8.945.304, para ocupar el cargo de libre nombramiento y remoción como Coordinador Estatal de la Fundación Misión Barrio Adentro del Estado Bolívar.

Comuníquese y Publíquese,

JESÚS MARÍA MANTILLA OLIVEROS
Ministro del Poder Popular para la Salud

MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA LA ENERGIA Y PETROLEO

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA ENERGIA
Y PETROLEO

DESPACHO DEL MINISTRO

Caracas, 05 OCT 2007 Nº 186 197º y 148º

AVISO OFICIAL

Por disposición del ciudadano Presidente de la República y de conformidad con lo establecido en el artículo 84 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, se resuelve corregir por error material la Resolución Nº 201 de fecha 13 de julio de 2006, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 38.480 de fecha 17 de julio de 2006, dado que en el texto de la misma donde dice: "...se encarga..." debe decir "...se designa..." y en el literal c donde se establecen las funciones del cargo, donde dice: "...relacionales..." debe decir "...relacionados..."

Por tanto y actuando conforme a lo dispuesto en los artículos 4 y 5 de la Ley de Publicaciones Oficiales, se procede a una nueva publicación de la citada Resolución, incluyendo la mencionada corrección.

Comuníquese y publíquese,

RAFAEL D. RAMÍREZ C.
Ministro del Poder Popular para
la Energía y Petróleo

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

MINISTERIO DE ENERGÍA Y PETRÓLEO

DESPACHO DEL MINISTRO

Caracas, 13 JUL 2006 Nº 201 197º y 148º

RESOLUCION

Por disposición del ciudadano Presidente de la República y de conformidad con lo establecido en el Artículo 4 y en el

numeral 2 del Artículo 5 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, se designa a partir de la publicación de esta Resolución en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, al ciudadano **HUGO ESPAILLAT CARRILLO**, con Cédula de Identidad N° 3.309.750, como Director General de Petroquímica, adscrita al Despacho del Viceministro de Refinación y Petroquímica de este Ministerio. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 25 del Artículo 76 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, en concordancia con el Artículo 1° del Reglamento de Delegación de Firma de los Ministros del Ejecutivo Nacional, se delega en el ciudadano **HUGO ESPAILLAT CARRILLO**, la firma de los actos y documentos que a continuación se indican:

- a) Las circulares, comunicaciones y avisos oficiales emanados de la Dirección General de Petroquímica.
- b) Los oficios de respuesta a funcionarios subalternos, administrativos, judiciales o municipales de los Estados y del Distrito Capital relacionados con asuntos de la Dirección General de Petroquímica.
- c) La correspondencia postal, telegráfica, radiotelegráfica o de cualquier otra naturaleza en respuesta a solicitudes dirigidas a la Dirección General de Petroquímica, por particulares.
- d) La certificación de las copias de los documentos, oficios, memorandos y circulares emanados de la Dirección General de Petroquímica.

Se autoriza al ciudadano **HUGO ESPAILLAT CARRILLO**, el ejercicio de las siguientes funciones:

- a) Contribuir a la formulación de la política del Ejecutivo Nacional, en lo relativo a las actividades de industrialización y comercialización realizadas en las industrias petroquímica, carboquímica similares y conexas.
- b) Formular lineamientos para la fijación de precios y garantizar la atención prioritaria a la demanda nacional a precios competitivos, mediante el suministro de productos y/o materia prima de cualesquiera de los sectores de petroquímica, carboquímica, similares y conexas, de modo tal que se satisfaga la demanda en dicho mercado y se cumpla con los compromisos contractuales del mercado internacional.
- c) Establecer relación con el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales, para tratar y coordinar los asuntos de la competencia de ambos Despachos de forma clara y ágil, con la finalidad de asegurar el mejor aprovechamiento de los recursos no renovables, así como también, la conservación del ambiente, acorde con el desarrollo sustentable de las actividades de los sectores relacionados.
- d) Proponer la elaboración de normas que regulen las actividades de industrialización de la materia prima petroquímica, carboquímica, similares y conexas y la industrialización de los productos básicos y los subsiguientes en la cadena de valor.
- e) Conocer de la participación de la oferta nacional e internacional de bienes y servicios para las industrias petroquímica, carboquímica, similares y conexas.
- f) Conocer del cumplimiento de los compromisos derivados de la participación nacional en la Organización Mundial de Comercio y del ordenamiento legal referente a las prácticas desleales de comercio.
- g) Mantener vinculación con entes públicos y privados nacionales e internacionales que ejerzan actividades relacionadas con los productos derivados de las industrias petroquímica, carboquímica, similares y conexas.
- h) Verificar que los productos derivados e industrializados de las industrias petroquímica, carboquímica, similares y conexas, cumplan con las especificaciones técnicas fijadas por el Ministerio y las exigidas por las normas nacionales e internacionales.
- i) Evaluar las actividades de industrialización y comercialización de los productos derivados de las industrias petroquímica, carboquímica, similares y conexas.
- j) Ejecutar medidas que propicien la formación y participación de capital nacional en las actividades industriales de la cadena petroquímica "aguas abajo".

- k) Formular el plan operativo y presupuesto anual en el área de su competencia en coordinación con la Oficina de Planificación Estratégica.
- l) Conocer del desarrollo tecnológico y de la materia ambiental en las áreas de su competencia.
- m) Centralizar y coordinar estadísticas de sistemas de información en las áreas de su competencia.
- n) Dirigir, coordinar y gestionar el análisis y evaluación de las actividades de las industrias petroquímica, carboquímica, similares y conexas, a nivel nacional e internacional.
- o) Estudiar y evaluar proyectos de las áreas de petroquímica, carboquímica, similares y conexas.
- p) Aprobar los proyectos que correspondan al área de su competencia.
- q) Formular los lineamientos para los contratos y convenios que las industrias petroquímica, carboquímica, similares y conexas requieran en el mercado internacional.
- r) Revisar y evaluar todos los contratos y convenios en el mercado interno e internacional a ser suscritos a través de las industrias petroquímica, carboquímica, similares y conexas.
- s) Controlar y supervisar las actividades referidas al ámbito financiero que resulten de convenios o contratos en el mercado interno e internacional, en las áreas de petroquímica, carboquímica, similares y conexas.
- t) Proponer la elaboración de normas técnicas legales y de cualquier otra índole en materia de su competencia.
- u) Gestionar ante la Dirección General de Fiscalización e Inspección las acciones de Inspección y Fiscalización en materia de su competencia.
- v) Promover la participación de la industria de bienes y servicios y del cooperativismo, en las actividades de las industrias petroquímica, carboquímica, similares y conexas.
- w) Promover y ejecutar el desarrollo productivo, social, tecnológico y endógeno, en el área de su competencia.
- x) Las demás funciones que le atribuyan las leyes, reglamentos y resoluciones.

Comuníquese y publíquese,

Por el Ejecutivo Nacional,

RAFAEL D. RAMÍREZ CARREÑO
Ministro del Poder Popular Energía y Petróleo

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA PLANIFICACION Y DESARROLLO

REPUBLICA BOLIVARIANA
DE VENEZUELA

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA PLANIFICACION Y DESARROLLO

RESOLUCION

NUMERO N° 041

21 de abril de 2008
197° y 149°

De conformidad con lo establecido en el artículo 84 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, se procede a la corrección de la Resolución N° 037 de fecha 10 de abril

de 2008, publicada en la Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela N° 38 912 de fecha 17 de Abril de 2008, a través del cual se designa al ciudadano GUSTAVO ENRIQUE SANTANA, titular de la cedula de identidad N° V-3.189.882, como Director General de Desarrollo Institucional, adscrito al Despacho del Viceministro Institucional, de este Ministerio, a partir del 01 de abril de 2008, por cuanto se incurrió en el error material al señalar:

"... Director General de Desarrollo Institucional, adscrito al Despacho del Viceministro Institucional...", siendo lo correcto "...Director General (E) de Desarrollo Institucional, adscrito al Despacho del Viceministro de Planificación y Desarrollo Institucional."

En consecuencia, inclúyase la anterior expresión y reimprímase íntegramente el texto de la Resolución 037 de fecha 10 de Abril de 2008, subsanándose el error antes referido y manteniendo el mismo número y fecha.

Comuníquese y Publíquese.
Por el Ejecutivo Nacional,

HAIMAN EL TROUDI
Ministro del Poder Popular
para la Planificación y Desarrollo

REPUBLICA BOLIVARIANA
DE VENEZUELA

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA
PLANIFICACION Y DESARROLLO

RESOLUCION

NUMERO N° 037

10 de abril de 2008
197° y 149°

De conformidad con lo previsto en el numeral 2 del artículo 5 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, en concordancia con el numeral 6 del artículo 20 *ejusdem*, se designa al ciudadano GUSTAVO ENRIQUE SANTANA, titular de la cedula de identidad N° V-3.189.882, como Director General (E) de Desarrollo Institucional, adscrito al Despacho del Viceministro de Planificación y Desarrollo, de este Ministerio, a partir del 01 de abril de 2008.

Comuníquese y Publíquese.
Por el Ejecutivo Nacional,

HAIMAN EL TROUDI
Ministro del Poder Popular
para la Planificación y Desarrollo

REPUBLICA BOLIVARIANA
DE VENEZUELA

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA
LA PLANIFICACION Y DESARROLLO


RESOLUCIÓN

21 de abril de 2008
197° y 149°

Número 043

De conformidad con lo previsto en el numeral 2 del artículo 5 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, en concordancia con el numeral 6 del artículo 20 *ejusdem*, se designa a el ciudadano JULIO CESAR PEREZ, titular de la Cedula de Identidad N° 6.661.160, como DIRECTOR GENERAL, de la Dirección General de Planificación de Corto Plazo, adscrita al Despacho de la Viceministro de Planificación y Desarrollo Económico, a partir del 02/05/2008

Comuníquese y Publíquese.
Por el Ejecutivo Nacional,

HAIMAN EL TROUDI


MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA LA ECONOMIA COMUNAL

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA
ECONOMÍA COMUNAL

DESPACHO DEL MINISTRO-DIRECCIÓN GENERAL DE LA
OFICINA DE CONSULTORÍA JURÍDICA.

NUMERO: 045 CARACAS, 28 DE ABRIL DE 2008

197° y 149°

RESOLUCIÓN

El Ministro del Poder Popular para la Economía Comunal, en ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo único del Decreto N° 5.106 de fecha 8 de Enero de 2007, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.600 de fecha 9 de Enero de 2007, de conformidad con lo establecido en los artículos 62 y 76 numerales 14 y 18 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4 de las Disposiciones Generales de la Ley de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2008, en concordancia con lo previsto en los numerales 2, 3 y 4 del artículo 86 del Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público sobre el Sistema Presupuestario, procede a la Publicación del Traspaso Presupuestario de Gastos de Capital del **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA ECONOMIA COMUNAL** por la cantidad de Bolívars **SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO BOLIVARES FUERTES (Bs. F. 742.735)** Fuente de Financiamiento 1 Ingresos Ordinarios, que fue aprobado por este Ministerio mediante Traspaso Interno N° 4991 de fecha 22 de abril de 2008, de acuerdo con la siguiente imputación:

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA ECONOMÍA
COMUNAL.

PROYECTO 400012000 FORTALECIMIENTO DE LA
COOPERATIVA FASE II.
Acción Específica 400012001 Asistencia Técnica en materia
organizativa, administrativo-contable para las cooperativas.

UEL 00013 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE COOPERATIVAS
(SUNACOOP).


Partida Cedente 404 "Activos Reales"

Sub-Partida Genérica, Específica y Sub-Específica.
02.01.00 "Conservación, ampliaciones y mejoras mayores de
obras en bienes del dominio privado" Bs. F. 742.735.

Partida Receptora 404 "Activos Reales"

Sub-Partida Genérica, Específica y Sub-Específica
05.01.00 "Equipos de Telecomunicaciones" Bs. F. 742.735.

Comuníquese y publíquese.

 PEDRO MOREJÓN CARRILLO
MINISTRO DEL PODER POPULAR
PARA LA ECONOMÍA COMUNAL

MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA LA VIVIENDA Y EL HABITAT

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA VIVIENDA
Y HABITAT

DESPACHO DE LA MINISTRA, CONSULTORIA JURIDICA

NUMERO: 049 CARACAS, 30 DE ABRIL DE 2008

198° y 149°

En el marco de lo preceptuado en la Disposición Transitoria Séptima del Decreto N° 5.750 con Rango Valor y Fuerza Ley de Reforma Parcial de la Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat, en concordancia con lo establecido en los artículos 27 y 76, numeral 18, de la Ley Orgánica de la Administración Pública y el artículo 16 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos,

RESUELVE


PRIMERO: Designar como Miembro Suplente de la Junta de Reestructuración del Instituto Nacional de la Vivienda (INAVI), al ciudadano **ERBINSON JOSE LOPEZ URAY**, titular de Cédula de Identidad N° **V-11.936.045**, en sustitución del ciudadano JAVIER JESUS RAMIREZ DIAZ, titular de la Cédula de Identidad N° V- 11.689.707, designado mediante Resolución N° 035 de fecha 26 de marzo de 2008, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.896 de la misma fecha.

SEGUNDO: Dada la designación efectuada, la Junta de Reestructuración del Instituto Nacional de la Vivienda (INAVI), queda conformada de la siguiente manera:

- MIEMBRO PRINCIPAL Y PRESIDENTA (E):
- ELIZABETH FREITAS FIGUEIRA V- 6.033.549
- MIEMBROS PRINCIPALES:
- IVONE PATRICIA MAYORGA V-7.959.254
- MIRNA FIGUEROA V-9.288.693
- REINA M. MONTILLA FUENTES V-7.402.475
- MIEMBROS SUPLENTE:
- MIGUEL AGUSTIN KISSNER FURCI V-13.774.220
- LEIDDI SALAZAR ROJAS V-8.677.522
- ERBINSON JOSE LOPEZ URAY V-11.936.045

TERCERO: La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Comuníquese y Publíquese,
Por el Ejecutivo Nacional,

 **EDITH B. GOMEZ**
Ministra

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PLENA


Vista la solicitud del ciudadano **JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO**, titular de la Cédula de Identidad N° 397.466, quien ocupa el cargo de **MAGISTRADO DE LA SALA CONSTITUCIONAL**, mediante la cual, de conformidad con lo previsto en el artículo 1° del Acuerdo de Jubilaciones y Pensiones del Personal del Tribunal Supremo de Justicia, aprobado el 24 de noviembre de 1999, solicita le sea concedido el


beneficio de jubilación, en virtud de tener setenta y tres (73) años de edad, haber acumulado diecisiete (17) años y once (11) meses de actividad docente y además haber permanecido trece (13) años y seis (6) meses al servicio del sector público, de los cuales ocho (8) años y cuatro (4) meses lo fueron en el Tribunal Supremo de Justicia. Verificado el supuesto en que se encuentra el solicitante con lo previsto en los artículos 3° literal "c" y 4° del Reglamento sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Magistrados, Funcionarios, Empleados y Obreros al servicio de este Alto Tribunal, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 36.904 de fecha 2 de marzo de 2000, todo lo cual aparece comprobado en el correspondiente expediente y en el respectivo análisis de cálculo de jubilación, el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Plena, en uso de la atribución que le confiere la Ley, y conforme a lo aprobado en sesión de la Sala Plena de fecha 6 de febrero de dos mil ocho, con vista del dictamen de fecha siete (7) de diciembre de dos mil siete, presentado al efecto por la Comisión de Jubilaciones, Pensiones y Prestaciones Sociales en el que "recomienda a la Sala Plena se le otorgue la jubilación solicitada",

- ACUERDA
- 1°.) Jubilár al ciudadano **JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO**, titular de la Cédula de Identidad N° **397.466**, a partir del día primero (1°) de marzo de dos mil ocho.
- 2°.) Asignarle una pensión mensual por concepto de jubilación equivalente al noventa (90%) de su remuneración mensual, cálculo que a tales efectos realizará la Gerencia General de Administración y Servicios, pagadera por quincenas vencidas, con los ajustes a que hubiere lugar y con cargo a la respectiva partida de que dispone el Tribunal para tales fines en su presupuesto.
- 3°.) Comunicar al solicitante lo acordado, así como al Gerente General de Administración y Servicios de este Alto Tribunal, para que éste proceda a realizar las respectivas provisiones y los pagos ordenados.


Publíquese y regístrese.


Dado, firmado y sellado en el Salón Principal de Despacho del Tribunal Supremo de Justicia en Sala Plena, en Caracas, a los seis (6) días del mes de febrero de dos mil ocho. Años 197° de la Independencia y 148° de la Federación.





La Presidenta,

LUISA ESCOBAR MORALES LAMUÑO

La Primera Vicepresidenta,
DEYANIRA NIEVES BASTIDAS


El Segundo Vicepresidente,

LUIS ALFREDO SÚCURE CUBA






EVELYN MARRERO ORTIZ

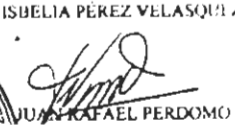

YRIS ARMENIA PEÑA ESPINOZA


Los Magistrados,



JESUS EDUARDO CABRERA ROMERO


YOLANDA JAIMES GUERREKO


LUIS MARTINEZ HERNÁNDEZ


ISBELIA PÉREZ VELASQUEZ


ELADIO RAMÓN APONTE APONTE


JUAN RAFAEL PERDOMO



PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ

LEVIS IGNACIO ZERPA



VADEL MOSTAFÁ PAOLINI

ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ



CARLOS ALFREDO OBERTO VÉLEZ

BLANCA ROSA MÁRMOL DE LEÓN



ALFONSO VALBUENA CORDERO

FRANCISCO CARRASQUERO LÓPEZ



EMIRO GARCÍA ROSAS

RAFAEL ARÍSTIDES RENGIFO CAMACARO



FERNANDO RAMÓN VEGAS TORRALBA

JUAN JOSÉ MUÑOZ CALDERÓN



LUIS ANTONIO ORTIZ HERNÁNDEZ

HÉCTOR CORONADO FLORES



LUIS EDUARDO FRANCESCHI GUTIÉRREZ

CARMEN ELVIGIA PORRAS DE ROA



MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN

CARMEN ZULETA DE MERCHÁN



MIRIAM DEL VALLE MORANDY MIJARES

ARCADIO DELGADO ROSALES




La Secretaria,

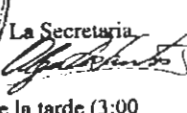


OLGA M. DOS SANTOS P.

En seis (06) de febrero de dos mil ocho (2008), siendo las once de la mañana (11:00 a.m.), fue aprobado el Acuerdo que antecede. No aparece suscrito por los Magistrados Luis Martínez Hernández, Fernando Ramón Vegas Torralba, Luis Eduardo Franceschi Gutiérrez y Carmen Elvigia Porras de Roa, quienes no asistieron a la sesión por motivos justificados, ni por los Magistrados doctores Deyanira Nieves Bastidas, Yris Armenia Peña Espinoza, Jesús Eduardo Cabrera Romero, Isbelia Pérez Velásquez, Levis Ignacio Zerpa, Antonio Ramírez Jiménez, Blanca Rosa Marmol de León, Luis Antonio Ortiz Hernández, quienes se habían retirado de la sesión para el momento de su consideración. Se deja constancia que los Magistrados doctores Héctor Coronado Flores y Miriam del Valle Morandy Mijares, votaron en contra del presente Acuerdo.



La Secretaria,



En diez (10) de abril de dos mil ocho (2008), siendo las tres de la tarde (3:00 p.m.), fue publicado el Acuerdo que antecede.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

DIRECCION EJECUTIVA DE LA MAGISTRATURA

Resolución No. 049

Caracas, 21 de Abril de 2008

198° Y 149°

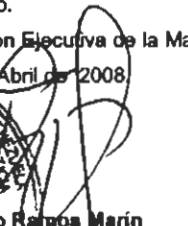

La Dirección Ejecutiva de la Magistratura, representada por el ciudadano FRANCISCO RAMOS MARIN, titular de la cédula de identidad No. 13.336.942, domiciliado en esta ciudad de Caracas, Distrito Capital, en su condición de Director Ejecutivo, designado en Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 02 de abril de 2008, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el numeral 9, del artículo 15 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 37.942, de fecha veinte (20) de mayo de 2004,

RESUELVE

UNICO: Designar al ciudadano JUAN CARLOS PEREIRA LUJANO, titular de la cédula de identidad No. 11.863.301, como Jefe de la División de Contabilidad y Bienes Nacionales de la Dirección de Finanzas y Contabilidad de la Dirección General de Administración y Finanzas de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, en calidad de Encargado.

Dada, firmada y sellada en la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, en Caracas a los veintún (21) días del mes de Abril de 2008.

Comuníquese,



Francisco Ramos Marín

Director Ejecutivo de la Magistratura

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

DIRECCION EJECUTIVA DE LA MAGISTRATURA

Resolución N° 053

Caracas, 25 de abril de 2008

198° y 149°

La Dirección Ejecutiva de la Magistratura, representada por el ciudadano FRANCISCO RAMOS MARÍN, titular de la cédula de identidad N° 13.336.942, domiciliado en esta ciudad de Caracas, Distrito Capital, en su condición de Director Ejecutivo, designado en Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 02 de abril de 2.008, según resolución N° 2008-0004, publicada en la Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela N° 38.917 de fecha 24 de abril del presente año, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el numeral 9, del artículo 15 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.942, de fecha 20 de mayo de 2004.

RESUELVE

PRIMERO: Designar a la ciudadana NORELVIC DEL VALLE CABRERA FREITES, titular de la cédula de identidad N° 13.544.427, como Jefe de la División de Servicios al Personal de la Dirección Administrativa Regional del Estado Monagas, a partir de la presente fecha.

Dada, firmada y sellada en la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, en Caracas, a los veinticinco (25) días del mes de abril de 2008.

Comuníquese y Publíquese,



FRANCISCO RAMOS MARÍN

Director Ejecutivo de la Magistratura

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

INSPECTORIA GENERAL DE TRIBUNALES

RESOLUCIÓN N° 1-2008

Caracas, 22 de abril de 2008

197° y 149°

En ejercicio de la atribución que me confieren los numerales 1° y 2° del artículo 29 de la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura, en concordancia con los artículos 2, 13 y 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública.

CONSIDERANDO

Que la Inspectoría General de Tribunales está integrada por el Inspector General de Tribunales, quien la dirige, y

por los Inspectores de Tribunales designados por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, numeral 7° y 17 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura, razón por la cual ejercen directamente las atribuciones previstas en el artículo 28 ejusdem, por mandato de Ley.

CONSIDERANDO

Que la Inspectoría General de Tribunales con el objeto de optimizar sus procesos requiere coordinar el trabajo que realizan los Inspectores de Tribunales, en especial, en los procesos acusatorios disciplinarios, siendo que tal función compete al Inspector General de Tribunales, en acatamiento a las previsiones de los artículos 17 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y numeral 1 del artículo 29 de la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura.

CONSIDERANDO

Que el Inspector General de Tribunales tiene atribuida la potestad expresa de presentar y sostener personalmente la acusación disciplinaria, quien puede delegarla a un Inspector de Tribunales, tal como lo prevé el numeral 2 del artículo 29 de la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura.

CONSIDERANDO

Que en fecha 02 de agosto de 2005, fue publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.241, el Reglamento de la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial, reimpreso por error material en Gaceta Oficial No. 38.317, de fecha 18 de noviembre de 2005, el cual norma la oralidad de los procedimientos disciplinarios para todos los Jueces y Juezas de la República en el marco del Decreto sobre el Régimen Transitorio del Poder Público publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 36.857 del 27 de diciembre de 1999, y de la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura, y en acatamiento de la Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia N° 1973 del 19 de julio de 2005.

RESUELVE

Artículo 1. Se delega en los Inspectores de Tribunales, que a continuación se señalan; la potestad de sostener la acusación disciplinaria contenida en el numeral 2° del artículo 29 de la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura, reservándose el ejercicio de su presentación, ciudadanos: Eliézer Lobatón Primera, con Cédula de Identidad N° V-8.659.146; Felix Alexis Camargo López, con Cédula de Identidad N° V-9.217.043; María Carolina Fernández Herrera, con Cédula de Identidad N° V-8.254.291; María Eugenia Martínez de Carrera, con Cédula de Identidad N° V-5.970.926; Martha Eunice Mijares Torrealba, con Cédula de Identidad N° V-2.521.465; María Soledad Torres Rodríguez, con Cédula de Identidad N° V-9.295.180; Luisa Montalvo Hernández, con Cédula de Identidad N° V-8.869.745; Rafael Rodríguez Oletta, con Cédula de Identidad N° V-3.661.226; Katherine Casellas Jiménez, con Cédula de Identidad N° V-10.336.859; Maryelia Sifontes, con Cédula de Identidad N° 11.339.601; Luisa de la Concepción Fumero Lessmann, con Cédula de Identidad N° V-4.680.514; y Lisbeth Josefina Tortolero González, con Cédula de Identidad N° V-6.322.523.

Artículo 2. Los Inspectores de Tribunales señalados, en ejercicio de la potestad delegada podrán realizar todas aquellas actuaciones que consideren pertinentes, a los fines de sostener las acusaciones que sean presentadas contra los Jueces o Juezas de la República, bien sea en forma oral o escrita.

Artículo 3. Esta Resolución entrará en vigencia a partir de la publicación en Gaceta Oficial.

Artículo 4. Se derogan las Resoluciones N° 1-2005, de fecha 15 de agosto de 2005, publicada en Gaceta Oficial N° 38.253, de fecha 18 de agosto de 2005; N° 1-2006, de fecha 17 de julio de 2006, publicada en Gaceta Oficial N° 38.492, de fecha 03 de agosto de 2006; N° 2-2006, de fecha 27 de octubre de 2006, publicada en Gaceta Oficial N° 38.557, de fecha 06 de noviembre de 2006; y N° 2-2007, de fecha 30 de noviembre de 2007, publicada en Gaceta Oficial N° 38.826, de fecha 06 de diciembre de 2007.

Artículo 5. Se ordena la publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Dada, firmada y sellada en la ciudad de Caracas, a los veintidós (22) días del mes de abril del año dos mil ocho (2008).

Comuníquese y Publíquese.

Por la Inspectoría General de Tribunales



YRIS ARMENIA PENA ESPINOZA
INSPECTORA GENERAL DE TRIBUNALES

COMISION DE FUNCIONAMIENTO Y REESTRUCTURACION DEL SISTEMA JUDICIAL

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
COMISIÓN DE FUNCIONAMIENTO Y
REESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA JUDICIAL

COMISIONADO PONENTE: DAMIÁN ADOLFO NIETO CARRILLO
EXPEDIENTE N°: 1600-2007

En virtud de los escritos presentados en fechas 13 de marzo 2007 y 15 de octubre de 2007 respectivamente, el ciudadano **HUMBERTO BRITO BRITO**, titular de la cédula de identidad número 2.673.261, Juez Titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Agrario de la Circunscripción Judicial del estado Yaracuy, ejerció ante esta Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial recurso de reconsideración, contra la decisión de fecha 28 de febrero de 2007, dictada por esta Instancia Disciplinaria mediante la cual se le aplicó la sanción de destitución de conformidad con lo previsto en el numeral 11 del artículo 40 de la Ley de Carrera Judicial.

El 16 de marzo de 2007 se acordó pasar los autos al Comisionado Presidente ponente **OCTAVIO SISCO RICCIARDI**, para decidir lo conducente.

Mediante sentencia N° 1.764 de 15 de agosto de 2007, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, se reconstituyó la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial de la siguiente manera: Damian Adolfo Nieto Carrillo, titular de la cédula de identidad número 3.611.340, Presidente; Alicia Hortensia García de Nicholls y Belkis Useche de Fernández, titulares de las cédulas de identidad números 3.282.864 y 6.136.501 respectivamente, Miembros Principales, por lo que en fecha 25 de septiembre de 2007, la Comisión se abocó al conocimiento de la presente causa, asumiendo la ponencia el comisionado **DAMIÁN ADOLFO NIETO CARRILLO**, actuando en su condición de Presidente del mencionado Órgano Disciplinario.

Se ordenó practicar las notificaciones correspondientes a los fines de continuar con el trámite del recurso de reconsideración interpuesto.

Para decidir se observa:

I EL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN

El ciudadano **HUMBERTO BRITO BRITO**, mediante escritos de fecha 13 de marzo de 2007 y 15 de octubre de 2007, alegó:

Que la interpretación de las normas jurídicas no pueden ser analizadas desde un punto de vista estático, pues el derecho es acción, en consecuencia, el

analizar el comportamiento tanto de las partes como del juez, necesita una racionalización y concatenación de todas las actuaciones de los intervinientes en la relación procedimental, así como de sus resultados. Que así como se le exigió que adecuara su conducta a lo dispuesto por la norma del artículo 15 del Código de Procedimiento Civil, esa misma posición debe asumirla quienes lo enjuician.

Que la decisión recurrida se fundamentó en el hecho de que "...el Juez acusado conoció de dos demandas distintas en la misma causa, por intimación y estimación de honorarios profesionales, en la cual su actuación evidenció un trato manifiestamente desigual entre las partes, debido a que la demanda incoada por los abogados Carmelo Pifano y Luis Domínguez fue presentada en fecha 19 de octubre de 2005 y se admitió y acordó la medida solicitada al día siguiente, es decir, el 20 de octubre de 2005. Por el contrario, la demanda incoada por el abogado Víctor Caridad Zavarce fue presentada en fecha 13 de julio de 2005 siendo admitida en fecha 20 de octubre de 2006, en la cual se solicitó una medida de prohibición de enajenar y gravar en fecha 18 de noviembre de 2005 y ratificada en fecha 01 de diciembre de 2005 y nunca fue proveída por éste último; en consecuencia el juez acusado incurrió en infracción del deber legal, falta disciplinaria que da lugar a la sanción de destitución.

De lo anterior, señaló que se evidencia, la existencia de dos demandas distintas, concernientes a dos acciones por estimación e intimación de honorarios profesionales. Cuando se habla de desigualdad entre las partes, debemos entender, que se trata de un efecto causado dentro del proceso, favoreciendo a una de las partes en desmedro del derecho de la otra.

Dentro de este orden de ideas, indicó que, distinto es cuando el operador de justicia, retarda un pronunciamiento en una causa, por cualquier razón, lo cual generaría desigualdad con todas las demás causas de ese tribunal, lo cual según el ciudadano Humberto Brito Brito, es absurdo e irracional.

Que en el presente caso, existieron dos procesos independientes uno del otro, siendo el primero de ellos aquel donde los intimantes fueron los abogados Carmelo Pifano y Luis Domínguez, y el segundo, el intimante fue Víctor Caridad Zavarce. Ahora bien, aún cuando las actuaciones de los abogados tienen su origen en la causa principal por fraude procesal, ambos actuaron como abogados de los denunciantes, en diversas oportunidades.

En base a lo anterior, el recurrente alegó que en el presente caso, los posibles perjudicados debieron ser sus denunciantes, que a pesar de que la decisión recurrida hizo mención como denunciante al abogado José Clemente Pérez, este no es más que un mandatario de los ciudadanos Alejandro Iranzo y Victoria Adamowicz. Es por ello, que de haber creado una desigualdad procesal, lo habría hecho a favor de sus denunciantes, por no haber una medida cautelar en su contra.

Que la sentencia condenatoria no determinó en cual de las causas el recurrente creó desigualdad procesal, y a que parte perjudicó con esa actuación u omisión.

Por otra parte, adujo que en el proceso de intimación de honorarios profesionales, el abogado Víctor Caridad Zavarce, no existió reclamo alguno por parte del accionante, y mucho menos presunción de que hubiese causado daño alguno.

Que esta Comisión, mediante la decisión recurrida desestimó la opinión fiscal, justificando el criterio sostenido de que el recurrente inobservó los deberes que le impone la Ley, agregó, como marco de fundamentación la decisión n° 2319 de fecha 25 de octubre de 2006, dictada por la Sala Política Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia.

En base a lo anterior, el recurrente estimó que la precitada sentencia no era aplicable en el presente caso, ya que, en tanto que la misma establece que el ilícito disciplinario por infracción de los deberes legales que establecen las leyes, se configura siempre que tal trasgresión implique una alteración grave del proceso, que por sí sola afecte el derecho de las partes.

Que la decisión recurrida indicó, que el juez dio respuesta inmediata a una de las partes y menoscabó el derecho de la otra al no pronunciarse sobre las diversas solicitudes formuladas; cuando lo cierto es, que la norma sobre igualdad procesal indica que esa desigualdad debe existir en una misma causa, y que la misma sea evidente en contra de una y a favor de otra.

Alegó, que el procedimiento que se instruyó en su contra se debió a un presunto retardo judicial en relación a la admisión de una demanda de intimación de honorarios, la cual, nunca fue denunciada ni reclamada por el actor de esa demanda, ya que el proceso devino de una referencia del Inspector de Tribunales que realizó la investigación de la denuncia proferida en su contra, la cual versaba sobre otro proceso.

Solicitó a esta Comisión que sea reconsiderada la sanción disciplinaria impuesta y se deje sin efecto la sanción de destitución.

II EL ACTO RECURRIDO

En fecha 28 de febrero de 2007, esta Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial **DESTITUYÓ** al ciudadano HUMBERTO BRITO BRITO, en su condición de Juez Titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Agrario de la Circunscripción Judicial del estado Yaracuy, en base a lo siguiente:

"...el Órgano Instructor le imputa al ciudadano HUMBERTO BRITO BRITO, haber incurrido presuntamente en una infracción del deber legal, al proceder en el conocimiento de distintos procedimientos de intimación y estimación de honorarios profesionales, contentivos de la causa judicial n° 12572 con un trato manifiestamente desigual entre las partes intervinientes, falta disciplinaria que da lugar a la sanción de destitución, de conformidad con lo previsto en el numeral 11 del artículo 40 de la Ley de Carrera Judicial... Por su parte el juez acusado en su escrito de descargos no trajo a colación ningún alegato concreto de defensa sobre los hechos anteriormente mencionados. En efecto de las actas contentivas del expediente disciplinario se evidencia que en la causa judicial N° 12572 contentiva de una acción por fraude procesal, el Juez acusado conoció de dos demandas distintas en la misma causa antes mencionada, por intimación y estimación de honorarios profesionales, en la cual su actuación evidenció un trato manifiestamente desigual entre las partes, debido a que la demanda incoada por los abogados Carmelo Pifano y Luis Domínguez fue presentada tal como consta en los folios 152 y 157 del expediente disciplinario en fecha 19 de octubre de 2005, y se admitió y acordó la medida solicitada al día siguiente, el día 20 del mismo año, como consta en el folio 158 de dicho expediente disciplinario. Sin embargo por otro lado, la demanda incoada con anterioridad como consta en los folios 112 y 113 del expediente disciplinario, en fecha 13 de julio de 2005 por el abogado Víctor Caridad Zavarce, fue admitida en fecha 20 de octubre de 2005; es decir, después de haber transcurrido más de tres meses, como se evidencia en el folio 114 del expediente disciplinario; y que aunado a ello, fue solicitada una medida de prohibición de enajenar y gravar en fecha 18 de noviembre de 2005 y ratificada en fecha 1 de diciembre de 2005, la cual además nunca fue proveída.

De todo lo antes expuesto, se desprende que cuando una misma causa contentiva de dos estimaciones e intimaciones de honorarios profesionales, el operador de justicia tardó más de tres meses en admitir una de ellas; y por el contrario, la otra intimación la admitió al día siguiente de su presentación proveyendo de inmediato sobre la medida cautelar solicitada; se generó un desequilibrio entre las partes, que constituye una infracción a los deberes legales del juez en la tramitación de una causa judicial y no un desequilibrio injustificado como lo alegó la Vindicta Pública, en consecuencia, este Órgano Disciplinario reinterpreta el criterio sostenido en decisiones anteriores, en las cuales se entendía que tal supuesto está referido a aquellos casos en que el juez inobserve los deberes que le impone exclusivamente la Ley Orgánica del Poder Judicial, por ser éste el marco jurídico que regula de (sic) la actividad jurisdiccional; sin embargo, en sintonía con el criterio de la Sala Política Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (Decisión N° 2319 de fecha 25 de octubre de 2006) la cual señaló que "...también se configura el ilícito disciplinario, en aquellos casos en los cuales los jueces infrinjan los deberes legales que le establecen otras leyes, siempre que tal trasgresión implique una alteración grave del proceso, que por sí sola afecte los derechos de las partes..." es un deber del juez el mantener a las partes en igualdad y equilibrio dentro del proceso, tal cual lo prevé el artículo 15 del Código de Procedimiento Civil, que así como la

Ley Orgánica del Poder Judicial, también establece para los jueces deberes que son de fiel cumplimiento para una sana y recta administración de justicia.

Por lo cual, en concordancia con el principio de igualdad entre las partes establecido en el mencionado artículo 15 (...) es al Juez a quien corresponde una función activa y garante de ese principio, a los fines de evitar que el resultado del litigio esté determinado por actuaciones desiguales generadoras de indefensión a una de las partes.

Por otra parte, la omisión de pronunciamiento que le imputa el Ministerio Público a la conducta del juez durante la tramitación de la causa judicial N° 12572, en el caso bajo análisis, no puede verse aisladamente, cuando observa su actuación frente a ambas partes, el juez le dio respuesta inmediata a una de las partes y menoscabó el derecho de la otra al no pronunciarse sobre las diversas solicitudes formuladas, siendo que era su deber satisfacer oportunamente el derecho de petición de todos los actores en el proceso; al no hacerlo así, se comportó de manera parcializada frente a los justiciables, con lo cual generó duda con respecto al equilibrio que debe mantener y garantizar el juez como director del proceso.

En consecuencia, la actuación del juez, al crear una manifiesta desigualdad entre las partes, alteró gravemente el equilibrio procesal y afectó sus derechos, conducta que además incidió negativamente en el principio de transparencia que rige la actividad del juzgador; por tanto, esta Instancia Disciplinaria considera que el Juez sub júdice inobservó uno de los deberes que establecen las leyes a los jueces, y tipifican la falta disciplinaria contenida en el numeral 11 del artículo 40 de la Ley de Carrera Judicial, que acarrea la sanción de destitución...

III

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Este Órgano Disciplinario pasa a emitir pronunciamiento en base a las siguientes consideraciones: En cuanto al recurso de reconsideración, se observa que el recurrente reprodujo los alegatos expuestos en su escrito de defensa inicial, para hacerlos valer en el procedimiento disciplinario, que fuera seguido. Al respecto, esta Comisión luego de revisar nuevamente las actas del expediente, constató que el recurrente no alegó ni probó hechos nuevos en cuanto a la falta disciplinaria que le fue imputada, pues se observa que sólo manifestó su inconformidad con el fallo dictado por la Comisión, con base en argumentos ya considerados por este Órgano Disciplinario, en la oportunidad de decidir.

Así pues, cabe señalar que el recurso de reconsideración sólo permite la modificación del fallo recurrido si se hubiesen presentado elementos o circunstancias desconocidas para la Comisión al momento de dictar la decisión, o si no se hubiere analizado una prueba, cuya importancia y veracidad, traerían como consecuencia, de ser el caso, la modificación de la decisión emanada del Órgano Disciplinario.

En tal sentido, y por cuanto se observa que no trae el recurrente de autos ningún elemento que, por su novedad, o por falta de valoración, hubiere dejado la Comisión de estimar en la oportunidad en que se decidió la presente causa disciplinaria, lo que haría posible la nueva revisión. Es así que al no ser la reconsideración de naturaleza extraordinaria, lo que implica el objeto limitado del mismo, no puede valorarse de nuevo toda la prueba practicada, como si de una apelación se tratara, ni puede revisarse *in totum* el derecho aplicable, aun cuando las pruebas estuvieren mal interpretadas y aunque el derecho estuviere mal aplicado, esto en razón del principio de estabilidad de los actos administrativos, aplicable salvo que estén viciados de nulidad absoluta.

Por todos los razonamientos expuestos, esta Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial declara SIN LUGAR el recurso de reconsideración interpuesto por el ciudadano **HUMBERTO BRITO BRITO**, en consecuencia, CONFIRMA la sanción de **DESTITUCIÓN** impuesta al ciudadano Humberto Brito Brito, en fecha 28 de febrero de 2007. Así declara.

IV DECISIÓN

Con fundamento en los razonamientos anteriormente expuestos, esta Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial, en nombre de la República por autoridad de la Ley, declara **SIN LUGAR** el recurso de reconsideración interpuesto por el ciudadano **HUMBERTO BRITO BRITO** contra la decisión dictada por esta instancia disciplinaria en fecha 28 de febrero de 2007,

mediante la cual se le aplicó la sanción de **DESTITUCIÓN** prevista en el numeral 11 del artículo 40 de la Ley de Carrera Judicial, en consecuencia se confirma la referida decisión.

Por cuanto la presente decisión se dicta fuera del lapso legal establecido en el artículo 51 del Reglamento de la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial, se acuerda notificar de la presente decisión a la Inspectoría General de Tribunales, a la Fiscal en Materia Disciplinaria con Competencia Nacional y al ciudadano Humberto Brito Brito. Se advierte que contra la misma podrá interponerse el recurso contencioso administrativo de nulidad ante la Sala Política Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, dentro de los treinta (30) días continuos siguientes a su notificación.

Publíquese en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y archívese el expediente.

Déjese constancia de esta decisión en el expediente personal del ciudadano **HUMBERTO BRITO BRITO**, el cual reposa en la Oficina de Personal de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura.

Dada, firmada y sellada en la Sala Plenaria de la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial. En Caracas, a los 18 días del mes de abril de dos mil ocho (2008). Años: 197° de la Independencia y 149° de la Federación.

El Presidente,
DAMIÁN ADOLFO NIETO CARRILLO
Comisionado Ponente

ALICIA GARCÍA DE NICHOLLS
Comisionada

BELKIS USECHE DE FERNÁNDEZ
Comisionada

GIOVANNA LANDER SALAZAR
Secretaria Acc.

1600-2007

10:00 am de hoy 18 de abril de 2008.

Concedo la anterior decisión la cual queda registrada en el N° 045:2008.

El (la) Secretario (a)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
COMISIÓN DE FUNCIONAMIENTO Y
REESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA JUDICIAL

COMISIONADA PONENTE: Dra. ALICIA HORTENSIA GARCÍA DE NICHOLLS
EXPEDIENTE N°: 1648-2007

JUECES ACUSADOS: ADA RAQUEL CAICEDO DÍAZ, DAVID ALEJANDRO CESTARI EWING y PEDRO RAFAEL MÉNDEZ LABRADOR, integrantes de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida, los dos primeros Jueces Titulares y el último quien era Juez Provisorio, actualmente no ejerce funciones en el Poder Judicial.

ACUSACIÓN: INSPECTORÍA GENERAL DE TRIBUNALES, por Haber presuntamente incurrido en la falta disciplinaria prevista en el numeral 11 del artículo 37 de la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura, durante la tramitación de la causa judicial N° LP01-O-2004-000006.

SANCIÓN SOLICITADA: Amonestación.

DECISIÓN DE LA COMISIÓN: Absolución.

TRAMITE DISCIPLINARIO CUMPLIDO:

En fecha 18 de octubre de 2007, se recibió en esta Comisión oficio N° IGT- AA 2430-07, de fecha 15 de octubre del mismo año, proveniente de la Inspectoría General de Tribunales, anexo al cual remitió expediente disciplinario N° 050080, contenido de la acusación formulada contra los ciudadanos Ada Raquel Caicedo Díaz, David Alejandro Cestari Ewing y Pedro Rafael Méndez Labrador, titulares de las cédulas de identidad números 9.248.896, 9.317.671 y 692.374 respectivamente; por sus actuaciones como Jueces Integrantes de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida, en la tramitación de la causa judicial N° LP01-O-

2004-000006, al cual le fue asignado el número 1648-2007, nomenclatura interna de esta Comisión; por auto de 19 de octubre de 2007, le fue asignada la ponencia a la Dra. Alicia Hortensia García de Nicholls, quien con tal carácter suscribe la presente decisión.

Por auto de fecha 9 de noviembre de 2007, se admitió la acusación formulada por dicho Órgano, fijándose la audiencia oral y pública para el día lunes diez (10) de marzo de dos mil ocho (2008) a las 10:00 am. Posteriormente mediante auto del 6 de febrero de 2008, en virtud de la reprogramación de las audiencias fijadas por esta Comisión, se acordó fijarla nuevamente para el día jueves tres (3) de abril de dos mil ocho (2008), a las ocho y treinta de la mañana (8:30 am).

En fecha 2 de abril de 2008, la Fiscal Sexagésima Cuarta del Ministerio Público con competencia a nivel Nacional en materia Disciplinaria Judicial, abogada Carmen Beatriz Chang, se adhirió a la acusación formulada por el Órgano Instructor

El día tres (3) de abril de dos mil ocho (2008), oportunidad en la cual tuvo lugar la audiencia oral y pública, antes de dar inicio a la audiencia se verificó la presencia de las partes que estaban debidamente convocadas para concurrir a la misma, advirtiéndose la incomparecencia del ciudadano Pedro Rafael Méndez Labrador, por lo que de inmediato se ordenó a la secretaria se comunicara con él, a los efectos del lapso de espera. Al establecer comunicación, éste le informó que ya no formaba parte del Poder Judicial y no contaba con los recursos económicos para sufragar los gastos de traslado desde la ciudad de Mérida a Caracas. Dada esa información se le comunicó a los presentes que lo procedente era diferir la audiencia a pesar de que la información recibida permitía inferir la decisión del acusado de no comparecer ni en esta u otra oportunidad por las razones expuestas telefónicamente las cuales quedaron asentadas en una acta suscrita por la secretaria de la Comisión la cual fue agregada a los autos. En ese estado las partes presentes solicitaron que se dividiera la contienda de la causa y para ello expusieron las razones que su criterio eran valederas para acordar lo solicitado, por este motivo los Comisionados se retiraron a deliberar sobre este planteamiento que precisaba ser resuelto porque permitía decidir si se celebraba o no, la audiencia oral y pública fijada. Deliberado el punto se acordó la división con base a los fundamentos expuestos en el acta que riela inserta a los folios 226 al 237 de este expediente, y en consecuencia se ordenó abrir la audiencia con los jueces acusados que hicieron acto de presencia. Iniciada la misma se dio el derecho de palabra a las partes iniciando con la Inspectoría General de Tribunales, luego la Fiscalía del Ministerio Público adherida a la acusación y luego a los Jueces, todos expusieron sus alegatos en el discurso inicial, en la réplica, contrarréplica y conclusiones finales. Cerrado el debate los Comisionados se retiraron a deliberar y una vez cumplida esta fase del procedimiento se dictó el pronunciamiento correspondiente, tal como está asentado en el acta de esa audiencia, de manera que siendo esta la oportunidad para publicar el texto íntegro del fallo dictado, se hace bajo las siguientes consideraciones:

I
DE LA ACUSACIÓN

Señaló el Órgano Instructor que el presente procedimiento disciplinario se había originado en virtud del oficio N° FMDJ-0120-2005, de fecha 14 de febrero de 2005, suscrito por la ciudadana Nancy Castro de Várvaro, en su condición de Fiscal Sexagésima Tercera del Ministerio Público con competencia a nivel Nacional en materia Disciplinaria Judicial, remitido a ese Órgano, anexando al efecto copia del fallo de fecha 13 de abril de 2004, dictado en la causa judicial N° LP01-O-2004-000006, por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida, a cargo de los Jueces acusados, en cuyo contenido esa Corte exhortó al abogado Danilo Baltazar Anderson, Fiscal del Ministerio Público con competencia Nacional y al abogado Manuel Castillo, Fiscal Segundo del Ministerio Público, a facilitar a los imputados el acceso a las actas de la investigación que obraba en su contra y tramitar las diligencias que éstos exigieran, con la advertencia de que la negativa de ese derecho podía dar lugar a que eventualmente se intentara una acción de amparo constitucional en contra de ese Órgano.

Que en respuesta a esa comunicación, el Fiscal Danilo Baltazar Anderson, le solicitó a la referida Corte de apelaciones respetar la autonomía del Ministerio Público; a lo cual la Corte respondió mediante oficio N° 633 de fecha 7 de mayo de 2005, manifestándole su no ingerencia en las funciones de ese Órgano y estimando tal escrito ofensivo y amenazante al Poder Judicial, por lo que acordó en consecuencia remitirlo a la Dirección de Inspección y Disciplina del Ministerio Público y, a la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia. Todos estos documentos fueron enviados por la Dirección de Inspección y Disciplina del Ministerio Público al Despacho de la Fiscal Nancy Castro de Várvaro, al considerar una presunta extralimitación de funciones de los Jueces acusados al exhortar a los prenombrados Fiscales, a facilitar a los imputados las actas de investigación, y por ello se solicitó al Órgano Instructor el inicio de la correspondiente investigación disciplinaria.

En fecha 8 de abril de 2005, la Inspectoría General de Tribunales, acordó iniciar la investigación respectiva y, finalizada la misma imputó a los integrantes de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida, el hecho de menoscabar su imparcialidad cuando en sentencia del 13 de abril de 2004, manifestaron a los Fiscales actuantes en la causa judicial N° LP01-O-2004-000006, ciudadanos Danilo Baltazar Anderson y Manuel Castillo, que su negativa a facilitar a los imputados el acceso a las actas de la investigación donde aparecían como imputados podría dar lugar a una eventual acción de amparo constitucional en su contra, hecho que subsumió en la falta disciplinaria prevista en el numeral 11 del artículo 37 de la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura, que da lugar a la sanción de amonestación.

Señaló ese órgano que de la revisión del copiado de sentencias definitivas dictadas por la referida Corte, se evidenció que el 13 de abril de 2004, profirió sentencia en el asunto N° LP01-O-2004-000006, relacionado con recurso de apelación contra la decisión dictada por el Tribunal Primero de Primera Instancia en funciones de Juicio de ese mismo Circuito Judicial Penal mediante la cual había declarado sin lugar la acción de amparo constitucional intentada por el abogado Marcos Avillo Trejo Contreras y otros, contra el ciudadano Danilo Baltazar Anderson, Fiscal Cuarto Ambiental del Ministerio Público con competencia Nacional, por presuntas violaciones de derechos y garantías constitucionales derivadas de un proceso seguido en su contra ante la citada Fiscalía, en el cual presuntamente se les cercenó la posibilidad de imponerse de las actas investigación antes de concurrir al acto de declaración, para el que se les había citado

En el contenido de la aludida decisión los integrantes de esa Corte de Apelaciones al tiempo de declarar sin lugar la apelación interpuesta, exhortaron al referido Fiscal y al abogado Manuel Castillo, en su condición de Fiscal Segundo del Ministerio Público, a facilitar a los imputados la consulta de la investigación que obraba en su contra y tramitaran las diligencias que estos exigieran, pues la negativa de ese derecho daría lugar a que eventualmente se intentara una acción de amparo constitucional en contra de éstos, librando la Corte las notificaciones correspondientes. Posteriormente en escrito del 3 de mayo de 2004, el Fiscal Danilo Baltazar Anderson, solicitó a la mencionada Corte de Apelaciones que se respetara la autonomía del Ministerio Público, y que se abstuviera de proferir amenazas infundadas e indebidas, asimismo les solicitó que esa Corte no se subrogara en la actividad propia de las partes, a fin de mantener la objetividad e imparcialidad de ese Tribunal.

Señaló que en respuesta a dicha comunicación, en oficio N° 633-04 de fecha 7 de mayo de 2004, los integrantes de la Corte Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida le manifestaron al aludido Fiscal que esa Corte no se inmiscuyó en las funciones propias del Ministerio Público, asimismo le señalaron que no habían proferido amenazas ni se giraron instrucciones de obligatorio cumplimiento que vulneraran su autonomía, sino que más bien, pretendían garantizar el debido proceso, evitando eventuales nulidades; recordándole al Fiscal el deber como Funcionario Público de respetar al Poder Judicial, empleando en sus comunicaciones términos respetuosos y acorde con la dignidad, e igualmente le comunicaron que participarían de esa situación al Fiscal General de la República, para que impusiera los correctivos pertinentes.

Indicó que posteriormente, el 10 de mayo de 2004, en oficio N° 635-04 el Juez David Alejandro Cestari Ewing, remitió al Director de Inspección y Disciplina del Ministerio Público, copia del fallo dictado el 13 de abril de ese mismo año, por la Corte de Apelaciones de la cual era miembro, el oficio suscrito por el Fiscal Danilo Baltazar Anderson dirigido a esa Corte y el oficio que libró posteriormente la misma, a objeto de que esa Dirección tomara los correctivos necesarios; señalándose en el contenido del oficio que la comunicación remitida por el aludido Fiscal fue ofensiva y amenazante. Que adicionalmente dicha Corte de Apelaciones libró oficios al Fiscal General de la República y a la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia, remitiéndoles la documentación señalada.

En atención a los anteriores señalamientos la Inspectoría General de Tribunales consideró que si bien era cierto, que los Jueces acusados, como integrantes de la Corte de Apelaciones, podían instar al Ministerio Público a que facilitara a los imputados el acceso a las actas contentivas de la investigación, más aun cuando los abogados de los imputados intentaron acción de amparo constitucional ante la imposibilidad de imponerse de la investigación antes de concurrir a rendir declaración; no era menos cierto, que esta acción había sido declarada sin lugar, motivo por el cual a juicio de ese Órgano no le estaba dado a la Corte de Apelaciones sugerirles a los prenombrados Fiscales, que ante la negativa de ese derecho a los imputados, daría lugar a que eventualmente se intentara acción de amparo en su contra, pues a su entender el deber de ese Tribunal Colegiado se limitaba a conocer el recurso de apelación interpuesto y no realizar conjeturas respecto a situaciones que no habían sucedido.

Conforme a lo anterior, sostuvo que al haber esa Corte de Apelaciones adelantado su opinión, comprometió su imparcialidad y afectó su competencia subjetiva para conocer en el futuro respecto de cualquier conflicto que surgiera posteriormente entre el Ministerio Público y la defensa de los imputados en cuanto al acceso del expediente judicial. Que en todo caso, le correspondía a la defensa de éstos decidir las acciones a interponer para hacer valer sus derechos, tal como lo realizaron en su oportunidad, por tanto a juicio del Órgano Instructor, no era necesaria la advertencia realizada a los Representantes del Ministerio Público.

Ante los alegatos de los Jueces acusados, quienes manifestaron no haber interferido en las funciones del Ministerio Público, pues el exhorto no era obligante, sino una petición o solicitud y, asimismo señalar que esa Corte de Apelaciones tenía la facultad de ordenarle a la Fiscalía la ejecución o cumplimiento de determinadas obligaciones previstas en la ley a fin de evitar una eventual nulidad, la Inspectoría General de Tribunales consideró que lo censurable fue la advertencia hecha al Ministerio Público, que de no facilitarse el acceso de los imputados a la investigación, sería intentada una acción de amparo constitucional en contra de los aludidos Fiscales y, para probar tal hecho promovió copia certificada de la sentencia dictada por la aludida Corte.

En conclusión, solicitó a esta Comisión imponga a los Jueces Ada Raquel Caicedo Díaz, David Alejandro Cestari Ewing y Pedro Rafael Méndez Labrador, en su condición de Jueces Integrantes de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida, la sanción de amonestación por haber menoscabo su imparcialidad, falta establecida en el numeral 11 del artículo 37 de la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura.

II
ALEGATOS DE LOS JUECES ACUSADOS

Durante la fase de investigación, los Jueces acusados en virtud de la denuncia que cursaba en su contra, en fecha 3 de mayo de 2005, presentaron ante la Inspectoría General de Tribunales escrito de defensa, en cuyo contenido señalaron que tal denuncia fue temeraria, atentando contra los valores éticos y pretendiendo limitar el ejercicio de la función jurisdiccional de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida, a cargo de éstos.

Sostuvieron que el exhorto desde el punto de vista jurídico sólo se concibe entre despachos judiciales, no pudiendo concebirse a su criterio, entre organismos de distintos Poderes Públicos, por tanto consideraron que el exhorto hecho por esa Corte al Fiscal Danilo Baltazar Anderson, no revistió las consecuencias jurídicas que se generan en el ámbito judicial, pues no era imperativo, y tal exhorto consistía en una petición, solicitud o requerimiento, pues de lo contrario aseguraron que evidenciaría una manifiesta ignorancia de ellos como miembros de esa Corte.

Señalaron que en virtud de las facultades jurisdiccionales de la Corte de Apelaciones en sede Constitucional no sólo pueden exhortar a los Fiscales actuantes, sino también imponerles obligaciones de estricto cumplimiento so pena de desacato; asimismo, anular actuaciones, controlar y revisar en apelación la actividad investigativa del Ministerio Público e incluso corregir sus desaciertos. Que en aras de la función atribuida a la Corte por la Constitución, específicamente de controlar y sanear al Ministerio Público, puede sugerirle, exhortarle y ordenarle el cumplimiento

de determinadas obligaciones previstas en la ley, para evitar a futuro una eventual nulidad innecesaria.

Destacaron que el referido Fiscal no leyó el contenido de la decisión del 13 de abril de 2004, dictada por esa Corte de Apelaciones, sino que se limitó a elaborar el ofensivo escrito dirigido a ésta, con base a la boleta de notificación que le fue enviada, ignorando el por qué esa Corte le había exhortado; señalando que por tal razón solicitaron la aplicación de una sanción disciplinaria contra ese Fiscal, circunstancia que evidentemente generó molestia en el Ministerio Público y consecuentemente dio lugar a la averiguación en contra de ellos como integrantes de esa Corte de Apelaciones.

De seguida plantearon las siguientes interrogantes: *"¿Debió acaso esta Corte guardar silencio y asumir una actitud sumisa ante los insultos efectuados por el Fiscal Anderson?; o es que acaso Usted, ciudadano Inspector General de Tribunales, asumiría una comunicación insultante, con actitud sumisa, evidentemente la respuesta a estas interrogantes debe ser negativa, porque al contrario, es a quien insulta el que debería sancionarsele".* Por último peticionaron que la denuncia fuera archivada y sobreseída la causa disciplinaria, presentando en consecuencia las siguientes pruebas documentales: 1.- Copia de la sentencia de fecha 13 de abril de 2004, dictada por esa Corte de Apelaciones; 2.- Copia del oficio S/N del 3 de mayo de 2004, suscrito por el Fiscal Danilo Baltazar Anderson, dirigido a los miembros de la Corte; 3.- Copia del oficio de respuesta N° 633/04 de 7 de mayo de 2004, dirigido al referido Fiscal.

Mediante escrito de fecha 16 de julio de 2007, los Jueces acusados en ejercicio de su derecho a la defensa expusieron ante el Órgano Instructor los alegatos que consideraron, con motivo de la acusación formulada por ese Órgano, del cual se desprende lo siguiente:

En primer lugar, efectuaron una relación sucinta de los antecedentes del caso referidos a las actuaciones procesales en la causa judicial N° LP01-O-2004-000006. Luego citaron el contenido de algunas disposiciones relativas a las facultades del Ministerio Público en cuanto a la dirección de la investigación penal contenidas en los ordinales 3° y 4° del artículo 285 del Texto Constitucional, el artículo 11 y 283 del Código Orgánico Procesal Penal y, asimismo citaron y transcribieron un extracto de la sentencia de fecha 20 de noviembre de 2002, proferida por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que estableció:

"Las disposiciones legales transcritas evidencian la potestad del Ministerio Público para realizar todas las diligencias que estime necesarias en su labor de pesquisa, las cuales no pueden estar condicionadas por formalidades o prefiestas legalmente. Pues ello impediría el cabal cumplimiento de su actividad como director de la fase de investigación".

En cuanto a lo señalado por el Órgano Instructor de que los Jueces acusados adelantaron su opinión cuando en sentencia de fecha 13 de abril de 2004, exhortaron a los Fiscales Danilo Baltazar Anderson y Manuel Castillo, Fiscal del Ministerio Público con competencia Nacional y Fiscal Segundo de ese Ministerio respectivamente, a facilitar a los imputados las diligencias de la investigación; sostuvieron que tal aseveración parte de un falso supuesto, pues confunde el motivo primordial de la acción de amparo que fue intentada por los abogados de los imputados ante la Corte de Apelaciones a su cargo contra los prenombrados Fiscales, pues el fundamento de esa acción fue el argumento de los accionantes, quienes consideraron que por haberseles denominado "imputados" en la boleta de emplazamiento para que rindieran su declaración, se les había violentado el principio de presunción de inocencia.

Con la finalidad de descartar dudas sobre lo mencionado anteriormente, citaron un extracto de la decisión dictada por el Juzgado Primero de Primera Instancia en funciones de Juicio de ese mismo Circuito Judicial Penal, la cual declaró sin lugar la acción de amparo constitucional intentada por los representantes judiciales de los imputados contra el Fiscal Danilo Baltazar Anderson, que estableció lo que sigue:

"Esta jugadora entiende, que una vez que a un ciudadano se le instruye sobre la situación por la cual se le investiga, nacen para él todos los derechos y garantías del debido proceso, y que por el sólo de que se origina una investigación en su contra, no significa que se están vulnerando sus derechos, menos aún cuando ya se le ha impuesto la situación que se le atribuye (como en el presente caso), independientemente de la conformidad o no del imputado con esa situación, quien tiene otro mecanismo para objetarla, en caso de que la investigación prospere y sea conocida por el Tribunal".

Que la anterior declaratoria fue el origen por el cual esa Corte de Apelaciones advirtiera a los referidos Fiscales la posibilidad de que ante su negativa a facilitar a los imputados la consulta de la investigación, podían intentarse en su contra una acción de amparo constitucional por demás innecesaria; pues estos Fiscales fueron denunciados por no facilitar el acceso al expediente ni a los videos filmados con motivo del hecho que se les atribuía a los imputados; lo cual por demás fue resuelto por dicho Juzgado y decidido por esa Corte en los términos señalados.

Seguidamente procedieron a reproducir un extracto de la decisión del 13 de abril de 2004, específicamente el razonamiento que se hiciera al exhorto que fue hecho a los aludidos Fiscales, a saber: *"si se interpuso un amparo en razón a que en la boleta de emplazamiento se les mencionó como imputados, es de sospechar fundadamente que la negativa de facilitar las actas de investigación, generará una nueva acción de amparo por tal motivo. Ergo, para evitar tal eventualidad, creemos menester recomendar a los Fiscales permitan el acceso a la causa".*

Sostuvieron que es evidente que más que una falta a la ética profesional, como lo hace entrever la Inspectoría General de Tribunales, el exhorto hecho a los Fiscales del Ministerio Público por esa Corte de Apelaciones constituyó una acción lógica, ética, sana y ajustada a derecho. Asimismo destacaron que el derecho a la defensa como garantía inviolable para los investigados supone el acceso desde el inicio de la investigación a todas las actas que integran la causa, y sólo excepcionalmente de conformidad con lo establecido en el artículo 304 del Código Orgánico Procesal Penal, los actos de investigación sólo quedan reservados para terceros, pudiendo ser examinados por el imputado, sus defensores y por la víctima. Que igualmente este principio encuentra como excepción el decreto de reserva total o parcial de las actuaciones, circunstancia que aseguraron no ocurrir en este caso, señalando entonces que la violación del derecho al acceso de las actuaciones, genera una lesión a la defensa que afecta de nulidad los actos posteriores, citando también el contenido del artículo 191 eiusdem.

Sobre ese aspecto concluyeron que constituía una obligación de los Fiscales del Ministerio Público instructores del caso de autos, facilitar las actuaciones a los imputados a objeto de que éstos prepararan su defensa, e igualmente era un deber

de éstos Jueces respetar tal derecho, criterio que a su decir, fue compartido por el Órgano Instructor al señalar en el escrito acusatorio lo siguiente: *"... como Jueces de la Corte de Apelaciones, podían instar al Ministerio Público a que facilitaran a los imputados la consulta de las actuaciones..."*.

Insistieron en sostener que no habían adelantado opinión con el referido exhorto hecho a los prenombrados Fiscales del Ministerio Público y, para que la Inspectoría General de Tribunales pudiera considerarlo como una emisión de opinión, debía evidenciarse del contenido del fallo dictado el 13 de abril de 2004, por esa Corte de Apelaciones, que éstos expresaran que en el caso de intentarse una acción de amparo constitucional ante la negativa de facilitar las actuaciones a los imputados, ésta sería declarada con lugar o que la misma se decidiría a favor de los accionantes. Asimismo recordaron que en el caso de autos, al actuar como Jueces en Sede Constitucional, sus facultades son amplias y no se limitan al cumplimiento de principio dispositivo como sucede en la jurisdicción ordinaria, sino que sus competencias se extienden a la garantía de la constitucionalidad y legalidad, razón por la cual consideraron que el exhorto realizado a los aludidos Fiscales de la causa, constituyó una labor ajustada a derecho.

Consideraron que la solicitud de sanción por parte del Ministerio Público deviene de la tradicional rivalidad que ha existido entre ese Órgano y el Poder Judicial, la cual ha sido tan notoria, que hasta algunos autores han tratado este aspecto dentro de la evolución del proceso penal. Además de señalar que el Ministerio Público aún no ha podido asumir el cambio de rol que se ocasionó cuando el sistema inquisitivo paso a ser un sistema acusatorio, en el cual a su decir, si bien el titular de la acción penal es el referido Órgano, no es menos cierto que es al Juez, quien como garante de la legalidad y del respeto efectivo de los derechos de todas las partes en el proceso, controla el ejercicio de esa acción para asegurar que esté ajustada a derecho, determinando si procede o no la acusación y finalmente en fase de juicio, puede incluso cambiar la calificación jurídica dada por el mismo; citando al respecto la disposición establecida en el artículo 350 del Código Orgánico Procesal Penal.

Por esas razones manifestaron que como garantes de la legalidad y del orden constitucional, de forma muy respetuosa exhortaron a los Fiscales del Ministerio Público, a fin de evitar situaciones que pudieran hacer inefectivos los derechos y garantías del débil jurídico en el proceso judicial. En virtud de lo cual solicitaron sea declarada inadmisile la acusación presentada por el Órgano Instructor y en consecuencia se decrete el sobreseimiento de la presente causa.

III CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Acordada como punto previo a la celebración de la audiencia oral y pública, la división de la continenencia de la causa tal como quedó expuesto en la introducción de esta decisión al haber sido declarada injustificada la inasistencia del ciudadano Pedro Rafael Méndez Labrador, y en atención a las circunstancias de los Jueces Ada Raquel Caicedo y David Alejandro Cestari, presentes en el acto los cuales se encuentran actualmente en funciones judiciales y están obligados por este procedimiento a trasladarse desde la sede de sus Despachos a la ciudad de Caracas, por tener manifiesto interés en que el mismo sea resuelto.

Respecto al fondo de la presente causa, esta Comisión al analizar las actas que conforman el expediente disciplinario, observa que a la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida, le correspondió conocer en alzada de la apelación interpuesta por el ciudadano Marcos Avilio Trejo Contreras, ante el Tribunal Primero de Primera Instancia en funciones de Juicio de ese mismo Circuito Judicial Penal, referida a la causa judicial N° LP01-O-2004-000006, confirmando esa Corte en sentencia de fecha 13 de abril de 2004 (folios 46 al 56), el fallo dictado en Primera Instancia, en el cual se declaró sin lugar la acción de amparo constitucional intentada por el referido ciudadano contra el Fiscal Cuarto Ambiental del Ministerio Público con Competencia Nacional, abogado Danilo Baltazar Anderson.

No obstante esa Corte al confirmar la decisión dictada en Primera Instancia efectuó el siguiente señalamiento: *"En este sentido en aras de proteger el derecho que asiste a los imputados, es deber de esta Corte de Apelaciones exhortar al abogado DANILO ANDERSON, Fiscal del Ministerio Público con competencia Nacional, y al abogado MANUEL CASTILLO, Fiscal Segundo del Ministerio Público, a que faciliten a los imputados la consulta de la investigación que obra en su contra, y tramiten las diligencias de investigación que éstos exijan. La negativa de este derecho, dará lugar a la eventual interposición de una acción de amparo en su contra".*

A los folios 74 al 78 del expediente se evidencia que el ciudadano Danilo Baltazar Anderson, en su condición de Fiscal Cuarto del Ministerio Público con Competencia en Defensa Ambiental a Nivel Nacional, en comunicación de fecha 3 de mayo de 2004, entre otras consideraciones solicitó a los integrantes de la aludida Corte de Apelaciones que respetara la autonomía del Ministerio Público como titular de la acción penal, en estricto cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley Orgánica del Ministerio Público; que no proferiera amenazas infundadas e indebidas a ese Órgano y, que no se subrogara en la actividad propia de las partes, con el objeto de mantener la objetividad e imparcialidad que debía primar.

Consta a los folios 58 al 61 única pieza, que los Jueces acusados, en respuesta de la referida comunicación en oficio N° 633/04 de 7 de mayo de 2003, le manifestaron al referido Fiscal que debía imponerse del contenido de la decisión proferida por esa Corte, antes de emitir juicios de valor, por cuanto a diferencia de lo que expresó la Jueza de Instancia en su decisión, ellos sí consideraron que se había cometido una lesión constitucional en perjuicio de los accionantes en amparo, al no permitir dicho Fiscal el acceso a las actas de investigación, sin embargo sostuvieron los Jueces, que para la fecha en que se realizó la audiencia constitucional la violación había cesado, en virtud de ello, y atendiendo a la promesa que hiciera el Fiscal Danilo Baltazar Anderson a los imputados accionantes, lo cual constaba en el acta de la citada audiencia, de permitir el acceso a todos los elementos de prueba y tramitar con prontitud las solicitudes que éstos hicieran, fue que ellos le habían exhortado a cumplir su deber como Fiscal, evitando que se repitiese esa situación irregular y se intentara nuevamente acción de amparo constitucional.

En el mismo oficio le manifestaron al Fiscal que no se habían inmiscuido en las funciones del Ministerio Público, ni proferido amenazas, ni girado instrucciones de obligatorio cumplimiento que vulneraran su autonomía y, le recordaron el deber de respetar el Poder Judicial, utilizando en sus comunicaciones una terminología

acorde, digna y respetuosa y, le advirtieron que participarían de esa situación al Fiscal General de la República.

Asimismo se comprobó que tanto la copia certificada de la decisión dictada por esa Corte el 13 de abril de 2004, como las comunicaciones posteriores precedentemente señaladas, fueron remitidas por el Juez David Alejandro Cestari Ewing, el 10 de mayo de 2004, en oficio N° 635-04, al Director de Inspección y Disciplina del Ministerio Público, a los fines de que se tomaran los correctivos necesarios, por considerar que la comunicación dirigida por el prenombrado Fiscal a la Corte de la cual era miembro fue ofensiva y amenazante (folio 3)

Se observa también que el Tribunal Primero de Primera Instancia en funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida, aún cuando los accionantes en amparo manifestaron que les fue violentado el derecho al debido proceso, concretamente al acceso de las actuaciones en la causa judicial, cuyos alegatos fueron rechazados por el Fiscal Cuarto del Ambiente del Ministerio Público con Competencia Nacional, el referido Tribunal declaró que no se había configurado ninguna violación o amenaza a ningún derecho ni garantía constitucional y que por ende no existía ninguna situación que restablecer, pues los imputados habían rendido declaración y en el acto instructivo de cargos nacieron para ellos todos los derechos constitucionales y en dicho acto los imputados habían sido imputados del hecho punible que se les atribuye, por lo que declaró improcedente la acción de amparo constitucional intentada por el abogado Marcos Avilio Trejo y otros, contra el Fiscal Danilo Baltazar Anderson.

Asimismo se observa que la Corte de Apelaciones a cargo de los Jueces acusados, en sentencia del 13 de abril de 2004, tal como manifestaron en comunicación N° 633/04 de 7 de mayo de 2003, dirigida al Fiscal Danilo Baltazar Anderson (folios 58 al 61 única pieza), que aún cuando habían confirmado la decisión del Tribunal de la causa por considerar que la lesión constitucional había quedado suspendida, además de convalidada; éstos consideraron que para el momento en que fue intentada la acción de amparo constitucional existía una situación de evidente violación del debido proceso por parte del Fiscal Danilo Baltazar Anderson, en contra de los imputados accionantes, en razón de que se les había cercenado la posibilidad de imponerse de la investigación que obraba en su contra, antes de concurrir al acto de declaración; pero también expresaron que la situación era irreparable, pues en ese momento no servía de nada declarar la nulidad de dicho acto, ya que los vicios habían sido subsanados, y por cuanto las actas de la causa reposaban y continuaba su curso ante la Fiscalía Segunda del Ministerio Público del estado Mérida, con lo que se subsanaba la violación al debido proceso en razón de que se ponía a disposición de los imputados la consulta de la investigación, y fue inmediatamente después, que exhortó a los Fiscales Danilo Anderson y Manuel Castillo, a que facilitaran a los imputados la consulta de la misma y tramitaran las diligencias de investigación que éstos exigieran, pues la negativa de ese derecho podría dar lugar a que eventualmente se intentara acción de amparo constitucional en su contra

Ahora bien, establece el Código Orgánico Procesal Penal en su Libro Cuarto, referido a los Recursos, Título I, Disposiciones Generales, artículo 441 lo siguiente: "Competencia. Al tribunal que resuelva el recurso se le atribuirá el conocimiento del proceso, exclusivamente, en cuanto a los puntos de la decisión que han sido impugnados", y en su Libro Segundo, referido al Procedimiento Ordinario, Título I, Capítulo III prevé las disposiciones relativas al desarrollo de la investigación, estableciendo en su artículo 304 que los actos de la investigación serán reservados para los terceros y las actuaciones sólo podrán ser examinadas por el imputado, por sus defensores y por la víctima, se haya o no querellado, o por sus apoderados con poder especial. También prevé esta norma que el Ministerio Público podrá disponer de la reserva total o parcial de las actuaciones por un plazo que no podrá exceder de quince días continuos, lo cual deberá expresarse por acta motivada, siempre y cuando la publicidad entorpezca la investigación y, en casos excepcionales, el plazo se podrá prorrogar hasta por un lapso igual, pero en este caso, cualquiera de las partes, incluyendo a la víctima, podrán solicitar al Juez de Control que examine los fundamentos de la medida y ponga fin a la reserva.

El artículo 31 de la Ley Orgánica del Ministerio Público en concatenada relación con el artículo 285 del Texto Constitucional, consagra los deberes y atribuciones comunes a los Fiscales de ese Ministerio, estatuyéndose que éstos deben garantizar en los procesos judiciales y administrativos, en todas sus fases, el respeto de los derechos y garantías constitucionales, actuando de oficio o a instancia de parte.

Analizada la normativa legal vigente, esta Comisión estima que dentro de la potestad atribuida en el artículo 441 del Código Adjetivo Penal, correspondía al ámbito jurisdiccional de los integrantes de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida, en conocimiento de la apelación planteada en virtud de que el Juzgado de la causa había declarado sin lugar la acción de amparo constitucional intentada por el abogado de los imputados, esta Corte confirmó la misma, por considerar, entre otros aspectos, que aunque el Fiscal Danilo Baltazar Anderson, había violentado el derecho de los imputados, ya la lesión constitucional había cesado, lo cual no obstaba para que éstos exhortaran al Ministerio Público a que en lo sucesivo permitieran a los imputados el acceso a las actas, ya que como Directores del proceso tienen el deber de garantizar el cumplimiento efectivo de los derechos y garantías que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece a favor de los justiciables, los cuales deben ser garantizados en todos los procedimientos que se instauran, sean estos de carácter judicial o administrativo

Si bien los Jueces no deben intervenir ni obstruir la actuación del Ministerio Público, Órgano titular de la acción penal, por ser autónomo y tener amplias facultades en cuanto a la investigación y determinación de cualquier hecho punible, atribuciones éstas que están perfectamente previstas en el artículo 108 del Código Orgánico Procesal Penal, si pueden formular algunas observaciones referidas no sólo al proceso sino en la defensa y respeto de los derechos fundamentales de las partes dentro del proceso penal, pues como Órgano que tiene el monopolio de la acción penal en los delitos que le corresponde, pudieran aún inadvertidamente menoscabar algún derecho, y para ello debe existir un órgano que en estricto apego a la constitucionalidad formule las exhortaciones que estime procedentes, sin que esto signifique intromisión alguna, sobre todo cuando el único aparte del artículo 108 del Texto Constitucional establece "Cada una de las ramas del Poder Público tiene sus funciones propias, pero los órganos a los que incumbe su ejercicio colaborarán entre sí, en la realización de los fines del Estado (cursiva fuera de texto)

Siendo así, una manifestación de esa naturaleza, constituye un acto de colaboración interinstitucional, más aún en este caso pues tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público forman parte del Sistema de Justicia, y les une el interés de lograr en forma conjunta la recta administración de justicia. Por lo que analizado el contexto bajo el cual los integrantes de la aludida Corte hicieron una exhortación a los

abogados Danilo Baltazar Anderson, Fiscal del Ministerio Público con competencia Nacional y al abogado Manuel Castillo, Fiscal Segundo del mismo Órgano, a que en lo sucesivo permitieran a los imputados el acceso a las actas de la investigación que continuaba su curso en la Fiscalía Segunda del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Mérida, porque su negativa podía dar lugar a que eventualmente fuera intentada acción de amparo constitucional, como ya había sucedido en el caso que estaba bajo su conocimiento; esta Comisión considera que esta actuación no reviste carácter disciplinario, en consecuencia, absuelve del cargo imputado a los jueces Ada Raquel Caicedo Díaz y David Alejandro Cestari Ewing, y así se decide.

IV DISPOSITIVA

Con fundamento en los razonamientos de hecho y de derecho precedentemente expuestos, esta Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, por autoridad de la Ley, dicta los siguientes pronunciamientos:

PRIMERO: Se divide la continenia de la causa seguida contra los ciudadanos Ada Raquel Caicedo Díaz, David Alejandro Cestari Ewing y Pedro Rafael Méndez Labrador, los dos primeros actualmente en funciones como Jueces titulares integrantes de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida y el último quien fue Juez Provisorio miembro de esa Corte y actualmente no ejerce funciones en el Poder Judicial. En virtud de esta declaración, separadamente se le continuará el procedimiento al ciudadano Pedro Rafael Méndez Labrador, en la oportunidad que corresponda. **SEGUNDO:** ABSUELVE a los ciudadanos Ada Raquel Caicedo Díaz y David Alejandro Cestari Ewing, titulares de las cédulas de identidad números 9.246.896 y 9.317.671 respectivamente, de la acusación interpuesta por la Inspección General de Tribunales durante la tramitación de la causa judicial N° LP01-O-2004-000006, a la cual se adhirió el Ministerio Público.

Contra la presente decisión las partes podrán interponer recurso de reconsideración por ante esta Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial, dentro de los quince (15) días continuos siguientes a la fecha de la publicación del presente fallo, o el recurso contencioso administrativo de anulación por ante la Sala Política Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, dentro de los treinta (30) días continuos siguientes.

Publiquese en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Déjese constancia de esta decisión en el expediente personal de los ciudadanos Ada Raquel Caicedo Díaz y David Alejandro Cestari Ewing, los cuales reposan en la Oficina de la Dirección General de Recursos Humanos de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura.

Dada, firmada y sellada en la Sala Plenaria de la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial, en la ciudad de Caracas, a los diez (10) días del mes de abril de dos mil ocho (2008). Años: 197° de la Independencia y 148° de la Federación.

Los Comisionados,
DAMIÁN ADOLFO NIETO CARRILLO
Presidente
ALICIA GARCÍA DE NICHOLLS
Ponente
BELKIS USECHE DE FERNÁNDEZ
Comisionada Principal
GIOVANNA LANDER SALAZAR
Secretaria (Acc.)

En la(s) 2:40 pm de hoy 10 de abril de 2008.
Se ratificó la anterior decisión la cual queda registrada bajo el N° 010-2008

FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO PUBLICO

Despacho de la Fiscalía General de la República
Caracas, 08 de abril de 2008

Años 197° y 149°
RESOLUCION
N° 271

LUISA ORTEGA DIAZ, Fiscal General de la República, en ejercicio de las atribuciones conferidas en los artículos 6, 25 numeral 3, y 54 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y 37 del Estatuto de Personal

GACETA OFICIAL

DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA
DE VENEZUELA
DEPOSITO LEGAL ppo 187207DF1

AÑO CXXXV — MES VII Número 38.921

Caracas, miércoles 30 de abril de 2008

www.gacetaoficial.gov.ve
San Lázaro a Puente Victoria N° 89
CARACAS - VENEZUELA

Tarifa sujeta a publicación de fecha 14 de noviembre de 2003
en la Gaceta Oficial N° 37.818

Esta Gaceta contiene 32 Págs. costo equivalente
a 13,25 % valor Unidad Tributaria

LEY DEL 22 DE JULIO DE 1941

Art. 11.- La GACETA OFICIAL, creada por Decreto Ejecutivo del 11 de octubre de 1872, continuará editándose en la Imprenta Nacional con la denominación GACETA OFICIAL DE LA REPUBLICA DE VENEZUELA.

Art. 12.- La GACETA OFICIAL DE LA REPUBLICA DE VENEZUELA, se publicará todos los días hábiles, sin perjuicio de que se editen números extraordinarios siempre que fuere necesario; y deberán insertarse en ella sin retardo los actos oficiales que hayan de publicarse.

Parágrafo Unico.- Las ediciones extraordinarias de la GACETA OFICIAL tendrán una numeración especial.

Art. 13.- En la GACETA OFICIAL DE LA REPUBLICA DE VENEZUELA, se publicarán los actos de los Poderes Públicos que deberán insertarse y aquéllos cuya inclusión sea conveniente por el Ejecutivo Nacional.

Art. 14.- Las Leyes, Decretos y demás actos oficiales tendrán carácter de públicos por el hecho de aparecer en la GACETA OFICIAL DE LA REPUBLICA DE VENEZUELA, cuyos ejemplares tendrán fuerza de documentos públicos.

EL DIRECTOR GENERAL DE LA IMPRENTA NACIONAL Y GACETA OFICIAL DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA advierte, que esta publicación se procesa por reproducción fotomecánica directa de los originales que recibe del Consejo de Ministros, originados en los diferentes Despachos de la Administración Pública y que por consiguiente, sus trabajadores gráficos no son responsables de inserciones cuyos originales lleguen en forma defectuosa.

A LA VENTA

- Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
- Ley de Creación, Estímulo, Promoción y Desarrollo del Sistema Microfinanciero,
- Ley Orgánica de Telecomunicaciones,
- Compendio - Ley de Creación, Estímulo, Promoción y Desarrollo del Sistema Microfinanciero - Ley Especial de Asociaciones Cooperativas,
- Ley de Tierras y Desarrollo Agrario,
- Ley Orgánica de Hidrocarburos,
- en las taquillas de la Gaceta Oficial

del Ministerio Público, dictado mediante Resolución N° 60 del 04-03-99, publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 36.654 de la misma fecha, por la presente Resolución.

RESUELVO:

UNICO: Se designa **ABOGADO ADJUNTO I** al ciudadano **ISRAEL EFRAIN PEREZ VASQUEZ**, titular de la cédula de identidad N° 13.482.033, en la Dirección de Fiscalías Superiores, adscrita a la Vice-

Fiscalía General de la República. El referido ciudadano se viene desempeñando como Abogado Adjunto I en la Dirección de Inspección y Disciplina, adscrita a la Dirección de Actuación Procesal de este Despacho. El presente nombramiento, tendrá efectos administrativos a partir del 16 de abril de 2008.

Regístrese, Comuníquese y Publíquese.


LUISA ORTEGA DIAZ
Fiscal General de la República